



REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE
DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS

Resolución SRVR-012-RESOLUCIÓN-CONCLUSIONES-CASO-01

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2025

Radicación	Caso No. 01 “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.
Asunto	Resolución de conclusiones respecto de los comparecientes individualizados en el Auto No. 023 del 12 de febrero de 2024 del Secretariado de las FARC-EP.

ASUNTO

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, (en adelante SRVR o Sala de Reconocimiento), en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, procede a emitir la resolución de conclusiones a la que se refiere el literal m del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz -LEAJEP-), el artículo 27d de la Ley 1922 de 2018 (Ley de Procedimiento de la JEP), y el numeral 48 del Subpunto 5.1.2. del Acuerdo Final de Paz.

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES PROCESALES	2
II. CONSIDERACIONES	10
A. COMPETENCIA.....	10
B. HECHOS Y CONDUCTAS DETERMINADOS POR LA SALA DE RECONOCIMIENTO EN EL AUTO 23 DE 2024.....	12
B.1 Contexto	13
B.2 Patrones de hechos no amnistiabiles identificados por la Sala	30
B.3 Calificación jurídica propia de los hechos y conductas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas.....	47
B.4 Individualización de responsabilidades de los comparecientes realizada en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024	59
C. RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÚLTIMO SECRETARIADO DE LAS FARC-EP	76
C.1. Estándar de reconocimiento en la SRVR.....	76
C.2. Análisis y valoración del reconocimiento individual	82
D. PROYECTO DE SANCIÓN PROPIA	104
D.1. Marco normativo de las sanciones propias en la justicia transicional	104
D.2. Propuestas sobre los componentes restaurativo y retributivo de la sanción propia formuladas por las víctimas y por los comparecientes.....	109
III. DECISIÓN	146

I. ANTECEDENTES PROCESALES

1. El 4 de julio de 2018, mediante Auto No. 02, la Sala de Reconocimiento avocó conocimiento del Caso No. 01, a partir de los informes recibidos hasta el 21 de junio de 2018. Tras recibir los primeros informes la Sala procedió a aplicar la metodología de priorización prevista en el documento de política “Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones”. Luego de este ejercicio resolvió agrupar, concentrar y priorizar en

el Caso No. 01 los secuestros atribuibles a la extinta guerrilla FARC-EP, a partir del Informe No. 2 de la Fiscalía General de la Nación (en adelante la Fiscalía o la FGN), denominado por esta “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, complementado por el Informe No. 1, “Inventario de investigaciones por hechos relacionados con el conflicto armado”.

2. El Auto No. 02 fue notificado el 13 de julio de 2018 en diligencia a los antiguos miembros del Estado Mayor de la extinta guerrilla FARC-EP. En esta diligencia la Sala de Reconocimiento decretó abierta la etapa de “reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas”, para lo cual trasladó a los comparecientes los informes relacionados con el Caso No. 01 con sus anexos e insumos complementarios.

3. El 12 de diciembre de 2018 la Sala de Reconocimiento corrió un segundo traslado a los comparecientes y a la Procuraduría Primera Delegada ante la JEP de los informes adicionales entregados por organizaciones de la sociedad civil y de víctimas organizadas recibidos con posterioridad a la apertura del Caso No. 015. Además, inició el primer ejercicio de contrastación de informes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79(e) de la LEAJEP.

4. El 17 de enero de 2019, de conformidad con el artículo 27(b) de la Ley 1922 de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 02 de 2019. En esta providencia la Sala ordenó comparecer a la diligencia de versión voluntaria a los 31 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP que habían sido inicialmente notificados. El auto fue confirmado en su integridad por medio del Auto No. 016 del mismo año.

5. El 5 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 27(b) de la Ley 1922 de 2018, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto No. 06 de 2022. En esta providencia la Sala ordenó comparecer a la diligencia de versión voluntaria a dos miembros del Secretariado de la antigua guerrilla de las FARC-EP que habían sido inicialmente notificados. El auto fue confirmado en su integridad por medio del Auto No. 028 del mismo año.

6. El primer semestre de 2022 la Sala escuchó las versiones individuales de dos comparecientes, conforme al calendario establecido. En estas versiones voluntarias se siguieron los parámetros fijados por la Sala en las providencias mencionadas anteriormente. En todas las diligencias participó también la Procuraduría Delegada ante la JEP, en representación de las víctimas y de la defensa del orden jurídico.

7. De este modo, los comparecientes individualizados en el Auto No. 023 de 2024 acudieron a versión voluntaria individual de la siguiente manera: Laureano Serna Abdala los días 5 y 6 de abril de 2022 y Ainhoa Etxebarría García el día 27 de abril de 2022. Estas diligencias se llevaron a cabo en la sede de la JEP de la ciudad de Bogotá.

8. El despacho en movilidad en el Caso No. 01 inició un proceso de pedagogía para materializar los derechos de acceso a la justicia y a la participación efectiva de las víctimas, informándolas de su derecho a acreditarse como intervinientes especiales en el Caso No. 01, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018. Por medio de los autos del 12 de julio y de 6 de agosto de 2019, se ordenó la fijación de un edicto emplazatorio indicando a las víctimas su oportunidad de solicitar ser reconocidas como intervinientes especiales en el Caso No. 01. A lo largo de 2019 y 2022 se realizaron 300 jornadas de atención a víctimas en diversos municipios del país y una jornada internacional en San José de Costa Rica, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV). Estas jornadas incluyeron campañas pedagógicas a través de cuñas radiales, así como de material audiovisual e impreso. El 18 de febrero de 2019, la Sala inició el proceso de acreditación de víctimas como intervinientes especiales en el Caso No. 01, en aplicación de la Ley 1922 de 2019. Desde esta fecha, y con corte a octubre de 2025, en el Caso No. 01 se han acreditado 3516 víctimas.

9. La SRVR adelantó una estrategia comprehensiva para la definición del proyecto de sanción propia de los comparecientes. Para ello, realizó distintas verificaciones y requirió a la Secretaría Ejecutiva a efectos de obtener información sobre los comparecientes y la oferta pública institucional que fuera útil al diseño de los proyectos restaurativos. Así

mismo se encargó de la recepción y revisión de iniciativas de reparación colectiva y propuestas de sanciones propias presentadas por representantes comunes de víctimas.

10. El 30 de mayo de 2019 el Despacho solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación -UIA- de la JEP realizar un análisis global de la posible situación de riesgo de los entonces comparecientes del Caso No. 01. La UIA presentó su informe final de riesgo colectivo el 16 de octubre de 2019 mediante radicado 20192000327403. Así, en Auto del 18 de marzo de 2020, la Sala de Reconocimiento le ordenó a la Unidad Nacional de Protección -UNP- implementar de manera inmediata y completa los esquemas de protección vigentes a los exintegrantes del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las FARC-EP, otorgando un término de 07 días hábiles para informar el cumplimiento de la orden. También le ordenó a la UNP en su numeral segundo, dado el resultado del informe de riesgo, reforzar la seguridad de los exintegrantes del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla de las FARC-EP en sus residencias y lugares de trabajo, otorgando un término de 10 días hábiles para informar a la Sala sobre su cumplimiento, entre otras determinaciones.

11. Durante este segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, el despacho relator, como parte de su labor de contrastación de informes y versiones voluntarias, profirió tres autos, a través de los cuales ordenó la realización de una serie de entrevistas y declaraciones juramentadas a personas que, por razón de sus cargos públicos o trabajos en organizaciones de interés público, tenían información que permitiría profundizar en las narraciones de los hechos y conductas objeto de contrastación en el Caso No. 01.

12. El 11 de noviembre de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4 del artículo 27 D de la Ley 1922 de 2018, el despacho relator del Caso No. 01, fijó la metodología de traslado y presentación de observaciones de las víctimas acreditadas a las versiones voluntarias individuales y colectivas realizadas hasta la fecha. Así, las víctimas pudieron escoger entre las siguientes opciones (no excluyentes entre sí) para hacer sus observaciones: (i) asistir a la jornada territorial de observaciones realizada en Montería, Córdoba o en la jornada nacional que se realizó el 13 de enero de 2022 en Bogotá; (ii) recibir un traslado personal en las instalaciones de la JEP; (iii) recibir un traslado en línea, a través de la plataforma digital habilitada por la JEP para ese fin. Así mismo, las víctimas

acreditadas pudieron hacer sus observaciones por escrito o a través de un formulario en línea.

13. El 15 de junio de 2022 el despacho relator recibió de los comparecientes respuesta al Auto 043 de 3 de mayo de 2022, que ordenaba la ampliación escrita de la versión colectiva entregada por el Bloque La Mojana de las FARC-EP, a partir de un cuestionario concreto. Las preguntas estaban dirigidas a recibir aportes de verdad sobre la conformación del Estado Mayor del bloque y sus frentes, así como la integración de las distintas comisiones y carteras.

14. El 26 de enero de 2021 la Sala de Reconocimiento, profirió el Auto de Determinación de Hechos y Conductas 019 de 2021 en el que determinó los hechos y conductas del Caso No. 01 en lo que respecta a la responsabilidad individual de una parte de los miembros del antiguo Secretariado de las FARC-EP, al contar con suficiente información producto de la contrastación de informes, versiones voluntarias y otras fuentes de información. En esa providencia, la Sala estableció que, una vez escuchadas las versiones voluntarias individuales y de haber culminado el ejercicio de contrastación de información sobre los 8 comparecientes miembros del antiguo Secretariado de la extinta guerrilla FARC-EP, su responsabilidad se concentró en la toma de decisiones y en la expedición de órdenes que llevaron a la comisión de crímenes graves no amnistiabiles. Es decir, la Sala determinó que contaba con bases suficientes para afirmar que: (i) efectivamente existieron, (ii) que tuvieron relación con el conflicto armado y (iii) que corresponden a hechos y conductas que no son amnistiabiles: los más graves y representativos del conflicto armado. Estos hechos y conductas corresponden, especialmente, a la toma de rehenes, como crimen de guerra, y a las privaciones graves de la libertad, como crimen de lesa humanidad.

15. Posteriormente, el 12 de febrero de 2024 la Sala de Reconocimiento, profirió el Auto de Determinación de Hechos y Conductas 023 de 2024 en el que determinó los hechos y conductas del Caso No. 01 en lo que respecta a la responsabilidad individual de Laureano Serna, como ex miembro del Secretariado de las FARC-EP y Ainhoa Etxhebarría por su responsabilidad nacional en la configuración del segundo patrón identificado por la Sala, al contar con suficiente información producto de la contrastación de informes, versiones

voluntarias y otras fuentes de información. En esa providencia, la Sala estableció que, una vez escuchadas las versiones voluntarias individuales y haber culminado el ejercicio de contrastación de información, su responsabilidad se concentró en la toma de decisiones y en la expedición de órdenes que llevaron a la comisión de crímenes graves no amnistiables. Es decir, la Sala determinó que contaba con bases suficientes para afirmar que: (i) efectivamente existieron, (ii) que tuvieron relación con el conflicto armado y (iii) que corresponden a hechos y conductas que no son amnistiables: los más graves y representativos del conflicto armado. Estos hechos y conductas corresponden, especialmente, a la toma de rehenes, como crimen de guerra, y a las privaciones graves de la libertad, como crimen de lesa humanidad.

16. Además, en el Auto 023 de 2024, la Sala calificó las conductas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, relativos a los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente. Individualizó como coautor mediato por estos hechos a Laureano Serna Abdala, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.276.584 y a Ainhoa Etxebarria identificada con cédula de extranjería 570987 como coautora mediata en aparatos organizados del poder.

17. La Sala puso a disposición de estos comparecientes los hechos y las conductas determinados, con el fin de que estos manifestaran su decisión de reconocer o no los hechos y su responsabilidad sobre los mismos. También, les requirió presentar toda la información disponible hasta el momento y un plan para continuar con la búsqueda, localización e identificación y entrega de las personas dadas por desaparecidas, así como para satisfacer las demandas de verdad y de reconocimiento que les fueron formuladas de manera directa por las víctimas acreditadas en el Caso No. 01. La Sala también puso a disposición de las víctimas acreditadas y de la Procuraduría Delegada el Auto 023 de 2024, con el fin de que presentaran sus observaciones, aportaran pruebas respecto de los hechos y conductas o sobre la participación de los comparecientes individualizados, si lo estimaban necesario.

18. Cumplido el término estipulado, la Sala recibió el escrito de respuesta de los comparecientes individualizados en el Auto 023 de 2024. En la misma fecha, la Sala recibió observaciones al Auto por parte de los representantes comunes de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación.

19. El 6 de junio de 2024, mediante el Auto SRVR-3094-MC-01-2024, el despacho relator del caso corrió traslado entre los sujetos procesales e intervinientes especiales del escrito de respuesta al Auto 023 de 2024 entregado por los comparecientes, así como de los escritos de observaciones presentados por las víctimas acreditadas y sus representantes comunes y por la Procuraduría.

20. El 15 de septiembre de 2024 el despacho relator profirió el Auto 288, mediante el cual trasladó a los comparecientes, su defensa y a la Procuraduría Delegada ante la JEP el segundo Auto de sistematización y análisis de las observaciones de las víctimas acreditadas a las versiones voluntarias del Caso.

21. El 29 de diciembre de 2024, mediante Auto SRVR-3099-MC-01-2024, la Sala de Reconocimiento en pleno se pronunció de fondo sobre las observaciones al Auto 023 de 2024 presentadas por sujetos e intervinientes especiales, que le correspondían por competencia. Así, la Sala de Reconocimiento abordó las observaciones relativas a: (i) los hechos determinados y la construcción de patrones; (ii) la calificación jurídica de las conductas y la atribución de responsabilidad a los comparecientes individualizados; y (iii) otras solicitudes varias que suponían reconsideraciones sobre la determinación realizada en el Auto 023 de 2024 o que no estaban previamente incluidos en él. Entre otros, la Sala resolvió sobre la solicitud de aclaración de los efectos del Auto de Determinación de Hechos y Conductas presentada por la representante judicial del SAAD Víctimas, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

22. El 21 de abril de 2025, mediante Auto SRVR-2104-MC-01 de 2024, la Sala de Reconocimiento decretó la realización de la audiencia pública de reconocimiento a la que se refiere artículo 80, inciso 4, de la Ley 1957 de 2019, el artículo 27c de la Ley 1922 de 2018 y el numeral 47 del Subpunto 5.1.2. del Acuerdo Final de Paz. En dicho Auto la Sala

estableció que los miembros de las extintas FARC-EP, individualizados en el Auto 023 de 2025, debían reconocer de manera pública los crímenes graves cometidos en el conflicto armado, en el marco del Caso No. 01, programando la audiencia para los días 13 y 14 de mayo de 2025. La Sala estableció, con fundamento en el carácter restaurativo y dialógico del proceso transicional, los componentes del estándar de reconocimiento, compuesto en su núcleo básico por tres dimensiones: la dimensión fáctica, la dimensión jurídica y la dimensión restaurativa. En este mismo Auto, la Sala facultó al despacho relator a decretar la organización de la audiencia, la fijación de la metodología y su publicación, así como las condiciones de participación de las víctimas, y el lugar para su realización.

23. La Sala de Reconocimiento recopiló todas las propuestas de sanción hechas por las víctimas desde el inicio de su participación como intervinientes en el Caso No. 01, y fueron socializadas por la magistratura con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y con la defensa de los comparecientes, el 01 de marzo de 2025. El despacho trasladó un documento síntesis de las propuestas y de la presentación hecha por la magistrada que sistematizó doscientas noventa (290) propuestas hechas por las víctimas o a través por sus representantes, o la Procuraduría General de la Nación, en informes, observaciones escritas, audiencias de observaciones, comunicaciones indistintas dirigidas al despacho y escritos de reacción al reconocimiento hecho por los comparecientes en la audiencia de reconocimiento, así como al proyecto de sanción presentado por ellos. Ello con el fin que los comparecientes, con el acompañamiento y veeduría de la Misión de Verificación y de la Procuraduría General, incluyeran estas consideraciones en el proyecto de sanción, en caso de que optaran por hacer a la Sala un proyecto de este tipo.

24. La audiencia de reconocimiento implicó la puesta en marcha de un proceso restaurativo de preparación en el que participaron víctimas, comparecientes, sus abogados y personas de apoyo. Este proceso contempló la elaboración de una metodología con enfoque psicosocial y restaurativo bajo la orientación del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) que involucró la realización de 40 sesiones de preparación — en modalidad virtual y presencial — junto al acompañamiento psicosocial de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Igualmente se realizó un taller psicosocial previo a la diligencia en donde las víctimas se encontraron por primera vez con los comparecientes.

25. En esta audiencia pública participaron un total de 15 víctimas que fueron seleccionadas por parte del grupo de Análisis de la Información -GRAI- a través de la aplicación de criterios de ejemplificación o ilustración de los patrones determinados por la Sala, con el fin de que representaran la diversidad de las víctimas del secuestro y que se le relatara al país de manera directa lo que les pasó a ellas mismas y a sus familiares. El primer día de audiencia se abordó el reconocimiento del patrón de macrocriminalidad de canje humanitario y el segundo de control social y territorial.

26. Posterior a la audiencia de reconocimiento, las víctimas y sus representantes presentaron escritos de observaciones a dicha diligencia y respecto a todos los aspectos relacionados con la resolución de conclusiones. Posteriormente, mediante Auto SRVR-6542-MC-01 del 2025 el despacho trasladó a los comparecientes individualizados en el Auto 023 de 2024, estos los escritos de observaciones. Este traslado incluyó los escritos o solicitudes presentadas por las víctimas y la Procuraduría respecto de las sanciones propias o proyectos restaurativos que han sido presentados en diversos momentos del caso y que reposan en el expediente. En esta providencia, además, el despacho solicitó a los comparecientes que, en el caso de que quisieran usar tal posibilidad, allegaran a la Sala de Reconocimiento sus proyectos de sanción propia o restaurativa y la información relacionada con Trabajos, Obras o Actividades con contenido Reparador y/o Restaurativo (en adelante: TOAR) que estimaran pertinente, en el término de 15 días hábiles.

27. La Sala de Reconocimiento ha hecho público que el Caso No. 01 continuará con la comparecencia de los exmiembros de las antiguas FARC-EP que ocuparon otros cargos de importancia a nivel nacional y regional, y los guerrilleros rasos involucrados en conductas comprendidas por el Caso.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA



28. El punto 5.1.2.III.48 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante: Acuerdo Final de Paz, Acuerdo Final, o AFP,) y el artículo 79 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP 1957 de 2019, (en adelante Ley Estatutaria de la JEP o LEAJEP), y el artículo 27 de la Ley de Procedimiento de esta Jurisdicción (Ley 1922 de 2018) establecen que la SRVR, debe “(p)resentar resoluciones de conclusiones ante el Tribunal de conformidad con el listado de sanciones que corresponden a las respectivas conductas reconocidas”. Adicionalmente, estas mismas normas establecen que la Sala deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas “(a) efectos de emitir su resolución”. Así, esta resolución debe incluir la identificación de los casos más graves y las conductas o prácticas más representativas, la individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, la calificación jurídica de las conductas, los reconocimientos de verdad y responsabilidad y el proyecto de sanción propuesto de acuerdo con listado previsto en el artículo 143 de la Ley 1957 de 2019.

29. El Punto 5.1.2.III.48. del Acuerdo Final de Paz y el artículo 79 de la Ley Estatutaria de la JEP señala que la Sala presentará en una sola resolución las conclusiones que sobre una misma persona obren en la Sala por las diversas conductas de las que se tenga conocimiento. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que la Sala de Reconocimiento puede emitir resoluciones de conclusiones parciales con fundamento en sus facultades de distribución de trabajo. Así, la Corte Constitucional señaló que la expresión “una sola resolución (...) no impide la ampliación de las conclusiones sobre una misma persona a efectos de garantizar la atribución de responsabilidad por las diversas conductas de las que la SRVR tenga conocimiento, de acuerdo con su facultad de organizar sus tareas y fijar prioridades”.

30. Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento señaló en su Resolución de Conclusiones No. 1 de 2022, en el marco del Caso No.03, que:

“Dada la masividad de los crímenes cometidos, como ha quedado demostrada en los autos de apertura de los 10 macrocasos de esta Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, tener que esperar a reunir todas las posibles

conclusiones finales sobre una misma persona para poder expedir una Resolución de Conclusiones, significaría seguramente que la primera resolución de la Sala sólo podría expedirse al término de su propia existencia (15 años). Esto comprometería no sólo los derechos de la sociedad colombiana y de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino que prácticamente paralizaría a toda la JEP por 10 o 15 años, en la medida en que las resoluciones de conclusiones de la Sala de Reconocimiento son presupuesto sine qua non para que el Tribunal para la Paz pueda dictar sentencia e imponer las sanciones que corresponda. La ausencia de sentencias comprometería a su vez la legitimidad de esta Jurisdicción Especial para la Paz y con ella la de la consolidación de la transición hacia la paz. Además, mantendría en vilo a los comparecientes procesados por 15 años, vulnerándose así su propia seguridad jurídica”

31. En este orden de ideas, la Sala de Reconocimiento es competente para adoptar la presente resolución parcial de conclusiones, en la cual se incluyen los hechos y conductas determinados por la Sala en el marco del caso No.01 que son responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las FARC-EP, y que fueron reconocidos por estos. La Resolución es parcial por cuanto a estos comparecientes aún se le pueden imputar hechos y conductas de otros macrocasos adelantados por la Sala, pero no es una resolución única por compareciente en lo que respecta al Caso No.01. A continuación, se describen cuáles fueron estos hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento y los modos de responsabilidad imputados, y reconocidos por los comparecientes que pertenecieron al último Secretariado de las FARC-EP.

B. HECHOS Y CONDUCTAS DETERMINADOS POR LA SALA DE RECONOCIMIENTO EN EL AUTO 23 DE 2024

32. Luego de haber descrito los antecedentes del procedimiento adelantado en el Caso No. 01 y establecer la competencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para dictar su Resolución de Conclusiones, en este capítulo se ofrece un breve resumen del Auto No. 23 del 12 de febrero de 2024. En esta providencia se determinaron los hechos y conductas que son responsabilidad de Laureano Serna Abdala

y Ainhoa Etxebarria García, como miembros de las extintas FARC-EP, en particular aquellas que resultaron en la comisión de crímenes no amnistiables.

33. El Auto 023 de 2024, a partir de definiciones legales de patrón y política, realizó, primero, una relación de la escala o magnitud de los hechos. En seguida, clasificó las políticas adoptadas por la organización armada según sus propósitos (forzar el canje por guerrilleros, controlar territorios y poblaciones), realizó la calificación jurídica de las conductas e identificó a los máximos responsables. A continuación, se hace un resumen de este Auto.

B.1 Contexto

34. En este apartado se caracteriza la estructura jerárquica del extinto grupo guerrillero FARC-EP determinada por la Sala de Reconocimiento, Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024. Allí se determinó: (i) la función del Secretariado y el tipo de órdenes que profirió; (ii) la estructura interna del Bloque La Mojana, su Estado Mayor, su comandante y sus comisiones; y (iii) la estructura y funcionamiento de la Columna Móvil “El Cóndor Herido”.

B.1.1. La función del Secretariado y el tipo de órdenes que impartía

B.1.1.1. Carácter militar-burocrático de la organización y posición del Secretariado en la cadena de mando

35. La Sala de Reconocimiento determinó, a partir de la contrastación de versiones voluntarias, documentos rectores de la organización, entrevistas a desmovilizados y fuentes académicas¹, que las FARC-EP fueron una organización militar de tipo burocrático

¹ Entrevista alias César 25/06/09. Exintegrante Compañía Efraín Guzmán del Bloque Caribe CODA 1517 de 2009. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo XLVIII. Bogotá D.C. Pág 115.; Ortiz, D. Las FARC después de Marulanda: ¿extinción estratégica o transformación organizativa? Instituto Real Elcano. Área: América Latina- ARI N° 139. 2008.

con tres niveles de mando claramente diferenciados a nivel jerárquico.² Por un lado, a nivel nacional la dirección correspondía al Estado Mayor Central (EMC) y su Secretariado³. En el plano regional, el mando lo ejercían los comandantes de bloque y sus estados mayores. Y finalmente en el plano local, la ejercían los comandantes de frente y sus estados mayores de frente (EMF). Por debajo de los frentes se encontraban las columnas, compañías, guerrillas y escuadras, así como las comisiones de diversa naturaleza.⁴

36. El Secretariado fue el órgano de dirección de mayor continuidad operativa, pues su existencia data de la V Conferencia Nacional Guerrillera llevada a cabo en 1974. En dicha Conferencia, se estableció que su composición estaría conformada por entre tres y siete miembros. A partir de 1982, con la celebración de la VII Conferencia Nacional Guerrillera el Secretariado quedó integrado por siete miembros que de manera paralela eran coordinadores a su vez de los siete bloques de frentes y comandos conjuntos creados en ese mismo año.

37. De esta forma, los plenos del Estado Mayor Conjunto tomaban decisiones únicamente cuando estaban reunidos, lo cual solo pudo pasar después de la VIII Conferencia Guerrillera de 1993. En consecuencia, el Secretariado contaba con autoridad y autonomía para evaluar y orientar el cumplimiento del “Plan Estratégico”⁵ en todo el país.

² Para un análisis comparativo de esta forma de organizarse frente a la organización de otras guerrillas en Colombia ver: Gutiérrez Sanin F. FARC's militaristic blueprint En: Small Wars and Insurgencies. England. 2018 Volumen 29. Issue 4. Pág 629-653.

³ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo XXX. Génesis Bloque Occidental. Bogotá D.C. 2017. Pág. 125.

⁴ Veinticuatro hombres conforman una guerrilla, más sus mandos, comandante y reemplazante, para un total de 26 hombres. Así mismo aplica para los demás niveles.

⁵ El Plan Estratégico, también conocido como la “Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia” constituyó el proyecto político-militar de largo plazo de las FARC-EP, cuyo objetivo central era la toma del poder por vía armada con Bogotá como objetivo final. No se trató de un documento único, sino de un horizonte estratégico que se fue precisando y ajustando a lo largo de sucesivas Conferencias Nacionales Guerrilleras (CNG) y plenos del Estado Mayor Central. A partir de la VII CNG de 1982, el Plan ordenó la formación de nuevos frentes para realizar un despliegue territorial que concentraba las estructuras guerrilleras en torno a la Cordillera Oriental, haciendo un cerco sobre Bogotá. Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis FARC-EP. Tomo II. Documentos Rectores FARC-EP. Conclusiones de la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera. Pág. 189. El Plan Estratégico se consolidó en el “Plan a ocho años”, que planteaba la toma del centro de poder en la capital. Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis FARC-EP. Tomo IX. Cartillas FARC-EP. Líneas generales del Plan Militar Estratégico de Ocho Años, julio 89 al 97. Bogotá D.C. 2017. Pág. 195.

Al pasar el tiempo y dadas las dificultades para que el EMC se pudiera reunir, el Secretariado asumió cada vez más las funciones del EMC, lo que permitió el funcionamiento de la organización a partir de las decisiones del Secretariado⁶.

B.1.1.2. Tipos de órdenes que emanaban del Secretariado

38. La Sala de Reconocimiento determinó que el Secretariado, cuando no estaba reunido el Estado Mayor Central, podía ejercer tres tipos de mando que se traducían en modalidades diferenciadas de órdenes a saber:

- a. **Decisiones estratégicas.** Contaba con autoridad y autonomía para evaluar y orientar el cumplimiento del “Plan Estratégico” en todo el país. Tomaba decisiones relativas a los objetivos de la organización y al modo general de alcanzarlos, especialmente cuando el Estado Mayor Conjunto no estaba reunido. Entre esas decisiones estratégicas figuran la política de privación de la libertad para financiación, adoptada desde la VII CNG de 1982; la política de canje de rehenes, cuyo mantenimiento fue ratificado en el pleno del EMC de 1997; y la comunicación del año 2001 de extender la privación de la libertad a figuras políticas civiles para forzar el intercambio.
- b. **Decisiones operacionales y tácticas.** Aunque formalmente estas acciones correspondían a los bloques y frentes, en la práctica el Secretariado tomaba con frecuencia determinaciones de orden táctico y operacional. El coordinador de bloque, figura que se instituyó en la VIII CNG, era el miembro del Secretariado asignado a cada bloque y ejercía sobre él un control estricto a nombre del organismo colegiado. Estaba en comunicación permanente de doble vía con el comandante del bloque, recibía informes periódicos lo que incluía informes contables trimestrales. El coordinador

⁶ El Secretariado está compuesto por integrantes del Estado Mayor Central y escogidos por éste. Es el Secretariado quien tiene el poder de tomar decisiones cuando el Estado Mayor no está reunido. No obstante, su naturaleza es más de carácter ejecutivo, en tanto es el encargado de direccionar los planes previamente establecidos por el Estado Mayor Central”. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de informes. Informe Planes y políticas FARC. Presentado por la FGN. 2016. Bogotá D.C. Pág. 20; “(...) el Secretariado no era, no era mucha gente, no, digamos no, era, y se podía ir y la decisión era estar juntos discutiendo, porque recuerden que era el mecanismo ejecutivo el Estado Mayor no se podía estar reuniendo y tenía que estar el Secretariado estar definiendo” En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión individual de Rodrigo Londoño el 14/02/2019. Bogotá D.C. Transcripción. Pág. 90.

del bloque transmitía orientaciones según el orden jerárquico de la cabeza hasta las subunidades. Los comparecientes describieron este flujo con precisión en sus versiones voluntarias.

- c. **Decisiones de control disciplinario y ascensos.** El Secretariado tenía la facultad de designar y degradar a miembros de los estados mayores de bloque, comandos conjuntos y frentes; decidir sobre resoluciones de fusilamiento en el marco de consejos de guerra; otorgar ascensos; y modificar planes estratégicos cuando fuera necesario. Asimismo, centralizaba las finanzas. Desde el Pleno de 1984, toda decisión financiera debía ser consultada con el Secretariado, las comisiones de finanzas de cada frente le rendían cuentas trimestralmente, y él controlaba rubros de infraestructura, viáticos, armas y donaciones.

B.1.1.3. Principios organizativos que aseguraban el cumplimiento de las órdenes

39. Las distintas fuentes consultadas por la Sala coinciden en afirmar que el funcionamiento de las FARC-EP era uniforme ya que su composición se repite a diferentes escalas, de manera que el componente más pequeño sigue los mismos principios de funcionamiento que la organización en su conjunto. Tanto los informes de la Fiscalía como los documentos internos de la organización, complementados por las versiones voluntarias, coinciden en que el funcionamiento estaba guiado por principios ideológicos y organizativos que resultaban en un ejercicio más o menos uniforme. Esto también es parte de la forma de organización militar-burocrática. Los principios eran fundamentalmente:

- Centralismo democrático o democracia interna: las decisiones que eran tomadas por organismos plurales de decisión, y por mayoría, pero debían ser ejecutadas y controladas de manera centralizada por los mandos a cargo⁷.
- Dirección colectiva: los planes los adoptaban organismos colegiados de dirección, principalmente el Secretariado y los Estados Mayores central, de bloque y de frente⁸.

⁷ Estatutos de las FARC-EP, Guía académica para su estudio. En: Estatutos de las FARC-EP. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo XI. Documentos FARC-EP. Guías FARC-EP. Bogotá D.C. Pág.4.

⁸ Ibid; Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión individual de Juan Hermilo Cabrera 30/04/2019. Valledupar. Pág.30.

- Unidad de mando o mando único: todos los miembros estaban sometidos a quienes ejercían el mando a nivel nacional⁹.
- Verticalidad y subordinación: los subalternos y las instancias inferiores de toma de decisiones se sometían a las superiores y a los planes que estas dispusieran¹⁰.
- Clandestinidad: se refiere al carácter secreto de la actividad de la organización¹¹.
- Compartimentación: implica el acceso limitado a información. Solo accede y recibe información quien requiere conocerla para el cumplimiento de una orden¹².
- Crítica y autocrítica: se expresa en la realización de balances constantes sobre la actuación de las unidades, que involucran la revisión de deficiencias y errores, así como de mecanismos para superarlos¹³.

40. Los delitos, por su parte, implicaban la comisión de conductas contra la vida de compañeros en armas o civiles, el apartarse del movimiento guerrillero, cualquier forma de colaboración con el enemigo, la divulgación de información clave, el fraccionalismo, el incumplimiento de órdenes, la violación, el robo, los negocios tramposos entre los compañeros o con los civiles, el consumo de sustancias psicoactivas, las actividades que fueran en contra de la “moral revolucionaria”, las costumbres de la población (particularmente las de carácter religioso) o que afectaran el prestigio de la guerrilla.

⁹ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo VIII. Cartillas FARC-EP. Inteligencia de Combate. Bogotá D.C. Pág 97; Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Colectiva Nacional. 23/09/2019. Bogotá D.C. Documento. Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-EP dentro del caso 01. Transcripción. Pág. 16.

¹⁰ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Colectiva Nacional. 23/09/2019. Bogotá D.C. Documento. Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-EP dentro del caso 01. Transcripción. Pág 18 y 20.

¹¹ Cartilla de inteligencia de combate. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo VIII. Cartillas FARC-EP. Inteligencia de Combate. Bogotá D.C. Pág.412.

¹² Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Colectiva Nacional. 23/09/2019. Bogotá D.C. Documento. Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-EP dentro del caso 01. Transcripción. Pág 19.

¹³ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo VIII. Cartillas FARC-EP. Elementos básicos para el militante comunista. Bogotá D.C. Pág. 534; Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Colectiva Nacional. 23/09/2019. Bogotá D.C. Documento. Primera entrega de versión colectiva por parte de los llamados a comparecer ex integrantes de las FARC-EP dentro del caso 01. Pág. 18.

También, el intento de homicidio, el hospedaje junto con población civil y el “chismorro”¹⁴.

41. De estos delitos es clave, a la luz del control de la tropa, el incumplimiento de las órdenes, pues afirmaba la subordinación al mando que las daba y su sanción garantizaba que se hiciera lo que este último disponía, esto compone un factor clave que devela la predisposición de los ejecutores de las órdenes a cometer los hechos, so pena de ser sancionados. Así lo reiteraron los comparecientes en la versión colectiva: “el incumplimiento de órdenes del superior constituía un delito que debía ser sancionado en las FARC-EP”¹⁵. Las sanciones por su comisión incluían desde la pérdida temporal o definitiva del mando, la obligación de cumplir con trabajos u otras actividades impuestas como castigo, hasta el fusilamiento, que era aplicable, según el reglamento, solo en casos de extrema gravedad (como la traición, la delación y toda forma de colaboración con el enemigo, el asesinato de compañeros o civiles y la desertión con armas o dinero del movimiento). Para la sanción de los delitos, el organismo al que perteneciera el infractor debía convocar Consejos Revolucionarios de Guerra.

42. Las comunicaciones reforzaron el control sobre los diferentes bloques, frentes y columnas móviles desde el mando del Secretariado. A partir de la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, existía una comunicación frecuente a través de radio con todos los Estados Mayores de bloques y frentes en sentido jerárquico y vertical, y a nivel horizontal las comunicaciones requerían aprobación del mando inmediatamente superior. Desde el año 2003, la incorporaron módems y computadores para mantener un nivel de encriptación más seguro de las comunicaciones con la dirección de alto nivel, lo que permitió controlar y mandar constante incluso en situaciones de movilidad permanente.

B.1.2. Estructura interna del Bloque La Mojana: Estado Mayor, Comandancia y Comisiones

B.1.2.1. El Bloque La Mojana como estructura regional de las FARC-EP

¹⁴ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. Génesis de las FARC-EP. Tomo IV. Reglamento de Régimen Disciplinario. Pág. 28.

¹⁵ Expediente Caso No. 01. Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Colectiva del Bloque Oriental. 25/11/2019. Icononzo (Tolima). Escrita.

43. El Bloque La Mojana (BLAM) fue una estructura regional de las extintas FARC-EP que operó entre 1987 y 2016 en el noroccidente del país, con presencia en los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba, siendo su mayor punto de presencia estratégica las subregiones de la Mojana y de Montes de María. Estas subregiones se han caracterizado históricamente por su poca o nula presencia estatal, siendo por su ubicación geográfica clave para el tránsito de mercancías y personas del interior del país hacia la costa Atlántica.

44. Debido a esta privilegiada posición, así como a su gran potencial agroindustrial y ganadero, la región desde mediados del siglo XX ha sido de interés estratégico, tanto para los departamentos de Bolívar y Sucre como al nivel nacional. No obstante, estas condiciones favorables también han convertido a los Montes de María en escenario de extensos conflictos por la tierra y de altas dinámicas que favoreció el ingreso del BLAM a mediados de los años 80.

Zona de estudio del Caso 01 – Montes de María y municipios cercanos



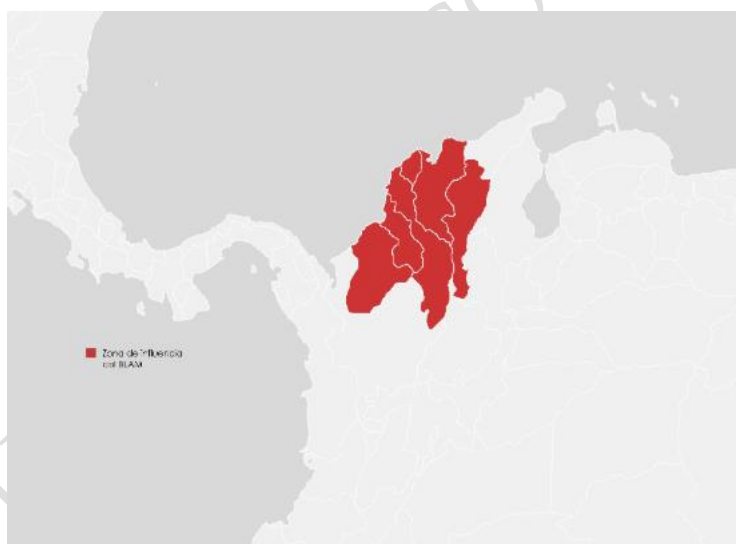
Fuente: GRAI.

45. Factores como la cuestión de la lucha por la tierra constituyeron el eje central del conflicto social en la región del Caribe, lo que derivó en un escenario ideal para que las FARC-EP crearan nuevos frentes guerrilleros cuyo objetivo buscaba aprovechar esta tensión social para promover la movilización y la simpatía de los sectores populares y demostrar que las FARC-EP eran el ejército de los pobres que luchaba por los

campesinos¹⁶. Esta estrategia permitió la extorsión de grandes hacendados de la región lo que llevó al abandono de gran parte de estos, además de permitir la construcción de una base social propicia para ampliar las filas de combatientes.

46. En ese contexto, el ingreso de las FARC-EP en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba estuvo marcado por disputas con actores sociales de la región como es el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que se había constituido como un movimiento social importante para resolver el problema del acceso a la tierra en la región. A lo anterior, se sumó el asesinato sistemático de miembros del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), los cuales fueron documentados por la Sala en el marco de las investigaciones adelantadas del Caso 01¹⁷.

Mapa 1: Zona de influencia del Bloque la Mojana



Fuente: elaboración propia con base en información del GRAI.

47. La entrada del Bloque la Mojana en la subregión de la Mojana y Montes de María se da como un antecedente a la etapa de mayor expansión territorial de las FARC-EP a nivel nacional. El BLAM fue creado en 1988 a partir del despliegue de diferentes frentes

¹⁶ Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 (FIP/IEPRI, 2016), sección 5.3, "La expansión territorial y la creación de nuevos frentes guerrilleros", p. 163.

¹⁷ *Ibíd.*, p. 163. La técnica de instalación incluía extorsión a hacendados y presentación de la guerrilla como "ejército de los pobres", con reclutamiento de jóvenes y éxodo de familias campesinas pudientes.

como forma de control de esa zona. Posteriormente, según fuentes especializadas¹⁸, hacia el año 1991 la organización guerrillera contaba con cerca de 48 frentes en operación, cifra que para finales de los años noventa se aproximaba a los sesenta y dos, distribuidos en siete bloques¹⁹. Esta expansión, respondió al seguimiento del Plan Estratégico que buscaba desplegar combatientes en regiones próximas a los centros de poder y centro económicos, incluyendo la costa norte del país²⁰.

48. Dentro de esta estrategia el Bloque La Mojana tenía la misión de controlar las vías de acceso a los departamentos del Cesar, la Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre y mantener comandos de milicias urbanas ubicados en las ciudades de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Valledupar para mantener un estricto monitoreo de los movimientos de la fuerza pública en la región ubicadas en las ciudades de Valledupar, Agustín Codazzi, la Jagua de Ibirico, Curumaní y el Paso.

49. Como consecuencia de este despliegue estratégico, estas dos subregiones se volvieron un escenario de intensos conflictos con la entrada de los grupos paramilitares en la década de los años noventa, particularmente el originado en Córdoba y Urabá, que se consolidó primero como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y posteriormente a partir de 1997, pasaron a denominarse Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)²¹.

50. La pérdida de apoyo popular sumado a la creación del Componente Caribe del Plan Colombia en el año 2000 generó una reducción considerable de la capacidad

¹⁸ Camilo Echandía, “Expansión territorial de las guerrillas colombianas: Geografía, economía y violencia”, en Reconocer la guerra para construir la paz, Malcolm Deas y María Victoria Llorente, comps. (Bogotá: Norma / Cerac / Uniandes, 1999), 108.

¹⁹ Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH. 1998-2002 (Bogotá: La Imprenta Limitada, 2002), 25.27.

²⁰ Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH. 1998-2002 (Bogotá: La Imprenta Limitada, 2002), 25.27.

²¹ Forero M. Et al. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional I División. En: El conflicto armado en las regiones. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2017. Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13901?show=full>. Pág.67. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de informes. Informe sobre militares víctimas en el marco del conflicto. Presentado por ACOMIDES. Aportado el 30-07-2018, Radicado No. 20181510204792.

operativa del BLAM. Por un lado, en cuanto a la pérdida del apoyo popular, la Sala determinó que, a falta de una robusta “inteligencia de combate” para identificar enemigos, los guerrilleros de estos frentes optaron por controlar la circulación haciendo retenes. Esta actividad servía para apropiarse de bienes que circulaban por las vías, en ocasiones para plagiar personas que podrían pagar por su libertad, y también para privar de la libertad a quien pudiera ser un enemigo, factor que empezó a generar un amplio descontento de la población²².

51. Por otro lado, la presencia del BLAM en la región estuvo marcada por el conflicto con otros sectores armados, especialmente con las autodefensas que se conformaron en la región, y que darían lugar a los ejércitos paramilitares. Esta confrontación entre las FARC-EP y los paramilitares es descrita en fuentes abiertas y procesos judiciales de Justicia y Paz.²³

B.1.2.2. El Estado Mayor del Bloque La Mojana (EMB)

52. Conforme a la estructura determinada en el Auto SRVR-019, el Estado Mayor del Bloque (EBM) era el organismo colegiado de dirección a nivel regional. Estaba integrado por el comandante principal (1), su remplazante (2) y hasta siete comandantes adicionales, de los cuales cinco eran principales y cuatro suplentes. Así pues, cada miembro del EMB tenía asignada una o varias tareas carteras o responsabilidades específicas que la Sala determinó a partir de las versiones voluntarias y documentos rectores:

Ilustración 2: Comisiones del Estado Mayor de Bloque

Cartera	Función principal en el Bloque La Mojana
Inteligencia de combate	Recopilación y análisis de información sobre objetivos militares y civiles; identificación de potenciales víctimas de privación de la libertad.
Jefatura de personal (JP)	Administración del personal combatiente, ascensos, disciplina interna y reemplazos en cargos.

²² Expediente Caso No. 01. Cuaderno público de acreditación de víctimas. Matriz de acreditación y observaciones de víctimas. Relato víctima. 1662. Fechas del hecho: 24/09/2001 a S.F.

²³ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo XLVIII. Pág. 18 y 19.

Organización de masas (OM)	Relación de la estructura con la población civil; reclutamiento; control social en zonas de retaguardia.
Educación de la tropa	Formación ideológica y política de los guerrilleros. Cartera ejercida por la compareciente Ainhoa Etxebarria (alias “La Vasca”) desde 1999.
Finanzas	Consecución de recursos económicos; administración de comisiones de finanzas; reporte trimestral al Secretariado.
Armamento	Mantenimiento, distribución y reposición del material de guerra de las unidades del bloque.
Propaganda	Difusión del proyecto político de la organización; acciones de guerra psicológica.
Comunicaciones	Operación del sistema de radiocomunicaciones; cifrado y descifrado; mantenimiento del enlace vertical con el Secretariado y los frentes subordinados.
Salud	Atención médica de los combatientes; eventualmente de los cautivos según las políticas del bloque.
Contraespionaje	Detección y prevención de infiltraciones; disciplina de seguridad interna.

Fuente: elaboración propia a partir del Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024.

53. La Sala de Reconocimiento advirtió que, en la práctica, el principio de dirección colegiada en los diferentes Estados Mayores Conjuntos de bloque fue limitado ya que los EMB al estar conformados por los comandantes de los diferentes frentes no siempre podían reunirse, lo cual llevó a que muchos de los planes y órdenes operativas solo fueran decididas por algunos comandantes. Sin embargo, la Sala determinó que el comandante del bloque, y el miembro del EMB al que se asignaban las funciones operativas, sí ejercían un control efectivo y continuo sobre las estructuras subordinadas.

B.1.2.2.1. El rol de la Cartera de Educación de la Tropa en la estructura funcional del Bloque

54. La cartera de educación de la tropa fue una de las nueve responsabilidades funcionales que la Sala de Reconocimiento determinó para los miembros de los estados mayores de bloque y de frente de las FARC-EP. Los integrantes de cada Estado Mayor del Bloque tenían asignadas carteras como la de inteligencia de combate, jefatura de personal,

organización de masas, educación de la tropa, finanzas, armamento, propaganda, comunicaciones, salud y contraespionaje, y estas mismas responsabilidades se replicaban en los estados mayores de los frentes subordinados.

55. La cartera de educación de la tropa tenía por objeto la formación ideológica y política permanente de los combatientes al interior de la estructura guerrillera. Su función cumplía dos propósitos, por un lado, a nivel interno garantizaba que los miembros de la organización guerrillera asimilaran y mantuvieran los principios doctrinarios del proyecto político-militar de las FARC-EP. Por otro lado, hacia afuera en el sentido de la relación con la población civil en las zonas de influencia del bloque operaba como soporte de la legitimación interna de las políticas de la organización, incluida la política de privación de la libertad. La cartera se distingue de la cartera de propaganda en que esta última estaba dirigida a la comunicación externa, es decir hacia la población civil, mientras que la cartera de educación operaba exclusivamente sobre los propios combatientes.

56. La Sala determinó que el funcionamiento de las FARC-EP estaba guiado por principios ideológicos y organizativos que producían un ejercicio uniforme a todas las escalas de la organización. Entre esos principios, la crítica y autocrítica derivadas de la revisión de balances constantes sobre la actuación de las unidades, que involucran la revisión de deficiencias y errores, así como de mecanismos para superarlos era el principio que se operacionalizaba directamente a través de las actividades propias de la cartera de educación. Al interior de esta cartera se manejaban temas como las sesiones formativas, círculos de estudio político y balances doctrinarios al interior de los campamentos.

B.1.2.3. El comandante del Bloque La Mojana: Laureano Serna Abdala

57. El señor Laureano Serna Abdala, identificado con el número de cédula 79.276.584, nació en el municipio de Plata Perdida en el departamento del Cesar en el año 1956. Serna Abdala, fue comandante del Bloque La Mojana desde el año 1990 y miembro en propiedad del Secretariado de las FARC-EP desde 1997 hasta su captura en el año 2013 mediante la operación “Alba Roja” llevada a cabo por unidades de Comandos De Operaciones Especiales de la Policía Nacional (COPES).

58. En el año 2014 fue condenado por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Valledupar por los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de

armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el radicado número 05001-31-09-003-2014-00214-00 y por los delitos de rebelión y concierto para delinquir bajo el número de radicado 17001-31-09-001-2014-00089-00 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta.

59. Según la Sala de Reconocimiento, Serna Abdala tuvo un rol esencial en la cadena de mando regional y que, a la luz de la doble condición de comandante de bloque y miembro del Secretariado, también ocupó el vértice de la cadena de mando regional y fue simultáneamente parte del órgano de dirección nacional, siendo el enlace entre las decisiones estratégicas del Secretariado y su implementación operacional en el Bloque La Mojana.

60. Su ascenso dentro de la organización inició en 1978 cuando fue designado suplente del comandante del Frente 99, recién creado en el norte de Antioquia, y en 1980 asumió su comandancia. En 1982 participó en la creación de la Columna Móvil "El Cóndor Herido", la cual dirigió hasta 1985, año en que regresó al Frente 99 en la misma condición de comandante.

61. La creación de la "Columna Movil El Cóndor Herido" se produjo en el marco de la VII CNG de 1982, en la que las FARC-EP adoptaron el secuestro extorsivo como política de financiación y aprobaron el plan de expansión territorial hacia el norte del país, lo que hace que la experiencia de Serna haya sido un elemento relevante para situar el origen de las políticas macrocriminales determinadas en el Caso No. 01. En 1988 fue elegido segundo al mando del Bloque La Mojana y en 1990 fue nombrado su comandante, cargo que ejerció ininterrumpidamente hasta su captura en 2013.

62. A partir de 1993, Serna Abdala accedió a los órganos de dirección nacional al ser nombrado miembro del Estado Mayor Central; en 1995 fue designado suplente del Secretariado; y en 1997 alcanzó la condición de miembro en propiedad de ese organismo, que mantuvo hasta el día de su captura el 1 de septiembre de 2013, en el marco de la operación "Alba Roja", llevada a cabo por unidades de los COPES.

63. La doble condición de comandante de bloque y miembro del Secretariado confirió a Serna Abdala una posición única dentro de la cadena de mando. En ese contexto, la Sala

determinó que ocupó simultáneamente el vértice de la cadena regional y el nivel de dirección nacional, actuando como enlace entre las decisiones estratégicas del Secretariado y su implementación operacional en el Bloque. En su condición de comandante del bloque controlaba comunicaciones, orientaba el balance de las estructuras subordinadas, gestionaba la disciplina y resolvía apelaciones en su condición de coordinador a nombre del Secretariado, figura creada en la VIII CNG.

64. Serna Abdalá, al margen de los Estatutos tomaba decisiones tácticas y operacionales para materializar las orientaciones sobre la política de privación de la libertad, emitía órdenes concretas y suministraba planes a los frentes. Comandantes del BLAM reconocieron en versiones voluntarias que Serna, alias *El Cucayo*, ejercía mando directo mediante comunicaciones regulares y el suministro de planes operativos.²⁴

B.1.2.4. Las comisiones como estructuras funcionales de los Frentes al interior del Bloque La Mojana

65. La Sala de Reconocimiento determinó que las comisiones constituyeron la unidad estructural básica para la ejecución de las políticas del bloque, incluyendo la custodia de las personas privadas de la libertad y la consecución de recursos financieros mediante rescates. Según los documentos normativos de las FARC-EP, las comisiones se encuentran por debajo de las escuadras y su composición podía ser menor a 12 combatientes. Dichas comisiones se constituyeron para el cumplimiento de misiones específicas y para crearlas se podía solicitar el apoyo del personal de otras estructuras. En el marco del caso 01, las comisiones más relevantes para el presente caso fueron:

- **Comisiones de finanzas:** Estaban encargadas de la consecución de recursos económicos, incluyendo, entre sus métodos, la toma de rehenes para cobrar rescates. Cada frente podía tener varias comisiones de finanzas con comisiones diferenciadas. Dichas comisiones debían rendir un reporte trimestral directamente al Secretariado.²⁵

²⁴ Expediente Caso No. 01. Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Voluntaria Marcos Torres. 25/11/2019. Icononzo (Tolima). Escrita.

²⁵ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión individual de José Elí García. 12/07/2019. Bogotá D.C. Transcripción. Pág 24.

• **Comisiones de cuidado:** Eran agrupaciones de combatientes organizadas por el comandante de cada frente para la custodia de los cautivos. Estas comisiones, tenían la misión específica de mantener a los cautivos bajo la responsabilidad de esa estructura en poder de la organización guerrillera. La Sala pudo determinar, a partir de la contrastación de fuentes, que los Estatutos de las FARC-EP contenían una disposición de “buen trato” a los “prisioneros”. De implementarse, este concepto de “buen trato” limitaría el sufrimiento y la deshumanización del cautivo a la pérdida de la libertad bajo amenaza de muerte, con el daño y el sufrimiento que ello ya conlleva para la persona y para su círculo familiar. De manera adicional a este sufrimiento, sin embargo, las víctimas acreditadas y los informes entregados a la Sala por la sociedad civil ilustran un sufrimiento adicional por los maltratos recibidos.²⁶

A partir de esta contrastación de fuentes, del análisis del significado de la orden de “buen trato” y teniendo en cuenta la consistencia de las experiencias de maltrato, la Sala concluye que la orden de “buen trato” concernía solo a la preservación de la vida biológica del cautivo y no de su dignidad humana. En efecto es solo el mantenimiento con vida del cautivo el que se monitorea en las comunicaciones internas de la organización. Esta se desentiende de la vigilancia del trato humano, otorgando un poder absoluto a los comandantes del Frente y de la “comisión de cuidado” sobre el trato dado al cautivo. Esta circunstancia es transversal a las dos políticas de privaciones de la libertad documentadas, por lo cual en esta sección no se diferencia entre las finalidades de estas privaciones de la libertad.

• **Comisión de educación de la tropa:** La comisión de educación, operaba como el brazo de formación ideológica y política de la organización armada al interior del bloque y sus frentes. Su función era la implementación de los lineamientos políticos de la dirección nacional mediante la instrucción permanente de los combatientes en los principios del proyecto guerrillero, incluyendo las justificaciones doctrinarias de las políticas de la organización, entre ellas la de privación de la libertad.

Esta comisión se articulaba con la cartera de educación de la tropa del Estado Mayor del Bloque, que era el organismo de dirección regional del que emanaban los contenidos y las orientaciones formativas hacia los frentes.

²⁶ Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. Génesis de las FARC-EP. Tomo IV Documentos FARC-EP. Estatuto FARC. Pág. 14.

B.1.3. La Columna Móvil “El Cóndor Herido”

B.1.3.1. Las columnas móviles en la estructura de las FARC-EP

66. La Sala de Reconocimiento determinó que las unidades militares de carácter móvil o las denominadas columnas móviles, no tenían un área de operación fija y su función principal era el combate táctico y operaciones especiales. Con ellas se llevaba a cabo el modelo típico de la guerra de guerrillas, caracterizado por los movimientos rápidos de los combatientes posterior a un ataque que genera el desgaste del enemigo desde distintos puntos de la geografía, generando ventajas militares y agotamiento de la contraparte. Algunas columnas se convirtieron incluso en unidades de combate al servicio de toda la organización, dirigidas directamente por el Secretariado como fue el caso de la Columna Móvil Jacobo Arenas, la Daniel Aldana, la Teófilo Forero Castro y la Columna Móvil Cóndor Herido. Otras columnas, sin alcanzar ese nivel, estaban bajo la dirección de los estados mayores de los bloques a los que pertenecían y podían recibir orientaciones directas del Secretariado.

67. Conforme a los Estatutos de las FARC-EP, aportados a esta Sala tanto por la Fiscalía como por los comparecientes, plantean la composición de las unidades militares de manera autocontenida y escalonada. De esta forma, la agrupación de varias estructuras de un mismo tipo conforma el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la unidad más grande, que eran los bloques de Frentes. Así, la unidad más pequeña era una escuadra, con 12 guerrilleros. La siguiente es la guerrilla, formada por dos escuadras, con 26 guerrilleros²⁷. Le seguía una compañía, formada por dos guerrillas, con 54 guerrilleros. Luego, la columna, conformada por dos guerrillas, con 110 guerrilleros. Después estaba el Frente, conformado por más de una columna. Y, por último, estaba el Bloque, que requería más de cinco Frentes. Una agrupación con menos de cinco frentes era un Comando Conjunto.²⁸

B.1.3.2. Creación y dirección de la Columna Móvil “El Cóndor Herido”

²⁷ Veinticuatro hombres conforman una guerrilla, más sus mandos, comandante y reemplazante, para un total de 26 hombres. Así mismo aplica para los demás niveles.

²⁸ Por ejemplo, según la Fiscalía, mientras que hacia 2002 el Frente 53 del Bloque Oriental estuvo compuesto por entre 6 y 8 compañías, el Frente 47 estaba organizado en dos compañías, una guerrilla y dos escuadras. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de informes. Informe Estructuras y Perfiles Oriental. Presentado por FGN. Bogotá D.C. 2016. Pág. 87; Expediente Caso No. 01. Cuaderno de informes. Informe Estructuras y Perfiles Noroccidental. Presentado por FGN. Bogotá D.C. 2016. Pág. 136.

68. En 1982, año en que las FARC-EP celebraron su VII Conferencia Nacional Guerrillera, se constituyó el “Proyecto de plan militar a seis años” que sentó las bases de la expansión territorial de las FARC-EP y definió el secuestro como instrumento de financiación. En este contexto, según versiones voluntarias²⁹ el compareciente Laureano Serna Abdala, participó en la creación de la Columna Móvil “El Cóndor Herido”. Serna dirigió esa columna desde su fundación hasta 1985, año en que regresó al Frente 99 como comandante.

69. La creación de la Columna Móvil en 1982 se produjo en el marco de la expansión estratégica de las FARC-EP hacia el norte del país, en particular hacia las regiones de influencia del Bloque La Mojana, además de apoyar este proyecto expansivo en otros Bloques en operaciones terroristas y secuestros masivos de dirigentes políticos en otras regiones del país. Esa expansión fue simultánea a la adopción, en la misma VII CNG, de la decisión de utilizar el secuestro extorsivo como fuente de financiamiento de la organización.

70. La Columna Móvil “El Cóndor Herido” estuvo inscrita en ese proyecto de expansión y constituyó, además, un instrumento operacional de apoyo a otros bloques en regiones distantes de su área de influencia natural. En ese rol, la Columna ejecutó operaciones de alto impacto que requerían planificación prolongada, coordinación y autorización del Secretariado.

B.2 Patrones de hechos no amnistiados identificados por la Sala

B.2.1 Primer Patrón: *Las FARC-EP tenían una política de privar de la libertad a civiles, así como a militares y policías puestos fuera de combate, para forzar un intercambio por guerrilleros presos.*

71. A partir de 1997 la dirigencia nacional de las FARC-EP decidió en el Pleno del Estado Mayor Central mantener cautivos a oficiales y suboficiales del Ejército y de la

²⁹ Proyecto de Plan militar para seis (6) años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Génesis de las FARC-EP. Tomo II. Documentos rectores FARC-EP. Bogotá D.C. Pág 147. Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Respuesta al auto del 11 de agosto de 2020. Ampliaciones escritas de la versión voluntaria colectiva entregada por cada uno de los antiguos bloques de la extinta guerrilla FARC-EP. Pág. 141.

Policía capturados en distintas modalidades, pero especialmente en acciones armadas de tomas de bases militares y estaciones de policía. Lo anterior con el principal objetivo de forzar un intercambio por guerrilleros presos, pero también para obtener el reconocimiento de estatus de beligerancia a la organización insurgente y demostrar control territorial.

72. En 2001 ante el fracaso de esta política, las FARC-EP decidió cambiar la estrategia de intercambio y en lugar de privar de la libertad a militares y policías decidió plagiar miembros de la sociedad civil considerados “políticos” para forzar el intercambio. Este cambio en la política se dio de manera no uniforme y progresiva en los diferentes Bloques de la guerrilla, luego de que el Bloque la Mojana realizara el plagio del candidato presidencial Juan Nicanor D’Zubiría en 2002. Esta operación fue llevada a cabo por la Columna Móvil el Bloque la Mojana y esta fue comandada por Julián Álvarez alias “arañita” y por Antonio Vargas alias “el cola” y funcionó como una operación piloto, diseñada por la compareciente “Ainhoa Etxebarria” quien, pese a no participar directamente en el secuestro, fue quien entrenó y determinó las estrategias que se utilizarían para el plagio del candidato presidencial.

73. La política fracasó, pues los plagios culminaban en largos tiempos de cautiverio y malos tratos de guardia en muchos casos. Tampoco logró su cometido ya que los secuestros terminaban en asesinato, rescate militar, fuga o liberación unilateral de los cautivos, pero nunca por el intercambio por guerrilleros presos. Con el paso de los años los que sobrevivieron fueron liberados de manera unilateral. A continuación, se hace un resumen de la configuración de este patrón de acuerdo con lo establecido en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024.

B.2.1.1 Las FARC-EP adoptaron la política de privar de la libertad a militares y policías para forzar el intercambio por guerrilleros presos desde el Pleno del Estado Mayor de 1997.

74. La Sala determinó que en 1997 las FARC-EP decidieron forzar el intercambio de guerrilleros presos por los militares y policías en su poder. No hay evidencia de que antes de este año la organización armada tuviera como política o práctica la privación de la libertad de civiles o integrantes de la Fuerzas Públicas, con la finalidad de forzar un intercambio por guerrilleros presos.



75. A través de la contrastación, la Sala encontró bases suficientes para determinar que esta política tuvo estrecha relación con el despliegue territorial y el crecimiento en poderío económico y militar de las FARC-EP entre 1993 y el 2001, periodo en el que aumentó significativamente el número de miembros de la Fuerza Pública en poder de la guerrilla. Hasta inicios de 1997, si bien las FARC-EP incrementaron su capacidad de capturar militares y policías, por las razones expuestas, la política seguía siendo liberar a los cautivos de manera unilateral. Bajo el gobierno vigente en el año de 1997 se realizó la primera negociación para la liberación de miembros de la Fuerza Pública.

76. Los documentos rectores de las FARC-EP permiten a la Sala determinar que esta decisión la tomó formalmente el Pleno del Estado Mayor de 1997. El documento señalaba que entre los militares y policías que fueran privados de la libertad, en la campaña guerrillera para la toma de poder, se debía seleccionar a algunos que sirvieran para ser canjeados por guerrilleros presos en las cárceles. A partir de 1998, con el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la organización armada comunicó al país un cambio de política frente al cautiverio de militares y policías, a los cuales a partir de entonces condicionaría al canje por guerrilleros presos en las cárceles, dejando de liberarlos sin pedir nada a cambio, convirtiéndolos así en rehenes.

77. Según los reconocimientos de verdad de diferentes comparecientes, el reconocimiento del estatus de beligerancia a la organización insurgente era también uno de los objetivos buscados. Consideraban que vencer y mantener cautivos a integrantes de la Fuerza Pública demostraba que tenían el control del territorio. También reconocieron, que a partir de 1997 la guerrilla decide en adelante mantener prisioneros para el intercambio humanitario por guerrilleros presos, y la captura y cautiverio de los militares y policías se incluye en la planeación de las tomas “como parte de los resultados a valorar”.

78. Fuentes abiertas y entrevistas con los funcionarios del gobierno vigente en 1998 le dieron a saber a la Sala que esta decisión de la guerrilla la conoció el país en mayo de 1998 cuando en NTC Noticias miembros del Secretariado, hablaron por primera vez del canje. Ocurrió una noche del 15 de mayo cuando se hizo público un video de los miembros del Secretariado de las FARC-EP, comunicando a la opinión pública la implementación de una política de “canje humanitario”, según la cual, los miembros de la Fuerza Pública sobrevivientes de las diferentes tomas guerrilleras serían tomados como rehenes con el

objetivo de intercambiarlos por guerrilleros presos. Igualmente, informaron la entrega al gobierno nacional de un listado de 487 guerrilleros que se encontraban presos para llevar a cabo los intercambios. En este video mensaje se encuentran presentes todos los miembros del Secretariado del momento, incluido el compareciente Laureano Serna Abdala.

79. A pesar de la implementación de la política, la posición del gobierno del momento fue siempre negar la posibilidad de intercambios. En el año 2000 el gobierno realizó negociaciones humanitarias para el intercambio de enfermos que culminó en febrero del 2001 con el llamado “El Acuerdo Los Pozos”, firmado por todos los miembros del Secretariado, entre ellos Laureano Serna Abdala. El Acuerdo pactó la liberación de policías y soldados enfermos y la liberación de guerrilleros presos enfermos, no como intercambio sino como dos liberaciones unilaterales y simultáneas en el tiempo. Sin embargo, las FARC-EP no liberó los soldados y policías con rango (oficiales y suboficiales) y anunció que no los liberarían si no se aprobaba una ley para el intercambio de guerrilleros presos por miembros de la Fuerza Pública como un acto humanitario. Esto no sucedería jamás, y algunos oficiales y suboficiales permanecerían hasta catorce años cautivos, mientras que otros que estaban enfermos murieron en cautiverio, y otros aún se encuentran desaparecidos y no se han esclarecido las condiciones de su muerte. Algunos, en cambio, obtuvieron la libertad mediante acciones humanitarias y de intermediación de terceros y, finalmente, algunos murieron asesinados en el contexto de operaciones militares de rescate.

80. Los comparecientes de las FARC-EP en su versión colectiva nacional han reconocido la política de mantener cautivos a los oficiales y suboficiales del Ejército y de la Policía para forzar el intercambio por guerrilleros presos. Reconocen que el fin era lograr que el gobierno liberara una gran cantidad de guerrilleros presos a cambio de los militares y policías privados de la libertad en ataques guerrilleros. Para los comparecientes, la “intención humanitaria” de los plagios queda demostrada con la manifestación pública de liberarlos si se establecía el intercambio con el Gobierno Nacional. Sin embargo, no ocultaron la intención de forzar el intercambio y condicionar su libertad a dicho intercambio en el periodo señalado y hasta el año 2012 cuando renunciaron a esta política y liberaron a los que aún estaban vivos.

B.2.1.2 La política de las FARC-EP de privar de la libertad a civiles (“políticos”) para intercambiar por guerrilleros presos surge del Secretariado en el año 2001



81. La Sala determinó, a partir de la contrastación de fuentes, que en el año 2001 las FARC-EP modificaron su política para incluir objetivos civiles con relevancia política para propósitos de intercambio por guerrilleros detenidos en las cárceles. Tal determinación se desprende especialmente de los hechos y de las declaraciones que recibió esta sala por parte de miembros de las FARC-EP.

82. En el ejercicio de contrastar las diferentes fuentes de información recibidas por la Sala, esta pudo determinar, que el cambio de la política se dio a partir del año 2001 y el primer hecho identificado fue el secuestro del candidato presidencial Juan Nicanor D'Zubiría. De acuerdo con las diferentes versiones voluntarias recibidas, este plagio funcionó como un piloto para poner a prueba la efectividad del cambio de la política. El secuestro del candidato presidencial se dio por órdenes del Secretariado, quienes acudieron a Ainhoa Etxebarria García, "alias la vasca" quien fue responsable de la planeación integral del delito, incluyendo los aspectos estratégicos, tácticos, logísticos y de coordinación entre los participantes.

83. Igualmente, diferentes fuentes confirmaron que la compareciente Ainhoa Etxebarria presentó ante el Secretariado la idea de hacer este cambio de política dados sus conocimientos adquiridos en previos grupos insurgentes como el ETA y las Brigadas Rojas en los cuales apoyó el plagio de personas consideradas políticas con el objetivo de ser intercambiados por guerrilleros presos. Esta reunión se dio a mediados de 2001 y posterior a la misma se inició la planeación del secuestro del candidato presidencial.

84. Luego de que este secuestro se realizara, diferentes Bloques de las FARC-EP implementaron el cambio de la política en sus filas, secuestrando a funcionarios públicos de diferentes rangos incluidos alcaldes, concejales, diputados, directores entre otros a lo largo del territorio nacional. No obstante, no fue una política implementada de manera uniforme en todos los Bloques, pues existieron aquellos que nunca llevaron a cabo este tipo de secuestros.

85. Sin embargo, terminado el gobierno del presidente Pastrana, la posición del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) fue rechazar la expectativa de un intercambio

humanitario, como lo había planteado la organización armada³⁰. Fuentes abiertas describen otro tipo de acercamientos durante los dos periodos del presidente Uribe encaminados a propiciar una liberación unilateral, incluso con liberaciones de guerrilleros como “gestores de paz”. Sobre este aspecto, la versión colectiva del Bloque Oriental destaca las liberaciones que se hicieron posibles gracias a las actuaciones de “Colombianos y colombianas por la Paz” y de la Senadora Piedad Córdoba³¹.

86. A continuación, la Sala procede a ilustrar la implementación de esta política a través de hechos ilustrativos tanto de las privaciones de la libertad de policías y militares, como de civiles, ambos con el propósito de forzar el intercambio por guerrilleros presos.

B.2.1.3 Hechos ilustrativos de la implementación de la política de privar de la libertad a militares y policías para intercambiar por guerrilleros presos

87. Teniendo en cuenta que el compareciente Laureano Serna Abdala fue miembro del Secretariado de las FARC-EP, entre los años 1997 y 2013, se le llamó a reconocer responsabilidad sobre todos los hechos establecidos en el Auto 019 de 2021 durante ese periodo. A continuación, se mencionan los hechos ilustrativos determinados por la Sala:

- Cautivos de la toma del cerro de Patascoy, 20 de diciembre de 1997, Pasto, Nariño.
- Toma de la base militar El Billar, 3 de marzo de 1997, Cartagena del Chairá, Caquetá.
- Toma de Mitú, 1 de noviembre de 1998, Mitú, Vaupés.
- Cautivos de la toma de Miraflores, 5 de agosto de 1998, Miraflores, Guaviare.
- Secuestro del Cabo José Norberto Pérez Ruiz, marzo del 2000, Santa Cecilia, Risaralda.

³⁰ El informe de Vivamos Humanos presentado ante la Sala describe la ausencia de acciones dirigidas a celebrar convenios de intercambio humanitario en el gobierno de Álvaro Uribe. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de informes. Informe título presentado por Vivamos Humanos. ¿Acuerdo humanitario o rescate militar? 14/11/2020. Pág. 5, 27-29; Esto se confirma con la entrevista entregada a la Sala Piedad Córdoba, ex senadora del Partido Liberal. Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. Entrevista realizada a Piedad Córdoba. 06/03/2020, Pág. 9

³¹ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión colectiva del Bloque Oriental. 25/11/2019. Icononzo (Tolima). Escrita. Pág. 62.

88. Si bien las anteriores tomas guerrilleras de las FARC-EP citadas son las más reconocidas por el número de privados de la libertad, la Sala encontró otros ataques donde militares y policías también fueron privados de su libertad, y los oficiales y suboficiales conservados para el intercambio por guerrilleros presos.

89. Por ejemplo, tres personas de la toma de Juradó, Chocó, en diciembre de 1999 por el Frente 57 del bloque Noroccidental de las FARC, los siete policías privados de la libertad el 16 de noviembre de 1999 en la toma guerrillera al municipio de Alpujarra (Tolima), los dos miembros de la policía en la toma de Curillo (Caquetá), el 10 de diciembre de 1999 y los 5 policías retenidos durante la toma de Pivijay, Magdalena el 30 de agosto del 2000. Sobre las condiciones de los policías plagiados en la toma de Curillo, los comparecientes mencionaron que: “de esa acción, años después falleció el militar Álvaro Moreno en la operación de intento de rescate llamada “Operación Júpiter”. El sargento Luis Alberto Erazo se fugó ese día”³². Sobre estos hechos profundizará la Sala en el auto de definición de hechos y conductas del bloque correspondiente. Además, sobre la toma de Pivijay, las víctimas sobrevivientes mencionaron que: *“todos los días nos anunciaban de que si intentábamos fugarnos pues éramos personas muertas que lo más probable era que era imposible que saliéramos vivos de ese lugar (...)”*³³. Además, otra víctima narró cómo en las noches los guerrilleros se iban al polígono a medianoche a practicar cómo los iban a matar, gritaban sus nombres y luego soltaban una ráfaga de fusil.

90. Algunos otros miembros de la Fuerza Pública fueron privados de su libertad en el contexto de confrontaciones armadas, como es el caso de Heriberto Aranguren González, quien fue plagiado tras un combate el 22 de junio de 1999 con el Bloque La Mojana en el corregimiento Juan José, de Puerto Libertador (Córdoba) y el cabo Agenor Enrique Viellard Hernández, quien fue privado de la libertad por estructuras del Bloque Noroccidental, el 12 de diciembre de 1999, en un ataque a una base militar en el municipio de Juradó (Chocó). Ambos permanecieron cautivos en poder del Bloque Noroccidental, con la finalidad de un eventual intercambio por guerrilleros presos. El cabo Salín Antonio Sanmiguel también fue privado de su libertad durante un enfrentamiento

³² Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión colectiva del Bloque Occidental. 03/12/2019. Popayán (Cauca). Escrita.

³³ Expediente Caso No. 01. Cuadernos de Informes. Informe mixto presentado por víctimas organizadas retenidas ilegalmente por las FARC-EP, presuntamente con finalidades de canje o, que compartieron condiciones de cautiverio. “Informe sobre militares víctimas en el marco del conflicto”. Presentado por la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro. Aportado el 30 de noviembre de 2019.

armado en El Tambo, en zona rural de Cajamarca (Tolima), con miembros del Frente 21 del antiguo Comando Conjunto Central de las FARC-EP y permaneció en cautiverio dos años y nueve meses, hecho que fue reconocido en la ampliación de la versión colectiva del Comando Conjunto Central.

91. Un hecho ilustrativo es el cautiverio del coronel Álvaro León Acosta Argotty. Los comparecientes del Bloque Occidental reconocieron haber tenido cautivo al coronel, y otros tres policías más, el teniente John Alexander Ruiz Marín, el intendente Harold Gutiérrez y el agente José Ney Murillo, al derribar un helicóptero de la Policía el 5 de abril de 2000. Desde el momento del plagio y pese a las condiciones de gravedad en el estado de salud del coronel Acosta, que tenía la columna comprometida por el golpe, la antigua guerrilla de las FARC-EP tomó la decisión de incluirlo en la lista de “canjeables”. De acuerdo con las narraciones de la víctima a fuentes abiertas y por lo reconocido por los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP, el dolor llevó al coronel Acosta a pedir a los miembros de la antigua guerrilla que le causaran la muerte. Los comparecientes reconocieron este intenso dolor en su versión voluntaria:

“cuando uno se cae de un helicóptero en pleno combate pues obvio que los daños son terribles, él quedó muy afectado en la columna vertebral y de otros males no solamente era él también hubo cuatro o cinco acompañantes, las FARC lo llevaron en hamaca y pues uno cuando tiene fracturas de columna moverse en una hamaca no es fácil y en una operación militar, es decir, lo que se requiere es como una camilla que lo tenga a uno estable pues sí que pero una marca es terrible eso se van boleando, se mueve, sí sufrió mucho.”

92. La Sala ha determinado que otros militares y policías no fueron privados de la libertad en tomas guerrilleras, sino en retenes de las FARC-EP, cuando se encontraban solos en sus labores propias del servicio militar o cuando se desplazaban de civil a visitar a sus familias o a realizar trámites personales. Este es el caso del Comandante de Policía de Florida-Valle, el Mayor Guillermo Javier Solórzano, quien permaneció en cautiverio tres años y ocho meses. También es el caso del coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte y del teniente Elkin Hernández Rivas, quienes fueron plagiados en un retén militar en la vía Paujil (Caquetá) en octubre de 1998 y murieron asesinados durante la Operación de Rescate Júpiter, realizada el 26 de noviembre de 2011, cuando las víctimas llevaban más de 13 años de cautiverio.

93. Finalmente, la Sala consideró contar con suficientes fuentes que demostraron que los asesinatos de personas, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública secuestrados, que eran realizados por los guerrilleros, se consultaban con los superiores, y que en algunos casos hubo órdenes de asesinato en caso de intento de rescate militar. En cuanto al ocultamiento deliberado del paradero de cautivos también era una eventualidad contemplada en las órdenes generales suministradas por el Secretariado, el comandante principal y los miembros del Estado Mayor.

B.2.1.4 Hechos ilustrativos de la implementación de la política de privar de la libertad a políticos para intercambiar por guerrilleros presos

Secuestro de Juan Nicanor D’Zubiría

94. El 19 de enero de 2002 en medio de las campañas presidenciales del momento, el candidato presidencial Juan Nicanor D’Zubiría del partido Movimiento Naranja fue secuestrado por la Columna Móvil “El Cóndor Herido” en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Juan Nicanor D’Zubiría había sido miembro de la Cámara de Representantes del departamento de Santander y era reconocido por su discurso de seguridad y por sus propuestas de reforma militar; igualmente, había alertado a las autoridades sobre su escaso esquema de seguridad.

95. El 19 de enero de 2002, mientras se encontraba en un mitin en el polideportivo del municipio, miembros encapuchados al mando de Julián Álvarez y Antonio Vargas, miembros de la Columna Móvil el Cóndor Herido, realizaron disparos al aire, asesinaron a dos de sus escoltas y condujeron al candidato hacia una lancha en el río Magdalena, mientras otros miembros de la Columna amenazaban y aterrorizaban a la población que había asistido al encuentro con el candidato.

96. Posteriormente, el candidato fue conducido por el río Magdalena hasta la región de la Mojana donde fue entregado al Frente 88, perteneciente al BLAM. El candidato permaneció plagiado durante 10 años en la zona de los Montes de María y fue liberado el 2 de diciembre de 2012 de manera unilateral y voluntaria.

97. Durante semanas previas al secuestro, la Columna Móvil el Cóndor Herido había desarrollado una operación de inteligencia prolongada y meticulosamente

coordinada. La organización actuó mediante un seguimiento constante de rutinas, vulnerabilidades logísticas y patrones políticos del candidato. Integrantes infiltrados en redes de transporte regional, comercio local y apoyo comunitario permitieron reconstruir con precisión los movimientos de la campaña, identificando momentos de exposición, cambios de itinerario y zonas donde la capacidad de reacción estatal era limitada. Además, había realizado acciones bélicas en municipios aledaños con el objetivo de movilizar la Fuerza Pública de la región hacia otros municipios.

98. Conforme a la versión voluntaria rendida por Julián Álvarez, ese hecho representó un suceso inédito para esa columna móvil. El secuestro del candidato fue una prueba que hizo el Secretariado al cambio de política y en el cual participó directamente la compareciente Etxebarria en su ideación³⁴. Además, por esa razón se usó a una unidad considerada de “élite” dentro de las FARC-EP, buscando lograr realmente su éxito³⁵.

99. Tanto el gobierno vigente al momento del plagio como los siguientes, no solamente no cedieron a los diferentes secuestros de personas políticas realizadas por los diferentes Bloques de las FARC-EP, sino que, además, ordenaron expresamente la prohibición de negociar con guerrilleros. En ese sentido, a pesar del gran número de personas secuestradas con el objetivo de intercambio nunca se concretó una sola negociación. El desenlace de los secuestros podía ser: la muerte de la víctima, el rescate mediante operativo militar, o como el caso del excandidato presidencial Juan Nicanor D’Zubiría, su liberación voluntaria y unilateral.

³⁴ Al respecto, la compareciente Ainhoa Etxebarria expresó en versión voluntaria que “el secuestro del señor D’Zubiría fue una prueba para la estrategia del cambio de la política. Yo sabía, por mi experiencia previa en ETA que era más probable lograr un intercambio por un político que por un miembro del ejército. Los compañeros del Secretariado me dijeron que era la encargada de demostrar cómo podía funcionar, y por eso planeé el secuestro de Juan Nicanor. Consideré que era un objetivo idóneo por su popularidad y protagonismo en el momento de los hechos, además, porque dejaba muy mal parado al gobierno del momento que bajo su mandato no hubiese garantías de seguridad en el ejercicio democrático. Además, fue un candidato que estudiamos y nos dimos cuenta que podía ser el más sencillo de secuestrar porque notamos que no tenía un esquema de seguridad fuerte y una agenda especialmente enfocada en regiones a las que podíamos acceder con facilidad. Posteriormente, solicité que la operación fuese ejecutada por el Cóndor Herido y les expliqué como se debía desarrollar estratégicamente el secuestro. Cuando la columna llegó a la Mojana hablé con Laureano y le dije que grabara al candidato y que tomara diferentes pruebas de su cautiverio para usarlas en el marco de la negociación. Es una lástima que la estrategia haya fracasado por completo y que haya permanecido tanto tiempo secuestrado, a los meses de su secuestro manifesté que consideraba que la estrategia no había sido exitosa y que difícilmente lo sería así que solicité la liberación del candidato, pero mi opinión no fue tomada en cuenta y se decidió mantenerlo retenido.”

³⁵ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Julián Álvarez. 25/03/2021. Bogotá, D.C.

Secuestro de Patricia Guijarro

100. Gobernadora del departamento de Córdoba desde el año 2003 hasta el 17 de junio de 2004 cuando fue secuestrada por la Columna 88 del Bloque la Mojana mientras trotaba por el Malecón del Río Sinú de la ciudad de Montería en horas de la mañana. Fue trasladada a la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se mantuvo en cautiverio hasta el 30 de noviembre de 2006 cuando se fugó durante una operación militar que buscaba su liberación. La fuga ocurrió durante la noche de ese día cuando el grupo armado fue advertido de la operación que buscaría la liberación de la gobernadora. Ante este escenario el comandante del Frente 88 ayudó a la señora Guijarro a escapar del cautiverio puesto que había recibido la orden del coordinador del Bloque de asesinarla en caso de enfrentar una operación de rescate. Patricia Guijarro caminó durante 8 días hasta llegar al corregimiento de San Javier en el municipio de Ciénaga, Magdalena, donde fue rescatada por el Ejército Nacional y se reencontró con su familia.

B.2.2 Segundo patrón: Las FARC-EP tenían como política privar de la libertad a civiles como parte de sus dinámicas de control social y territorial

101. En algunos periodos y lugares del territorio, especialmente en las zonas de frontera agrícola donde se originaron las FARC-EP, múltiples fuentes reportaron que la extinta guerrilla tenía una relación estrecha con la población. Su origen eran las mismas familias campesinas de las áreas donde tenían presencia y el reclutamiento de guerrilleros se hacía entre estas mismas familias. Estas fueron las zonas llamadas de “retaguardia” de las FARC-EP, principalmente fronteras de expansión agrícola de mediados del siglo pasado en el suroriente del país.

102. En las zonas de retaguardia, en las que las FARC-EP mantenían una relación estrecha con la población, los guerrilleros asumieron funciones de regulación de la vida colectiva. Por ejemplo, entre los documentos aportados por la Fiscalía en el informe Génesis están los Estatutos de las FARC-EP, donde se plantea de manera reiterada la obligación de todo combatiente de defender los intereses y los bienes de la población civil. En el mismo sentido, los comparecientes en sus versiones voluntarias concuerdan en la importancia de una buena relación con la población, reportando que las conclusiones de la VIII CNG hacen explícita la necesidad de mantener una buena relación con esta para que viera a la organización guerrillera como “su ejército”. Asimismo, los comparecientes

recalaron la importancia de no impartirles órdenes a los civiles, sino *“ganar su consciencia y su corazón para que aporten a la lucha”*.

103. Las fuentes consultadas demuestran, además, que el relacionamiento con la población civil era parte importante de las tareas encomendadas a los frentes de las FARC-EP. Así, las carteras o responsabilidades asignadas a los comandantes de frente y de bloque tenían una tarea denominada “organización de masas”, la cual tenía como funciones presentar planes de organización de la población (“las masas”), velar por el buen trato a la población civil, coordinar las entrevistas del comandante con civiles, convocar reuniones con sectores de la población en el área que le corresponde y controlar los mecanismos clandestinos de organización y a las milicias. Además, en cada bloque había un encargado de coordinar lo que en este sentido hacían los distintos frentes.

104. Igualmente, las fuentes concuerdan en describir que, en su proceso de expansión, las FARC-EP lograron tener presencia en zonas caracterizadas por una débil o escasa presencia estatal. Después de ingresar a la zona y haciendo uso de esta cercanía, la organización identificaba hacendados y campesinos pudientes para financiar el crecimiento del frente con cobros de “cuotas” y con privaciones de la libertad, y, también, crecían a partir del reclutamiento de personas en la zona. Lo anterior, generó un éxodo no solo de personas pudientes sino también de campesinos que rechazaron el ingreso de sus hijos a las filas guerrilleras.

105. A este proceso de expansión seguía la consolidación de su control a través del establecimiento de normas a la población rural, distribución de tierras y regulación del acceso a bienes comunes, como el agua, castigos y fusilamientos de espías e informantes, y la influencia sobre el trabajo de algunos líderes comunitarios, especialmente dentro de algunas Juntas de Acción Comunal. En algunas de estas zonas, su rol incluyó la solución de conflictos entre los pobladores, la regulación de bienes comunes como el agua y la cacería, la distribución de la tenencia de la tierra, con la bonanza de los cultivos ilícitos y la regulación de los precios de intercambio de la pasta base de coca (PBC) en algunas zonas de producción. Estas zonas de retaguardia se caracterizaban especialmente, por la poca o nula presencia estatal, lo cual permitió la expansión y consolidación de las FARC-EP en estos territorios.

106. Esta relación con la población civil se reflejó en directrices internas de las FARC-EP sobre la importancia del apoyo de los pobladores para la supervivencia y legitimidad de la guerrilla. Igualmente, la Sala pudo identificar que dentro del establecimiento de estas normas era de gran importancia la diferencia entre el “pueblo” y el “enemigo de clase”. Esto, debido a que el buen relacionamiento se espera de la relación del frente con los civiles que las FARC-EP suscribía en la primera categoría, pero no con los civiles que la organización incluía en la segunda categoría. A pesar de que no se encuentra definida, se puede inferir que esta segunda categoría hace referencia a los hacendados y campesinos pudientes que eran extorsionados, secuestrados y expulsados. Incluso, pertenecían a esta categoría aquellos que aun encajando dentro del “pueblo” se negaron a que sus hijos fuesen reclutados, por lo que fueron tildados de simpatizantes del Estado y, por lo tanto, de “enemigos”.

107. Teniendo en cuenta lo anterior, es en el marco de esta política que, con el objetivo de desestabilizar la disminuida presencia institucional en las zonas donde hacían presencia, los frentes, en conjunción con tomas guerrilleras a las cabeceras municipales, hostigaron, amenazaron, asesinaron, desterraron, y privaron de la libertad a candidatos, alcaldes, concejales y funcionarios representantes de la institucionalidad. Por tanto, la Sala puede determinar que estas privaciones de la libertad materializaron la intención de la guerrilla de afianzar su presencia como autoridad en el territorio.

108. Estas privaciones de la libertad fueron caracterizadas en el Informe No. 2 de la Fiscalía como de “control territorial”, utilizadas como castigo por violar directrices y órdenes de la guerrilla, de sus milicianos y colaboradores, como ejercicio de la autoridad. Las víctimas acreditadas reportan múltiples hechos de privación de la libertad como castigo, o como exigencias de rendición de cuentas de los funcionarios públicos, o como imposiciones de diversas prohibiciones, incluyendo la de circular.

109. Las fuentes abiertas muestran también periodos y lugares con una relación de antagonismo y confrontación de la extinta guerrilla con la población civil, como resultado de la dinámica del conflicto armado, especialmente la confrontación con el Ejército Nacional, las autodefensas y los paramilitares, y otras guerrillas. Este antagonismo fue especialmente notorio durante la expansión de las FARC-EP hacia nuevos territorios en la década de los noventa, y de nuevo cuando las FARC-EP entraron a ocupar territorios nuevos después de la desmovilización paramilitar de 2006.

110. Existen amplias variaciones regionales con respecto a la dinámica del conflicto de las FARC-EP con los ejércitos paramilitares y con el Ejército Nacional, las cuales son determinantes para comprender las privaciones de la libertad por control territorial. Por ejemplo, en algunas regiones el conflicto se vinculó directamente con el surgimiento de autodefensas armadas como reacción contra los secuestros y la imposición del pago de cuotas a hacendados y campesinos medianos. Es el caso del Magdalena Medio, donde estas autodefensas se enfrentaron con éxito a las guerrillas en los años ochenta, consolidaron su control en la zona y en su mayoría, aunque no todas, participaron en una desmovilización por vía de decretos antes de 1992. En otros lugares estos grupos de autodefensa locales, como está ampliamente documentado por el CNMH, se aliaron con otros intereses, incluyendo intereses económicos y políticos: algunos narcotraficantes, políticos regionales y empresarios. Esta alianza favoreció la formación de ejércitos paramilitares a mediados de la década del noventa que confrontaron a las guerrillas en una guerra irregular, sobre todo en zonas de control histórico de las guerrillas. Si bien surge en varias regiones, es dominada por el grupo armado que nació en Córdoba y Urabá en los años noventa, cercano a militares activos y en retiro de la zona. Este grupo se consolidó, primero, como el proyecto militar regional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y, luego, como un proyecto nacional de ejércitos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundadas formalmente en 1997.

111. La Sala determinó, a partir del estudio de las fuentes abiertas sobre las dinámicas del conflicto armado en Colombia y de las sentencias de Justicia y Paz, que son la diversidad de fuerzas y estrategias, y las variaciones de las dinámicas regionales del conflicto armado las que permiten comprender la relación de los diferentes frentes de las FARC-EP con la población civil y el patrón de privación de la libertad de civiles por control territorial, indicativo de una política tácita en este mismo sentido de control territorial. Estas dinámicas de conflicto cambian según lo regional entre las FARC-EP y sus “enemigos”, el mayor control de la población civil en el marco de estas dinámicas corresponde al creciente antagonismo con la población civil considerada simpatizante o colaboradora tanto de la Fuerza Pública como de los ejércitos paramilitares.

112. La identificación de los civiles colaboradores en principio corresponde a los comandantes de los frentes con sus comisiones y comandantes con tareas de “inteligencia de combate”, que son quienes realizaban tanto la identificación de los movimientos y

logística de los enemigos armados, y la planeación de ataques, como la identificación de infiltrados, colaboradores y simpatizantes del enemigo ocultos entre la población civil. Además de labores de inteligencia para detectarlos, las FARC-EP hacían controles en las vías y controles de forasteros que llegaban a vivir o a comerciar en las zonas donde la extinta guerrilla tenía presencia. También recolectaban información de los mismos pobladores, así como información de milicianos y otros colaboradores entre la población civil.

113. En este contexto, la Sala puede determinar que la privación de la libertad de los civiles fue una herramienta para interrogar a estos potenciales enemigos entre la población civil, así como un castigo por la colaboración o simpatía con el enemigo, siendo el asesinato y el destierro las otras sanciones. Así, las víctimas acreditadas reportan que, mientras estuvieron privadas de la libertad, sufrieron además de interrogatorios, castigos, maltratos físicos y psicológicos, orden de destierro o de confinamiento, y fusilamientos asociados. También los familiares reportan la negativa de la guerrilla de dar información sobre el paradero de estos cautivos.

B.2.2.1 Hechos ilustrativos de la implementación de la política privar de la libertad a civiles como parte de sus dinámicas de control social y territorial

114. Teniendo en cuenta que el compareciente Laureano Serna Abdala fue miembro del Secretariado de las FARC-EP, entre los años 1997 y 2013, se le llamó a reconocer responsabilidad sobre todos los hechos establecidos en el Auto 019 de 2021 durante ese periodo, relacionados con todos los Bloques y Comandos de las FARC-EP. Igualmente, a continuación, se desarrolla lo relacionado al Bloque La Mojana del cual fungió como comandante y coordinador durante los años 1990 a 2013.

B.2.2.1.1 Bloque La Mojana:

115. La Sala determinó, a partir de la contrastación de fuentes, que el Bloque La Mojana de las FARC-EP privó de la libertad a civiles para imponer su control territorial y social en sus zonas de injerencia. Así lo registra la Fiscalía en su Informe No. 2 y lo reconocen los comparecientes pues, aunque no aceptan el término “control territorial”, las prácticas sí las reconocen. Las víctimas acreditadas en el Caso No. 01 ante la JEP reportan 136 hechos de este tipo, en los que les privaron de la libertad con diversos propósitos como investigar qué hacían en el territorio, indagar por posibles colaboraciones con el “enemigo”,

castigarlas por algún hecho cometido o para realizar servicios o trabajos para la organización.

116. Como ya se describió, estos hechos se concentran en algunas subregiones de la vasta área donde operaba el Bloque La Mojana, especialmente en algunas zonas rurales y pueblos donde los frentes tenían sus zonas de operación. Las fuentes contrastadas coinciden en afirmar que la presencia territorial del Bloque La Mojana se concentraba en vastas áreas del noroccidente del país, con presencia en los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba. Allí se consolidaron zonas de retaguardia de la guerrilla, especialmente en zonas históricas de presencia e influencia de las FARC-EP, siendo su mayor punto de presencia estratégica las subregiones de La Mojana y Montes de María. Estas zonas, fueron “retaguardia” de las FARC-EP, en el sentido previamente señalado.

117. La Sala pudo constatar que la intensificación de la confrontación armada se refleja en las comunicaciones y documentos rectores recopiladas en el informe Génesis. Así, en el “Plan de acción del Bloque La Mojana contra los grupos paramilitares”, que data del año 2003, se hacían indicaciones acerca de cómo debían proceder ante la población civil que estuviera vinculada con los grupos paramilitares en estos territorios. El Plan indica que los civiles que apoyaran a los paramilitares debían ser ubicados, ubicación que define como “inteligencia de combate”. También reconoce que no todas las personas de las que ellos sospecharan efectivamente apoyaban a los paramilitares, por lo cual se sugiere cobrarles un “impuesto de mayor valor que el normal” a las personas sospechosas, para “aburrirlas” en lugar de estar “matando a todo el mundo”. Por último, planean atacar las zonas donde los civiles apoyen a los paramilitares para generar terror y divisiones internas:

[...] “Las zonas donde se identifique apoyo civil a los paramilitares deberán ser objeto de acciones contundentes que generen terror en la población y propicien fracturas internas entre quienes colaboran y quienes no, debilitando así su capacidad de sostenimiento social. [...] El escarmiento que impongamos en estos territorios debe guardar proporción directa con el grado de colaboración de las masas con el enemigo [paramilitares y militares]; solo de esta manera lograremos

romper su voluntad de connivencia y fracturar, desde su propia base, las redes de apoyo que sostienen al adversario."³⁶

[...] "No desconocemos que en algunos casos la sospecha recaída sobre determinadas personas puede no corresponder con un apoyo efectivo a los grupos paramilitares. En estos casos no se procederá de la misma manera que con los colaboradores confirmados, sino que se les impondrá un impuesto de mayor valor que el normal, con el fin de aburrirlas y desestimularlas, en lugar de estar matando a todo el mundo sin distinción. Finalmente, se atacarán aquellas zonas donde se identifique apoyo civil a los paramilitares, con el propósito de generar terror entre la población y propiciar divisiones internas que debiliten su cohesión."³⁷

118. *Privaciones de la libertad de civiles para identificar enemigos.* Un examen del fenómeno a partir de los reportes de acreditación de las víctimas muestra que el Bloque La Mojana concentró reportes de privaciones de la libertad por control territorial en sus zonas históricas de retaguardia, al igual que en aquellas áreas que se disputó con los paramilitares y el Ejército a finales de la década de los noventa y el inicio del siglo XXI. Así, los reportes de las víctimas acreditadas se concentran en los municipios como San Onofre, María La Baja, Zambrano, Majagual y San Benito Abad entre los años 1998 al 2006, periodo de disputa de estas zonas con paramilitares.

119. Un ejemplo de estos hechos es el relato de una víctima acreditada que describe haber sido plagiada por sospecha de ser colaboradora del enemigo antes de la presencia de los paramilitares y del Ejército. Se trata de una mujer embarazada en Guarandá, Sucre en el año de 1995, quien cuenta que fue plagiada por "Paco" en compañía de tres hombres más y bajo instrucciones del comandante del Frente 104. Menciona la víctima que se la llevaron porque según ellos era polochera (término utilizado por las guerrillas a las mujeres que se involucraban o tenían que ver con miembros de la policía o del Ejército). Luego de 8 días de largas caminatas, y de haberle disparado en una pierna, la dejaron cerca de una vereda, donde fue recogida por su padre. Otro ejemplo similar es el de una víctima que cuenta cómo en 1998 en el municipio de Ovejas integrantes del Frente 88 de las FARC-EP, la tuvieron cautiva seis días por una supuesta colaboración con el Ejército. Cuenta que, pese a que confirmaron que no era miembro ni colaborador de la fuerza pública, los

³⁶ Expediente Caso No. 03, Subcaso Huila. Cuadernos de Informes. Informe Génesis. "Plan de acción del Bloque La Mojana contra los grupos paramilitares". 2003. Documento.

³⁷ Ibid.

integrantes de la entonces guerrilla siguieron hostigándola hasta el punto en el cual tuvo que verse en la obligación de desplazarse forzosamente en el 2000.

120. Entre las víctimas acreditadas está la familia de Pedro Rodríguez Ledezma, geólogo, quien el 20 de Julio de 2000 se encontraba elaborando un mapa cartográfico geológico en la vereda de Morro Hermoso, jurisdicción del municipio de Achí (Bolívar), cuando fue retenido por cinco hombres armados. Esta información fue recibida por la familia del geólogo, a quienes les informaron de una posible liberación. Dicha versión se desvirtuaría el 6 de agosto de 2000, cuando se conoció la versión difundida por las FARC-EP sobre la muerte del geólogo, quien habría sido arrojado al río Cauca. Desde entonces la esposa de la víctima, SCA, busca la verdad sobre lo sucedido, ya que ha recibido distintas versiones, incluyendo que las FARC-EP lo habían forzado a hacerles mapas y que el geólogo fue arrojado a un río por un grupo de individuos que se habían hecho pasar como miembros de las FARC-EP. Por el contrario, el comandante del frente 72 del momento, les manifestó a los familiares que el geólogo se encontraba con vida y que tenía lista la negociación para su liberación.

B.3 Calificación jurídica propia de los hechos y conductas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas

121. De acuerdo con lo establecido en el literal (m) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, corresponde a la Sala de Reconocimiento referirse a la calificación jurídica de las conductas efectuada dentro del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024). Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 5 y 22 del Acto Legislativo 1 de 2017 y el artículo 23 de la Ley 1957 de 2019, dicha calificación se llevó a cabo en aplicación armónica del Derecho Penal colombiano (ley 599 de 2000) y las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, verificando que al momento de la comisión de las conductas se estuviera ante una prohibición penal vigente.

122. La Sala desarrolló inicialmente su argumentación en el sentido de demostrar que las conductas determinadas vulneraban, en principio, el ordenamiento jurídico interno, de acuerdo con las conductas tipificadas dentro del Código Penal colombiano. Sin embargo, atendiendo a que limitar la adecuación típica a dicho marco normativo resultaba insuficiente a la luz del derecho internacional y podría resultar lesiva para los derechos de

las víctimas acreditadas ante la JEP, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta lo preceptuado por la Corte Constitucional en el sentido de tener en cuenta también el contenido del Estatuto de Roma para determinar si se cometieron o no conductas que no sean amnistiables.

123. De esta manera, se subsumieron las conductas en los tipos penales del Código penal y en los crímenes internacionales vigentes en el momento de los hechos, en consonancia con decisiones de la Corte Suprema de Justicia³ que indican que una conducta puede constituir un delito conforme al Código penal colombiano y, a la vez, reunir los elementos de diferentes crímenes internacionales. Esta ha sido la solución jurisprudencial para la subsunción en el derecho internacional de los crímenes cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma y del Código Penal del 2000, que son los que contemplan los crímenes internacionales. Con ello, considera, se preserva el principio de legalidad.

124. En este sentido, el Auto de determinación de hechos y conductas señaló que las conductas cometidas por las FARC-EP estaban prohibidas en el momento de su comisión por la ley penal nacional e internacional, no obstante, tenían una denominación diferenciada en ambos marcos normativos. De esta forma, los hechos y conductas que determinados en el Auto se encontraban tipificados de acuerdo con la ley penal nacional vigente al momento de su comisión, bajo los tipos penales de secuestro simple, secuestro extorsivo y toma de rehenes.

125. En cuanto a la no amnistiabilidad de las conductas, la Sala encontró su exclusión de los delitos amnistiables conforme a lo establecido en la Ley 1820 de 2016, aunado a la prohibición de la concesión de este beneficio para los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Dichas conductas son las que enmarcan la competencia de la Sala para el conocimiento del presente caso y las que establecen el margen de reconocimiento que le asiste a los comparecientes como presupuesto para hacerse acreedores a los beneficios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

B.3.1 Crímenes de guerra cometidos por las FARC-EP

Cumplimiento del elemento contextual

126. En el Auto de determinación de hechos y conductas, la Sala partió de reconocer que la calificación de conductas como crímenes de guerra requiere, en primera medida,

que la conducta haya ocurrido en el contexto de un conflicto armado, siendo este el elemento contextual sin el cual se trataría de crímenes ordinarios. En el marco del Estatuto de Roma, para que el reconocimiento como crímenes de guerra se requiere que los hechos: i) hayan ocurrido en el contexto de un conflicto armado, ii) hayan estado relacionados con este y iii) que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían la existencia de ese conflicto.

127. Bajo esta lógica, la Sala recalcó en el Auto de determinación de hechos y conductas que la existencia del conflicto armado con las FARC-EP fue reconocida por el Estado y constituye presupuesto del Acuerdo Final de Paz. Además, la jurisprudencia constitucional ha retomado esta comprensión amplia del conflicto, evitando reducirlo a confrontaciones militares puntuales.⁴ Adicionalmente, la Sala determinó en detalle en la parte contextual del Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024 las características de las FARC-EP como un grupo armado que operó en Colombia entre 1965 y el 2016, con un despliegue territorial que lo llevó a hacer presencia en buena parte del territorio nacional, e incluso a controlar partes poco pobladas del país por periodos de tiempo.

128. Así las cosas, la Sala tuvo en cuenta que la Sección de Apelación ha señalado que el vínculo con el conflicto debe apreciarse de forma amplia, atendiendo a si la conducta fue facilitada, motivada o explicada por la confrontación armada y por la estructura del actor armado.⁵ Por ende, determinó que las privaciones de libertad cometidas por las FARC-EP analizadas en el apartado sobre patrones de macrocriminalidad, se dieron en el contexto del conflicto armado y constituyen crímenes de guerra cuando además están presentes los elementos materiales de los crímenes concretos.

129. De acuerdo con este razonamiento, a través del examen de los hechos determinados por la Sala, se efectuó la calificación jurídica bajo los siguientes crímenes de guerra.

Crimen de guerra de toma de rehenes

130. La Sala partió de la premisa de reconocer que el derecho internacional penal identifica la toma de rehenes como una de las violaciones más graves al DIH. Esta conducta implica la privación de la libertad a una o más personas protegidas y amenazar con

matarlas, lesionarlas o mantenerlas cautivas para obligar a un tercero a hacer o abstenerse de hacer algo como condición para su liberación. Lo cierto es que la libertad es una garantía fundamental del DIH para los civiles y las personas fuera de combate en los conflictos armados no internacionales (CANI) reflejada en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que establece los principios de distinción y humanidad, así como en la norma 96 del DIH consuetudinario³⁸. Incluso, existe una Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes de 1979 que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 837 de 2003³⁹. Por su gravedad, la toma de rehenes fue incluida como crimen de guerra en el Estatuto de Roma (art. 8 c. iii.), encontrándose integrada bajo los siguientes elementos⁴⁰:

- i. Que el autor haya capturado, detenido o retenido como rehén a una o más personas.
- ii. Que el autor haya amenazado con matar, herir o seguir deteniendo a esa persona o personas.
- iii. Que el autor haya tenido la intención de obligar a un Estado, una organización internacional, una persona natural o jurídica o un grupo de personas a que actuaran o se abstuvieran de actuar como condición expresa o tácita de la seguridad o la puesta en libertad de esa persona o personas.
- iv. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
- v. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición.

³⁸ Cabe aclarar que el DIH no se refiere a “civiles” sino a personas que no participen en las hostilidades, bajo el entendido de que un civil puede participar en el conflicto incluso estando desarmado. Por ejemplo, participando como un espía, caso en el cual pierde la protección brindada a quien no participa en las hostilidades a menos que esté “fuera de combate”. Ver Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. Título II – Trato humano. Artículo 4 y CICR, DIH Consuetudinario, 2007, Regla 96.

³⁹ Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la toma de rehenes de 1979, aprobada mediante la Ley 837 de 2003. En el artículo 1.1 se establece lo siguiente: “Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga, y amenace con matarla, hierla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención”.

⁴⁰ Corte Penal Internacional. Elementos de los Crímenes. Art. 8.c.iii.

131. La Sala constató que la amenaza no siempre fue explícita, pues en muchos casos se desprendía del propio cautiverio, de las condiciones de custodia, de los mensajes enviados a terceros, de la posibilidad de ejecución o de la prolongación indefinida de la retención. Los elementos de este crimen permiten valorar esa amenaza cuando el autor condiciona la liberación a una exigencia frente a un tercero. En consecuencia, las privaciones destinadas a obtener rescates, canjes o decisiones del Estado se califican como toma de rehenes.

132. Si bien en el caso de las víctimas militares los miembros de la extinta guerrilla insistieron en versiones orales y escritas que se trataba de “prisioneros de guerra”, lo cierto es que esta calidad no existe en el DIH aplicable a los crímenes cometidos en conflictos armados internos, con lo cual la clasificación relevante es la referida a la participación o no en las hostilidades⁴¹. En consecuencia, las víctimas del crimen de guerra de toma de rehenes son personas que no participan en el conflicto o están fuera de combate, incluyendo militares y policías.

133. La Sala concluyó, en relación con este punto, que desde el momento en que la libertad de estos actores queda condicionada a la liberación de guerrilleros presos, ya se configura el crimen de guerra de la toma de rehenes. En este sentido, como se pudo evidenciar en la identificación de los patrones macrocriminales, desde el año 1997 se recurrió frecuentemente al secuestro de militares y policías con fines de intercambio. Adicionalmente, desde el año 2001, el secuestro con fines de intercambio se focalizó sobre políticos o altos funcionarios del Estado. De esta forma, se configura la toma de rehenes incluso cuando la detención inicial es legal o no está prohibida, ya que la forma como se cae en poder del perpetrador no es lo que define la ofensa, sino la intención de condicionar la libertad.

134. Entre los hechos ilustrativos que dan cuenta de la comisión de este crimen se encuentran los enunciados en el apartado B.2.1.3. de esta providencia en relación con la privación de la libertad de policías y militares donde se destacan múltiples tomas en las que fueron privados de la libertad centenares de agentes de la Fuerza Pública, así como el

⁴¹ El tercer Convenio de Ginebra dispone una amplia protección para los prisioneros de guerra. Sin embargo, el estatuto del prisionero de guerra sólo se aplica en conflictos armados internacionales. En los conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II disponen que las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto también deben ser tratadas con humanidad en todas las circunstancias.

apartado B.2.1.4. en relación con la privación de la libertad de políticos y altos funcionarios, incluyendo un candidato presidencial y una gobernadora en ejercicio de sus funciones: en todos estos casos, un elemento transversal fue la finalidad de intercambiar a los secuestrados por integrantes de las extintas FARC-EP privados de la libertad en centros penitenciarios.

135. Entre los hechos ilustrativos que dan cuenta de la comisión de este crimen se encuentran los enunciados en el apartado B.2.1.3. de esta providencia en relación con la privación de la libertad de policías y militares donde se destacan múltiples tomas en las que fueron privados de la libertad centenares de agentes de la Fuerza Pública, así como el apartado B.2.1.4. en relación con la privación de la libertad de políticos y altos funcionarios, incluyendo un candidato presidencial y una gobernadora en ejercicio de sus funciones: en todos estos casos, un elemento transversal fue la finalidad de intercambiar a los secuestrados por integrantes de las extintas FARC-EP privados de la libertad en centros penitenciarios.

Crimen de guerra de homicidio

136. En el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, la Sala abordó el crimen de guerra de homicidio, el cual se encuentra consagrado en el Estatuto de Roma (art. 8.2) c) i)). De acuerdo con el régimen aplicable, deben concurrir los siguientes elementos para su configuración:

1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas.
2. Que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades.
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición⁴².

137. En este orden de ideas, el crimen de guerra de homicidio en los conflictos armados no internacionales (CANI) requiere que el autor haya dado muerte a una o más personas en el contexto de un conflicto armado, directamente o por interpuesta persona o a través

⁴² Corte Penal Internacional. Elementos de los Crímenes. Art. 8.2.c.i.

de sus órdenes. La muerte puede ser el resultado de un acto u omisión de una o más personas que deben haber tenido la intención de matar a la víctima o causar daños que el autor debería haber sabido podrían causar la muerte⁴³. Los informes estudiados por la Sala dentro de este Caso, así como las víctimas acreditadas como intervinientes, han reportado numerosas muertes de personas en cautiverio, causadas tanto de manera deliberada como en circunstancias tales que era previsible la muerte. Entre los hechos ilustrativos se encuentran casos como los homicidios en el marco de operativos de rescate, tales como la Operación Júpiter en el año 2011.

B.3.2 Crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC-EP

Cumplimiento de los elementos contextuales

138. Los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad se refieren al ataque, masivo o sistemático, contra la población civil, ya sean en tiempos de guerra o en tiempos de paz. En efecto, los tribunales penales internacionales han definido de manera consistente la sistematicidad y la generalidad como elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. La sistematicidad se ha definido como *“la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia fortuita”*⁴⁴. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la sistematicidad se refiere a la existencia *“de una planificación metódica, inmersa en una política común”*⁴⁵. Así, la sistematicidad hace referencia a la naturaleza organizada de la violencia contra la población civil y puede ser el resultado de un plan o política expresa, pero también puede expresarse únicamente en el patrón de hechos, de la cual se puede inferir la política tácita de la organización, que sigue siendo un elemento del ataque.

⁴³ TPIR. Cámara de Apelaciones. Sentencia de 28 de septiembre de 2011. Fiscalía v Setako. Párrafo 257. Ver también: CPI. Sala de Juicio II. Sentencia de 7 de marzo de 2014. Fiscalía v German Katanga. Párrafo 793.

⁴⁴ Esta definición ha sido acuñada por diferentes tribunales internacionales. TPIR. Cámara de Apelaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Fiscalía v Nahimana. Párrafo 920; TPIY. Cámara de Juicio. Sentencia de 24 de marzo de 2016. Fiscalía v Karadzic. Párrafo 477. CESL. Cámara de Juicio II. Sentencia de 18 de mayo de 2012. Fiscalía v Taylor. Párrafo 511. CPI. Sala de Primera Instancia VI. Fiscalía v Ntaganda. Sentencia de 8 de julio de 2019. Párrafo 692

⁴⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 15 de julio de 2015. Radicación No. 45795. También Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 30 de mayo de 2018. Radicación No. 45110.

139. Por su parte, la generalidad se ha comprendido por parte de tribunales internacionales como “una naturaleza a gran escala del ataque y el número de víctimas”⁴⁶ o a la presencia de “un acto singular masivo de una extraordinaria magnitud”⁴⁷. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido que la generalidad hace alusión a la gran escala o multiplicidad de los actos⁴⁸.

140. En el Caso No. 01 se encuentra acreditado que el ataque a la población civil fue tanto sistemático como generalizado. Fue sistemático porque involucró el uso de la violencia organizada, a través de la estructura político-militar de la guerrilla misma, y fue generalizado por la magnitud que tuvo en todo el territorio nacional, en particular entre el periodo priorizado dentro de este Caso.

141. Según el Estatuto de Roma, el ataque constitutivo de los crímenes de lesa humanidad debe ser perpetrado en contra de la población civil, pero no brinda una definición de ésta. Así las cosas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la jurisprudencia de tribunales internacionales, el criterio definitorio para saber si el ataque es contra la población civil es que quienes son objeto de este ataque no deben participar en las hostilidades, ni como individuos, ni como parte de un grupo⁴⁹. Ello no quiere decir que quienes participan de las hostilidades, armados o no, no puedan llegar a ser víctimas de “ataques a la población civil”. Lo que determina si el ataque es contra la población civil es el objetivo del ataque, no la condición de civiles de todas y cada una de las víctimas. Esta regla recoge lo que ha aplicado la CPI para los conflictos armados internacionales, que a su vez acoge la jurisprudencia internacional que ha señalado que la existencia de

⁴⁶ TPIY. Cámara de Juicio II. Sentencia de 7 de mayo de 1997. Fiscalía v. Tadic. Párrafo 648; TPIY. Cámara de Juicio II. Sentencia de 22 de febrero de 2001. Fiscalía v. Kunarac. Párrafo 428. TPIR. Cámara de Apelaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Fiscalía v. Nahimana. Párrafo 920; CPI. Sala de Primera Instancia VI. Fiscalía v. Ntaganda. Sentencia de 8 de julio de 2019. Párrafo 691.

⁴⁷ TPIY. Cámara de Juicio. Sentencia de 26 de febrero de 2001. Fiscalía v. Kordic y Cerkez. Párrafo 179. TPIY. Cámara de Juicio I. Sentencia de 3 de marzo de 2000. Fiscalía v. Blaskic. Párrafo 206.

⁴⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 15 de julio de 2015. Radicación No. 45795. También ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de 30 de mayo de 2018. Radicación No. 45110

⁴⁹ En este sentido la SAI en el caso de Diego Armando Mina decidió que el ataque a la estación de Policía de Orito Putumayo había sido un ataque a un bien civil, dado que en el momento de los hechos la Policía no participaba en las hostilidades. Ver SAI Resolución SAI-OID-D-014-2019.

combatientes en la población no cambia en esencia la naturaleza civil de la misma, siempre que el ataque se dirija principalmente contra los civiles⁵⁰.

142. En el Auto de determinación de los hechos y conductas, la Sala logró, a partir de la contrastación de fuentes, determinar la existencia de dos patrones macrocriminales a través de las políticas sobre privación de la libertad dirigidas contra la población civil. En primer lugar, fue un ataque a la población civil la decisión de plagiar y mantener cautivos a civiles para forzar el intercambio por guerrilleros presos, al fracasar la misma política en relación con oficiales y suboficiales. En segundo lugar, las acciones de control y castigo de las privaciones de la libertad descritas como de control territorial estaban dirigidas también contra la población civil (por ejemplo, los alcaldes y concejales, los trabajadores de organizaciones no gubernamentales (ONG), los campesinos de la zona que violaran las normas de las FARC-EP). Es decir, no solamente contra aquellas personas que pudieran ser supuestos “enemigos” pertenecientes a la sociedad civil. Por lo tanto, la Sala determina que efectivamente existió un ataque generalizado y sistemático de las FARC-EP contra la población civil, por lo que se determinó como parte de la calificación jurídica, la comisión de los siguientes crímenes de lesa humanidad.

Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otras graves privaciones de la libertad

143. En el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, la Sala tomó como punto de partida lo establecido en el Estatuto de Roma, el cual contempla en su artículo 7.1.e) que la encarcelación o grave privación de la libertad física es un crimen de lesa humanidad cuando es parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil y su gravedad resulta de la violación de normas del derecho internacional. De acuerdo con el ER, el crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación de la libertad física se configura cuando se presentan los siguientes elementos⁵¹:

1. Que el autor haya encarcelado a una o más personas o las haya sometido de otra manera, a una privación grave de la libertad física.
2. Que la gravedad de la conducta haya sido tal que constituya una infracción de normas fundamentales del derecho internacional.

⁵⁰ CPI. Sala de Primera Instancia II. Sentencia de 7 de marzo de 2014. Fiscalía v. Germain Katanga, párr. 1103; TPIY. Cámara de Apelaciones. Sentencia de 8 de abril de 2015. Fiscalía v. Tolimir, párr. 142.

⁵¹ Elementos de los crímenes. Artículo 7.1.e.

3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que determinaban la gravedad de la conducta.

144. La CPI afirmó que el elemento de la privación de la libertad (numeral 1-encarcelamiento) se refiere al cautiverio ilegal en distintos ambientes, como una cárcel o una institución psiquiátrica o por medio de otras formas de restricción ilegal del movimiento, como, por ejemplo, en campos de concentración, casas o guetos⁵². En este sentido “otras privaciones graves de la libertad” serían las que no están contempladas en estas diversas modalidades de encarcelamiento, como es el caso de las privaciones de la libertad realizadas por las FARC-EP, donde las personas cautivas por la guerrilla estaban en campamentos o en algunos casos en casas campesinas, en ciertas ocasiones con amarres, y, en todo caso, siempre bajo vigilancia armada, amenaza de muerte y sin la mediación de un proceso legal.

145. Con relación a la gravedad (numeral 2), que se relaciona en el texto con la violación de normas fundamentales del derecho internacional, la CPI señaló que esto se da cuando la privación de la libertad se hace sin sustento legal o sin las debidas garantías procesales propias de un Estado de Derecho. Ello parece definir la gravedad como sinónimo de arbitrariedad únicamente, sin embargo, esta corte también estableció como requisito que la pérdida de la libertad o encarcelamiento sea prolongada en el tiempo⁵³.

146. En cuanto al Caso 01, todos los hechos ya determinados por la Sala como el crimen de guerra de toma de rehenes constituyen a su vez el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad cuando las víctimas son civiles, es decir, personas que no estaban participando en las hostilidades. Ello dado que, además de realizarse en el marco del conflicto armado que es el elemento contextual de los crímenes de guerra, se realizaron en

⁵² CPI. Sala de Cuestiones Preliminares III. Decisión sobre la autorización de una investigación en la Situación de la República de Burundi de 25 de octubre de 2017. Párrafo 68.

⁵³ Adicionalmente, desde la perspectiva de los tribunales internacionales, el TPIY señaló que bastaba con que la restricción al derecho se diera de manera arbitraria, a lo cual el TPIR adicionó que, para que la privación arbitraria de la libertad adquiriera el carácter de crimen de lesa humanidad, esta debe tener una gravedad y seriedad similares a otros crímenes de lesa humanidad. TPIY. Cámara de Apelaciones. Sentencia de 17 de diciembre de 2004. Fiscalía v Kordic y Cerkez. Párrafo 116. TPIR. Cámara de Juicio III. Sentencia de 25 de febrero de 2004. Fiscalía v Ntagerura y otros. Párrafo 702.

el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Adicionalmente, en algunos hechos determinados por la Sala se encontraron privaciones de la libertad para el ejercicio del control territorial en las cuales, de manera arbitraria, los civiles fueron llevados como cautivos de las FARC-EP para hacer averiguaciones sobre su presencia en la zona o para castigarlos con trabajos forzados y otros castigos. Estos hechos no corresponden en estricto sentido al crimen de guerra de toma de rehenes, pero sí corresponden al crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad.

147. Pese a que se podría sostener que algunas de estas privaciones de la libertad no fueron graves en el sentido del numeral 2 del artículo 7.1.e) del Estatuto de Roma, lo cierto es que sí se encuentra configurado su carácter de arbitrariedad, como presupuesto para considerar que hay una violación de los fundamentos del derecho internacional. En cualquier caso, para abordar el atributo de gravedad, más adelante se abordará este atributo dentro de las conclusiones acerca de la individualización y responsabilidad de los comparecientes.

Crimen de lesa humanidad de asesinato

148. El asesinato está contemplado en el artículo 7.1.a) del Estatuto de Roma, el cual recoge los antecedentes del derecho penal internacional⁵⁴. Los Elementos de los Crímenes requieren para su configuración que “el autor haya dado muerte a una o más personas”⁵⁵, así como el hecho de que hubiere sido parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil y que el autor hubiese tenido conocimiento o intención en relación con dicha circunstancia.

⁵⁴ Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg de 1945, artículo 6.b; Ley No. 10 del Consejo Aliado de Control, artículo II.1.c.; Principios de Núremberg de 1945, principio VI; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de 1993, artículo 5.a; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de 1994, artículo 3.a; Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona de 2002, artículo 2.a; Regulación de la UNTAET 2000/15, artículo 5.a.

⁵⁵ Elementos de los crímenes. Artículo 7. 1.a.

149. De acuerdo con el ejercicio de contrastación, se determinó que se presentaron casos de privación de la libertad en los que los secuestros culminaron en la muerte de los civiles cautivos, como bien ocurrió en varias de las privaciones de la libertad con fines de intercambio. En estos casos se configura de manera clara el crimen de lesa humanidad de asesinato.

Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada

150. La Sala tuvo en cuenta que el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada se encuentra consagrado en el artículo 7.1.i) del Estatuto de Roma, a la vez que lo define en su artículo 7.2.i) como la pérdida de la libertad (aprehensión, detención o secuestro) seguida de la negativa de la organización o del Estado de admitir la privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas “con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”⁵⁶. Así las cosas, los elementos de este crimen son los siguientes⁵⁷:

1. Que el autor:
 - a) Haya aprehendido, detenido, o secuestrado a una o más personas; o
 - b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas.
2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido seguido o acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o b) Que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de libertad.
3. Que el autor haya sido consciente de que:
 - a) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
 - b) Tal negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad.

⁵⁶ Estatuto de Roma. Artículo 7.1. i).

⁵⁷ Elementos de los crímenes. Artículo 7.1.i.

4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia.
5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización o apoyo.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

151. Al efectuar el ejercicio de contrastación de fuentes, la Sala determinó que la desaparición forzada del cautivo fue parte del modo de operar de las FARC-EP, que ocurrió en diferentes partes del territorio nacional y durante el periodo estudiado. En efecto, en varios casos de secuestros y toma de rehenes se encuentra que se configuró de manera consecuencial el ocultamiento deliberado del paradero o destino final del cautivo a sus familiares.

B.4 Individualización de responsabilidades de los comparecientes realizada en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024

152. En el Auto de Determinación de Hechos y Conductas esta Sala encontró bases suficientes para entender que las conductas de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes existieron, que se trató de delitos no susceptibles de amnistía e individualizó a quienes participaron en su comisión. En ese acápite se incluyó la selección positiva de los máximos responsables y la modalidad de atribución de la responsabilidad penal.

153. A continuación, se sintetizan algunos apartes de esa decisión de imputación, particularmente sobre las modalidades de atribución de responsabilidad, la trayectoria de los dos comparecientes determinados como máximos responsables y su rol e importancia en la configuración de los patrones macrocriminales.

Modalidades de atribución de responsabilidad penal individual

154. El Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, siguiendo lo establecido en la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, desarrolló las diferentes modalidades de autoría y participación en la comisión de crímenes internacionales comprendidos en el Macrocaso 01⁵⁸. A su vez, ese auto analizó las diferentes formas de responsabilidad por cadena de mando previstas en el Estatuto de Roma y en la LEAJEP.

155. A continuación, y a partir de lo ya determinado por la Sala de Reconocimiento, se hará un breve recuento de las modalidades de atribución de responsabilidad penal de los crímenes de guerra y de lesa humanidad aplicables a los comparecientes imputados, específicamente la coautoría mediata en aparatos organizados de poder y la responsabilidad de mando.

156. Según el artículo 29 del Código Penal es autor quien comete los hechos directamente, por sí mismo o utilizando a otro como un instrumento. El derecho penal internacional utiliza la misma conceptualización de la autoría en el artículo 25.3 literal a) del Estatuto de Roma que la prevé como quien cometa el hecho por sí solo, con otro o por intermedio de otro. La autoría mediata es un concepto de la dogmática penal que desarrolla el contenido de lo que conlleva ser autor “utilizando a otro como instrumento para cometer crímenes”, o cometiendo los crímenes “por intermedio de otro”.

157. A diferencia de la autoría directa, en la autoría mediata quien comete un crimen por intermedio de otro domina el hecho sin realizarlo directamente o a través de sus propias acciones, sino por el dominio que tiene de la voluntad de quien es su instrumento para cometer el crimen. Ello no implica que no sea responsable de los hechos, pero sí permite establecer la responsabilidad penal de quien da la orden. En la terminología propuesta por Claus Roxin, el autor mediato es el “hombre de atrás”, la organización criminal es el “aparato organizado de poder” y el dominio de la voluntad del autor directo se realiza por medio del “dominio de la organización”⁵⁹.

⁵⁸ Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto SRVR-019 del 26 de enero de 2021, párr. 771 al 791.

⁵⁹ Claus Roxin, *Autoría y dominio del hecho en derecho penal* (Madrid, España: Marcial Pons).

158. La autoría mediata permite identificar la autoría de los comandantes de ejércitos regulares o irregulares, ya que las conductas punibles cometidas por guerrilleros o soldados rasos se realizan, por regla general, siguiendo las órdenes de sus comandantes. Si bien esos comandantes no participan directamente en los hechos, sí tienen responsabilidad penal por los mismos. Sin embargo, dada la complejidad de estructuras criminales con un número plural de eslabones entre quien diseña el plan criminal y quien lo ejecuta y, la necesidad de hacer responsable tanto a quien planea el delito (el hombre de atrás) como a quien lo ejecuta (instrumento)-, la Corte Suprema de Justicia dio aplicación a la autoría mediata con instrumento responsable o la autoría mediata en aparatos organizados de poder⁶⁰.

159. El cambio de precedente fue ajustado por la Corte en el año 2009 a partir de los desarrollos doctrinarios y de la jurisprudencia internacional, conforme a lo cual se atribuye responsabilidad penal a todos los que actúan en la cadena de mando de un plan criminal. Desde entonces, se ha considerado que los comandantes de los grupos armados ilegales que no participan en la ejecución material del delito son autores mediatos de los crímenes cometidos por sus subalternos, cuando existe control o influencia de los comandantes y la estructura de la organización criminal brinda certeza del cumplimiento de las órdenes por parte de los subalternos, sin perjuicio de las diferentes formas de imputación de los demás eslabones de la cadena de mando⁶¹.

160. Para probar la autoría mediata se requiere demostrar una serie de elementos relevantes para la aplicación de esta teoría:

- i. Comprobar la existencia de la organización armada como una organización jerarquizada con vocación de permanencia en el tiempo y de carácter ilegal. Para el Macrocaso 01 este elemento fue determinado por la Sala en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, y reconocido por los comparecientes

⁶⁰ Al respecto, variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha abordado el asunto. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencias de 3 de diciembre de 2009 Radicado No. 32672; Sentencia de 23 de febrero de 2010. Radicado No. 32805; Sentencia de 02 de septiembre de 2009. Radicado No. 29221.

⁶¹ Íbid.

pertenecientes al último Secretariado de las FARC-EP, tal como lo estableció la Resolución de Conclusiones SRVR-02 de la Sala de Reconocimiento⁶².

- ii. Que el autor mediato tenía el poder de mando o el dominio de la organización. Este poder se manifiesta a través de su autoridad para dar órdenes y hacer que estas se cumplan, pues tiene la posibilidad de influir y controlar la ejecución del delito. Este elemento se examina en cada auto de determinación de hechos y conductas del Macrocaso 01 respecto al rol efectivamente cumplido por los comandantes que sean identificados como autores mediatos, en cuanto este rol se refleje en órdenes relativas a los secuestros que debían cometer las distintas unidades militares de las FARC-EP.
- iii. Quienes recibían las órdenes y tenían el dominio directo del hecho (en el Macrocaso 01, de las privaciones de la libertad o secuestro) obedecían las órdenes de los autores mediatos, y eran fungibles y, por la misma organización jerárquica, estaban dispuestos a cometer el crimen concreto⁶³. La fungibilidad hace referencia a que los autores directos son fácilmente sustituibles por otros integrantes de la organización, la cual es matizada por la disponibilidad de estos con respecto a los hechos. Es decir, que los autores directos están dispuestos a cometer el crimen y pueden ser reemplazados por otro de similar disposición.

161. La sumatoria de los elementos probatorios antes descritos asegura el automatismo necesario para poder afirmar que, una vez el autor mediato exprese su voluntad u orden, la organización cumplirá con sus designios y, en ese sentido, tiene dominio sobre el hecho. Esto se demuestra a partir de que en las FARC-EP, como estructura militar jerárquica las normas internas disponía sanciones por la violación a las órdenes suministradas por el superior en la cadena de mando. Además, los estatutos preveían la posibilidad de

⁶² Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Resolución SRVR-02 del 24 de noviembre de 2022. [https://relatoria.jep.gov.co/searchproviapi/Resolucio%CC%81n SRVR-02 24-noviembre-2022](https://relatoria.jep.gov.co/searchproviapi/Resolucio%CC%81n%20SRVR-02%2024-noviembre-2022)

⁶³ Esta última condición, es decir, que el ejecutor inmediato o autor directo esté dispuesto a cometer el crimen, es denominado por el Tribunal Supremo Federal alemán, retomando la doctrina de Claus Roxin, como “la elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho” [delictivo]. En: Claus Roxin, “El dominio de la organización como forma independiente de autoría mediata”, *Revista de Derecho Penal*. Conferencia pronunciada el 23 de marzo de 2006 en la Universidad de Olavide, Sevilla, p. 244.

reemplazar o suplir a quien se le dé la orden de ejecutar la conducta (al comandante, por ejemplo) en caso de que faltara o no acatará las órdenes del superior⁶⁴.

162. Es importante aclarar que estos elementos no varían respecto al cargo, sino que se refieren es al rol que se cumple dentro de la organización. Por lo tanto, el poder de mando debe ser analizado en concreto, es decir, es necesario reconocer la posición real que ocupa un mando dentro de la organización y el tipo de aporte que realiza para que se concrete el hecho ilícito⁶⁵. Por tanto, será autor o coautor mediato por control de aparato organizado de poder cuando las conductas cometidas responden al desarrollo de los planes y políticas impartidas por el autor mediato, sea como originador de la orden, o sea en un nivel intermedio de transmisor de esta, siempre y cuando esta transmisión involucre también proferir nuevas directrices para su ejecución.

163. La teoría de la autoría mediata por aparato organizado de poder, es decir, con la organización armada como instrumento, fue adoptada no solo por la Corte Suprema de Justicia sino también por la Corte Penal Internacional (CPI) en su interpretación del artículo 25.3 literal a) del Estatuto de Roma⁶⁶. La CPI, aunque no utiliza expresamente los términos de autoría o coautoría mediata, ha realizado aclaraciones que permiten

⁶⁴ El artículo 4° de los Estatutos de las FARC-EP dispone “la estructura jerárquica de las FARC-EP”, y contempla la figura del reemplazante para comandantes de escuadra, guerrilla, compañía, columna, frente y bloque. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno principal. FGN. Tomo III Documentos rectores FARC-EP. Asimismo, los comparecientes a lo largo de todo el Macrocaso reconocieron que el “reemplazante por simple hecho le corresponde asumir responsabilidades ocasionales de suplir al comandante, por ejemplo, si el comandante él tiene que salir a otra tarea o se enfermó o fallece, por decir algo, entonces asume el reemplazante queda como comandante principal”. En: Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión individual de Floresmiro Burbano. 10/05/2019 Bogotá D.C. Transcripción, pág. 36.

⁶⁵ En el análisis de la sentencia del Tribunal de Jerusalén en el caso de Eichmann, Claus Roxin señala: “quien comete un delito no se libera de su responsabilidad por la circunstancia de que, si él no lo hace, otro habría consumado el hecho. Por otra parte, Eichmann no era sólo un ejecutor [de las órdenes dadas por el régimen nazi], sino que a la vista de sus subordinados era, al mismo tiempo, un mandante, de modo tal que los criterios que hacen de sus inspiradores autores mediatos también lo alcanzan a él”. En: Claus Roxin, “Voluntad de dominio de la acción mediante aparatos organizados de poder”. En: *Doctrina Penal. Teoría y práctica en las ciencias penales*. Revista Trimestral, 8, 29-32. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1985, pág. 404.

⁶⁶ Corte Penal Internacional. Sala de Cuestiones Preliminares I. Decisión de confirmación de cargos de 30 de septiembre de 2008. Fiscal vs. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, párr. 498 y ss.

identificar las nociones de autoría, coautoría, autoría mediata, complicidad e instigación, tal como aparecen en el Derecho Penal colombiano. Así, por ejemplo, en la decisión de confirmación del asunto Katanga, la CPI aplicó la noción de autoría mediata por dominio del hecho, utilizando la propuesta de Roxin e incluyendo la prueba de la existencia de un aparato de poder y el dominio del hecho mediante el control de la organización que actúa de forma automática por medio de los ejecutores materiales, quienes son fungibles y predispuestos a cometer los hechos⁶⁷.

164. La CPI también ha atribuido responsabilidad por medio de la tesis de la coautoría mediata o indirecta por dominio de la organización, haciendo una conjunción de los elementos estructurales de la autoría mediata con la coautoría⁶⁸. Ello responde a la realidad de los crímenes internacionales, en los que la coordinación y el reparto del trabajo se hace no solo de forma horizontal entre los coautores de un mismo nivel de mando, sino también de forma vertical.

165. En el Auto SRVR-019 esta Sala determinó la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las FARC-EP como coautores mediatos, a partir de la jurisprudencia planteada. Además, aclaró que esta responsabilidad surgía no solo del rol cumplido en cuanto miembros del Secretariado, y partícipes en los plenos del Estado Mayor Central en los que se adoptaron las políticas de secuestro, sino también en tanto Coordinadores y comandantes de Bloque⁶⁹.

166. Con esas precisiones, la Sala determinó que las privaciones de la libertad documentadas demostraban la intención de los comparecientes de violar los principios de

⁶⁷ Íbid.

⁶⁸ Ver, por ejemplo, Corte Penal Internacional. Sala de Cuestiones Preliminares I. Decisión de confirmación de cargos de 30 de septiembre de 2008. Fiscal vs. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, párr. 524 y ss; y también, Corte Penal Internacional. Sala de Juicio. Sentencia de 8 de julio de 2019. Fiscalía v Ntaganda, párr. 781 y siguientes.

⁶⁹ Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto SRVR-019 del 26 de enero de 2021. https://relatoria.jep.gov.co/searchproviapi/Auto_SRVR-019_26-enero-2021

humanidad y de distinción que son los principios rectores del Derecho Internacional Humanitario.

El compareciente Laureano Serna, como comandante del Bloque La Mojana y exintegrante del Secretariado es coautor mediato por aparatos organizados de poder de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y de los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

Identificación y trayectoria

167. El señor Laureano Serna Abdala, identificado con cédula de ciudadanía 79.276.584, nacido en Plata Perdida, Cesar en 1956. Ingresó a las extintas FARC-EP en el año 1973 en las filas del Frente 77 en Tolima. En 1978 ascendió a ser suplente del comandante del Frente 99, recién creado en el norte de Antioquia y en 1980 se convirtió en comandante de ese Frente.

168. En 1982 participó en la creación de la Columna Móvil “El Cóndor Herido”, la cual dirigió hasta 1985, cuando regresó al Frente 99.

169. En 1988 fue elegido como segundo al mando del Bloque La Mojana y en 1990 fue nombrado comandante de ese Bloque. En 1993 fue nombrado miembro del Estado Mayor Central, y ocupó el cargo de suplente del Secretariado desde el año 1995. Desde el año 1997 hasta su captura en el año 2013 ejerció como miembro en propiedad del Secretariado de las FARC-EP en calidad de Coordinador del BLAM y ocupó el cargo de Coordinador y comandante del Bloque hasta 2013.

Determinación de la Sala

170. A partir del ejercicio de contrastación realizado por la Sala de Reconocimiento, se determinó que contaba con información suficiente para determinar que el compareciente Laureano Serna Abdala es **coautor mediato por aparatos organizados de poder de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y de los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada**, debido a su participación, como miembro del Estado Mayor Central, del Estado Mayor del

Bloque La Mojana y como representante ante el Secretariado de ese Bloque para la orientación estratégica y operacional y en la toma de decisiones de la política de las FARC-EP dirigida privar de la libertad a oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y la policía puestos fuera de combate para forzar un intercambio por guerrilleros y de la política de privar de la libertad a civiles para intercambiar por guerrilleros presos; y por la implementación de la política de privar civiles como parte de las dinámicas de control social y territorial.

Atribución de responsabilidad

171. Como se señaló, la atribución de responsabilidad por coautoría mediata por control del aparato organizado de poder requiere demostrar tres elementos:

- i) Comprobar la existencia de la organización armada como una organización jerarquizada con vocación de permanencia en el tiempo y de carácter ilegal.

172. Al respecto, la Sala de Reconocimiento ha determinado dentro del Macrocaso 01 que las FARC-EP eran una organización de carácter ilegal con permanencia en el tiempo, en donde el Bloque La Mojana fue una de sus estructuras que operó entre 1987 y el 2016 en el noroccidente del país.

- ii) El coautor mediato tenía el poder de mando o el dominio de la organización, a través de su autoridad para dar órdenes y hacer que estas se cumplan pues tiene la posibilidad de influir y controlar la ejecución del delito.

173. El compareciente Serna, como miembro del Estado Mayor del Bloque la Mojana, como comandante de ese Bloque y representante ante el Secretariado, tomaba decisiones operacionales y tácticas para hacer operativas las indicaciones estratégicas del Secretariado frente a la política de secuestros. Pero además de transmitir las instrucciones del Secretariado, también se involucró en la emisión de nuevas órdenes para la materialización de las decisiones estratégicas.

174. El compareciente tuvo responsabilidad por la política de secuestro con fines de intercambio y su implementación. La Sala determinó que la política de privar de la libertad a oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y la policía puestos fuera de combate, para

forzar un intercambio por guerrilleros presos, surgió en el Pleno del Estado Mayor de 1997⁷⁰.

175. En su versión voluntaria, el compareciente mencionó que participó en ese Pleno, en donde fue nombrado miembro del Secretariado en propiedad.

176. Como participante de ese Pleno como miembro del Estado Mayor Central y miembro del Secretariado en calidad de suplente y luego en propiedad participó en la decisión de privar de la libertad a miembros de la Fuerza Pública. En cumplimiento de esta orden, como ha determinado la Sala, las FARC-EP mantuvo cautivos a oficiales y suboficiales. Esos hechos, que tuvieron la finalidad de forzar el intercambio por guerrilleros presos constituyen el crimen de guerra de toma de rehenes. Además, la orden incluía el eventual asesinato de los cautivos que se hizo efectivo en ocasiones, por lo cual también constituye el crimen de guerra de homicidio.

177. Ahora bien, la Sala también identificó el poder de mando del compareciente con la decisión de modificar la política para privar a políticos de la libertad. El compareciente fue determinante en el cambio de esa política, siendo quien elevó el asunto hasta el Secretariado, participó en su discusión y quien, al menos al interior del BLAM, dio la orden de privar de la libertad a políticos con fines de intercambio desde el año 2001.

178. Por otro lado, las versiones voluntarias de comandantes de Frentes que componían el BLAM han reconocido que recibían órdenes del Estado Mayor del Bloque y reconocieron que el señor Serna, conocido como “El Cucayo”, como comandante del Bloque ejercía mando directo sobre los Frentes en razón a la cadena de mando, mediante el suministro de planes desde el Estado Mayor y por medio de comunicaciones.

179. El compareciente tuvo responsabilidad por la política de secuestro con la finalidad de control social y territorial. La Sala determinó que el señor Serna, en cuanto comandante

⁷⁰ JEP. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto SRVR-019 del 26 de enero de 2021.

del BLAM es coautor mediato de los crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, asesinato y desaparición forzada, y de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, que se hayan cometido de manera concurrente en esa modalidad.

180. Ello por cuanto esos hechos, cometidos por las unidades militares a su mando, eran parte de la instrucción dada por la comandancia de ejercer el control en la zona a través de la identificación y eliminación de personas consideradas como como enemigos de la organización, sospechosos o quienes no obedecían a la guerrilla, y el control de las actividades de la población civil⁷¹. Todo lo anterior como parte del Plan Estratégico de las FARC-EP, en el que a su vez participó en calidad del miembro del Secretariado. Entre esas instrucciones se encuentra el homicidio identificado como “ajusticiamiento”.

181. Adicionalmente, la Sala consideró contar con suficientes fuentes que demostraron que los asesinatos de personas, entre ellos las personas secuestradas, que eran realizados por los guerrilleros, se consultaban con los superiores⁷², y que en algunos casos hubo órdenes de asesinato en caso de intento de rescate militar.

182. En cuanto al ocultamiento deliberado del paradero de cautivos también era una eventualidad contemplada en las órdenes generales suministradas por el Secretariado y los miembros del Estado Mayor.

- iii) Quienes tenían el dominio directo del hecho obedecían las órdenes de los autores mediatos y, por el mismo funcionamiento de organización jerárquica, estaban dispuestos a cometer el crimen concreto.

⁷¹ El compareciente Pedro González López, quien fue comandante del Frente 88, mencionó en su versión voluntaria que desde el Estado Mayor del Bloque La Mojana existió una instrucción de ejercer control sobre las zonas con presencia de la tropa. Ese control iba desde mantener la seguridad y convivencia, hasta castigar a personas que no fueron afines o contradijeran las órdenes de las FARC-EP, muchas veces mediante secuestros y castigos.

⁷² Al respecto, Pablo Páez, quien ejerció la comandancia de diferentes columnas del BLAM presentó en su versión voluntaria que la decisión de asesinar personas en cautiverio no era una decisión de la tropa, y siempre se consultaba con superiores, bien fuera en el nivel de frente o de Bloque, salvo en situaciones a veces de intentos de rescate militar donde las circunstancias no permitían comunicación con superiores.

183. Dentro de la estructura jerárquica establecida por las FARC-EP las órdenes emanadas de los superiores eran cumplidas bajo toda la cadena de mando.

184. Para el caso puntual, el señor Serna participó en la cadena superior de las órdenes tanto al nivel de las FARC-EP como del Bloque La Mojana, y las órdenes que se impartían eran cumplidas, siendo los autores materiales fungibles dentro del plan, pues cualquiera por debajo de la cadena de mando debía cumplir con la disposición del superior, so pena de incurrir en sanciones internas.

185. Además, la Sala ha señalado que cuando se trata de organismos colegiados de dirección “la emisión de órdenes nacionales y su implementación coordinada a través de las unidades militares que supervisaban directamente como coordinadores o comandantes corresponde a la modalidad de coautoría mediata”⁷³.

186. En el mismo auto de determinación, la Sala estableció que las conductas cometidas por el compareciente cumplieron los elementos mencionados de los crímenes internacionales. Con todo la anterior, la Sala llamó al señor Laureano Serna Abdala a reconocer su responsabilidad como máximo responsable en calidad de coautor mediato por aparatos organizados de poder de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y de los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada por hechos ocurridos entre 1990 y 2013.

La compareciente Ainhoa Etxebarria García, como miembro de la cartera de Educación del Estado Mayor del Bloque La Mojana y persona determinante en la variación del patrón macrocriminal es coautora mediata por aparatos organizados de poder del crimen de guerra de toma de rehenes y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad.

⁷³ JEP. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Auto SRVR-019 del 26 de enero de 2021, párr. 787 a 791.

187. La señora Ainhoa Etxebarria García, con cédula de extranjería 570987, nacida en Villamediana de Iregua, La Rioja, España en el año 1958. En el año 1977 ingresó a la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA), siendo parte de la rama político militar de esa organización.

188. En el año 1978 se movilizó a Italia, en donde perteneció hasta 1982 a las Brigadas Rojas o *Brigate Rosse*. Durante su etapa en Italia participó directamente del secuestro del político italiano Aldo Moro, quien fue asesinado días después.

189. En 1982 regresó a ETA, en donde ejerció diferentes roles dentro de esa organización. En el año 1987 fue comisionada para asistir a una serie de eventos en la Unión Soviética, en 1991 visitó Colombia como parte de unos acuerdos de colaboración con las FARC-EP y en 1995 visitó Cuba para una serie de encuentros y eventos. En el año 1997 participó en la planeación del secuestro del político español Miguel Ángel Blanco, quien fue posteriormente asesinado.

190. En el año 1998 decidió migrar a Colombia bajo la invitación del compareciente Serna, e ingresó a las FARC-EP. En 1999 fue nombrada miembro del Estado Mayor del Bloque La Mojana, como líder de la cartera de educación de ese bloque.

Determinación de la Sala

191. A partir del ejercicio de contrastación realizado por la Sala de Reconocimiento, se determinó que contaba con información suficiente para determinar que la compareciente Ainhoa Etxebarria García es **coautora mediata por aparatos organizados de poder del crimen de guerra de toma de rehenes y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad** debido a su participación, como miembro del Estado Mayor del Bloque La Mojana a cargo de la cartera de educación y como una persona que tuvo un rol determinante en la orientación estratégica de la decisión del Secretariado de las FARC-EP de variar su política de privación con fines de intercambio de miembros de la Fuerza Pública a políticos y personalidades destacadas.



192. La Sala reiteró en ese punto la definición de máximo responsable adoptada por la Sección de Apelación en la Sentencia Interpretativa SENIT 5, recordando que se trata de personas que tuvieron un rol esencial en la planeación, ejecución y desarrollo de los patrones de macrocriminalidad, o en la organización delictiva de la que hicieron parte⁷⁴. Además, distinguió los máximos responsables por liderazgo y por participación⁷⁵.

193. Frente a la máxima responsabilidad por liderazgo recalcó que se trata de personas que ejercieron liderazgo por su posición jerárquica o rango *de iure* o *de facto*, de tipo militar político, económico o social en la estructura de la organización o del patrón de criminalidad.

194. Adicionalmente recordó que la calidad de máximo responsable no guarda ninguna conexión con la imputación ordinaria a título de partícipe o autor, sino con su rol esencial o determinante dentro del patrón macrocriminal⁷⁶.

195. Bajo esas precisiones y conforme a los criterios de selección del artículo 19 de la Ley 1957 de 2019 y de la Sala de Reconocimiento en la Resolución SRVR-001 de 2024, determinó a la señora Etxebarria como **máxima responsable por liderazgo de facto** frente al patrón macrocriminal de privar de la libertad con fines de intercambio, puntualmente del cambio de política de privar de la libertad a miembros de la Fuerza Pública por políticos con fines de intercambio por guerrilleros presos.

196. Para la Sala, la compareciente tuvo un rol esencial en el cambio de política ocurrido en el año 2002. Como se mencionó, a partir de ese año el patrón macrocriminal varió, y en lugar de privar de la libertad a miembros de la Fuerza Pública se secuestró a políticos del nivel local, regional y nacional, todo con la finalidad de intercambiarlos por miembros de esa guerrilla presos. Si bien no existió una directriz o comunicados oficiales por parte de

⁷⁴ Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, Sentencia SENIT 5 del 17 de mayo de 2023, pár. 55.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, pár.57.

las altas instancias de las FARC-EP sobre ese cambio, la Sala encontró bases suficientes para entender que sí existió una orden de modificar la estrategia y privar a políticos de la libertad.

197. Dentro de ese cambio, la Sala también encontró bases suficientes para entender que la señora Etxebarria fue esencial para que las FARC-EP variara esa política. Se trató de graves crímenes constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, representativos dentro del patrón macrocriminal durante el conflicto armado.

198. Fue el conocimiento previo de la compareciente, su función y confianza con el miembro del Secretariado Laureano Serna y su determinación en los detalles sobre cómo podría “mejorarse” esa política lo que llevó a que desde las altas instancias se tomara la decisión de modificar el patrón.

199. La señora Etxebarria no tenía mando dentro de la organización y por tanto no podía dar órdenes formalmente, tampoco tenía un poder *de iure* dentro de las FARC-EP para modificar la política desde las más altas instancias de la organización. Sin embargo, sí tuvo un liderazgo de facto en la organización. Como miembro del Estado Mayor del BLAM la compareciente tenía reconocimiento de la tropa, al menos en las regiones de ese Bloque. Además, como encargada de la cartera de educación tuvo un papel importante en la formación de los miembros de esa guerrilla en el BLAM y en la conceptualización y formación técnica e ideológica de la tropa. También conoció la Sala que era una persona asociada y cercana con el comandante del Bloque Laureano Serna⁷⁷.

⁷⁷ Al respecto, en la versión voluntaria el compareciente Pedro González afirmó: “sí señor juez. La Vasca era una persona de la más extrema confianza del comandante. Se contaba que ellos se habían conocido en diferentes encuentros en Cuba y fuera del país y que él mismo la invitó a formar parte de las FARC. Ella era del ETA, una persona muy inteligente y con muchos conocimientos. Fue muy buena su entrada al Bloque y se ganó el respeto de la tropa”. Por su parte, el señor Serna Abdala en su versión voluntaria aclaró en su versión voluntaria: “Yo conocí a Ainhoa en el 87 en la URSS y seguí en contacto con ella cuando vino a Colombia y luego en Cuba. Es una persona fantástica, con una formación ideológica maravillosa y con conocimiento práctico en temas bélicos y de estrategia. Yo la invité a Colombia a ser parte de mi Bloque. [...] No se entienda con esto que tuvimos una relación amorosa ni nada por el estilo, nada más diferente a la realidad. Era una relación profesional, de profunda admiración, ella le ofreció mucho al Bloque y me aportó mucho a mí a nivel personal como amiga”.

200. Su importancia en el Bloque se observó particularmente con el cambio de política para privar a políticos. Para esta Sala, se probó que la idea de ese cambio fue de ella, y fue su respeto y sus contactos lo que determinó que esa idea llegara hasta el Secretariado.

201. Como destacó la Sala en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, la política de privación con fines de intercambio no estaba dando los resultados esperados, y ahí fue donde una idea de la compareciente supuso el cambio hacia la privación la libertad de políticos. Todo surgió de la trayectoria de la señora Etxebarria en ETA y las Brigadas Rojas. Tenía experiencia y conocimiento en la privación de la libertad de personalidades políticas, incluso con fines de intercambio. Esa experiencia llevó a la compareciente a sugerir un cambio en la política, la cual manifestó a los miembros del Estado Mayor del BLAM, especialmente al comandante Serna.

202. No existen pruebas documentales referentes a esa información por tratarse de un asunto que hasta ese punto no era oficial, reiterando que la compareciente Etxebarria no tenía mando. Pero la Sala cuenta con pruebas contrastadas que dan bases suficientes para entender que la iniciativa surgió de Ainhoa Etxebarria García.

203. Gerardo Martínez, miembro del Estado Mayor del BLAM entre 1999 y 2005 en las carteras de Finanzas e Inteligencia, mencionó ante la Sala recordar una reunión de ese Estado Mayor en el que se abordó el tema de la privación de la libertad de policías y militares, en la cual la señora Etxebarria mencionó que se debería pensar en el secuestro de políticos:

Eso debió ser a mediados del 2000, cuando estaba en discusión la propuesta de Ley de Canje, y se estaba hablando de lo que se había logrado con esos secuestros de policías y demás. En algún punto la compañera Ainoa [sic] mencionó que deberíamos pensar en secuestrar políticos, que en su experiencia podía tener una mayor repercusión y podríamos lograr mejores intercambios. Realmente no recuerdo si se discutió mucho del tema, pero sí que se mencionó.

[...]

Yo sé que meses después de eso, las FARC inició a privar políticos. En el Bloque no existió una orden puntual frente a eso, quedó más en manos de columnas especiales, pero sí existió. De cualquier forma, también fue un fracaso la estrategia, el gobierno del señor Uribe decidió no negociar ningún tipo de canje o intercambio, y no se logró nunca nada con ellos.⁷⁸

204. Por su parte, la compareciente fue cuestionada por esto, y afirmó por escrito dentro de un cuestionario remitido:

[...] sobre el punto de los secuestros de políticos puedo informar que se trató de hechos generalizados en las FARC desde el 2001, más o menos. Por generalizado no digo que eran muy comunes ni lo hacían todos los bloques, pero me consta que sí sucedió y sucedió en varios bloques, incluido el Bloque La Mojana. Yo sé que el comandante Serna elevó el asunto para ser discutido por el Secretariado y recuerdo que se me citó a presentar ante ellos la forma y estrategia de secuestros de esa índole que se realizaba en ETA y en las Brigadas Rojas. No recuerdo las fechas puntuales, pero sí consideraba que se trataba de una estrategia que podía dar mayores frutos que el de militares, [...] ⁷⁹.

205. Adicionalmente, la compareciente participó en la fase de ideación del secuestro de un candidato presidencial del año 2002, como se profundizó con anterioridad. En ese punto, se determinó que ella planeó bajo su experiencia y conocimientos el secuestro del candidato, siendo una especie de secuestro de ejemplo para que el Secretariado conociera de la forma de realizar los secuestros y de sus resultados. Esos hechos fueron profundizados previamente, pero se debe destacar que fue a la compareciente a quien se eligió para enseñar la forma de planear, incluyendo la selección del objetivo, y ella fue quien eligió los medios para ejecutar la acción.

⁷⁸ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Gerardo Martínez. 23/09/2020. Bogotá, D.C.

⁷⁹ Expediente Caso No. 01. Cuaderno de VV y traslados. Versión Ainhoa Etxebarria García. 15/03/2020. Bogotá, D.C.

206. Por otro lado, la Sala conoció que fue por intermedio del señor Serna que esa idea inicial de la compareciente llegó hasta el Secretariado, cuestión que no se hace extraña dada la cercanía entre los dos comparecientes. La idea fue debatida por parte de los miembros del Secretariado a mediados del año 2001 e incluso se solicitó a la compareciente Etxebarría ilustrar ante el Secretariado las tácticas y estrategias que ella conoció por su experiencia en el continente europeo⁸⁰. Fue en esa instancia donde se le pidió a la compareciente realizar un secuestro de ejemplo, buscando probar la viabilidad de variar la política.

207. Para la Sala, la participación de la compareciente, a través de su liderazgo de facto y su conocimiento, fue esencial para el cambio de la política dentro del patrón macrocriminal caracterizado.

208. Bajo lo anterior, la Sala determinó a Ainhoa Etxebarría García como máxima responsable por liderazgo de facto en la modificación de la política dentro del patrón macrocriminal de secuestro con fines de intercambio. Fue la persona determinante para que esa política se modificara, aunque de manera tácita, por parte de las altas instancias de las FARC-EP.

Atribución de responsabilidad

209. Una vez establecida su máxima responsabilidad, la Sala de Reconocimiento llamó a la compareciente a reconocer su responsabilidad en calidad de coautora mediata por control del aparato organizado de poder.

210. Como se mencionó previamente, la Sala analizó los requisitos para la configuración de ese título, encontrando probada la existencia de una organización armada ilegal jerarquizada con vocación de permanencia en el tiempo y la fungibilidad de los autores materiales bajo el cumplimiento estricto de órdenes dentro de la organización.

⁸⁰ Así lo afirmaron en sus versiones voluntarias diferentes miembros del Secretariado en ese momento y personas que asistieron a esas discusiones.

211. Frente al dominio de la organización, la Sala reiteró que la compareciente ejerció un liderazgo de facto dentro de las FARC-EP, teniendo un dominio puntual sobre la organización. Su dominio no era absoluto, pues su calidad como miembro del Estado Mayor del BLAM no le permitía de iure modificar políticas propias del Secretariado. Sin embargo, sí tuvo el dominio suficiente para lograr elevar la idea al Secretariado, influyó en que esta instancia modificara la política e incluso llegó a realizar una acción para mostrar cómo se harían esos secuestros. Todo lo anterior bajo un poder por su conocimiento previo, por el respeto que tenía dentro de la organización y su cercanía con personas del Secretariado.

212. En el mismo Auto de Determinación (Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024), la Sala estableció que las conductas cometidas por la compareciente cumplieron los elementos mencionados de los crímenes internacionales. Con todo la anterior, la Sala llamó a la señora Ainhoa Etxebarria García a reconocer su responsabilidad como máxima responsable en calidad de coautoría mediata por aparatos organizados de poder del crimen de guerra de toma de rehenes y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad por hechos ocurridos entre 2001 y 2013.

C. RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÚLTIMO SECRETARIADO DE LAS FARC-EP

C.1. Estándar de reconocimiento en la SRVR

213. De conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, y desarrollado por la LEAJEP, los comparecientes, para ser incluidos en una resolución de conclusiones, deben aportar verdad plena y reconocer responsabilidad individual, aceptando las imputaciones hechas por la SRVR al culminar su ejercicio de contrastación. El reconocimiento o no de responsabilidad individual es independiente del aporte a la verdad plena, definido como: *“relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las*

informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición". Por lo tanto, la Sala de Reconocimiento debe evaluar en esta resolución tanto el reconocimiento de responsabilidad individual hecho por los comparecientes, como su aporte a la verdad plena.

214. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad individual, más allá de la mera aceptación de la imputación, el Auto 27 de 2022 la Sala de Reconocimiento señaló que el carácter dialógico y restaurativo del procedimiento exige que el reconocimiento respete un núcleo básico con una dimensión fáctica, una jurídica y una restaurativa. Así, el reconocimiento está compuesto por i) un componente fáctico, es decir el reconocimiento de los hechos con un aporte detallado y exhaustivo; ii) un componente jurídico, que alude a la naturaleza no amniable de las conductas cometidas y a la responsabilidad individual en estas, y iii) un componente restaurativo, relacionado con la necesidad de nombrar y aceptar el daño causado.

215. Frente al componente fáctico, la Sala de Reconocimiento señaló en el Auto No. 27 que "el reconocimiento debe versar sobre los hechos determinados en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, y la participación individual en estos". Así, la Sala diferenció el estándar de reconocimiento completo, detallado y exhaustivo de los autores directos de los hechos, de quienes la JEP puede esperar que aporten verdad detallada sobre los hechos individuales; del estándar aplicable a los comparecientes en cuanto dirigentes que, por detallada, exhaustiva y plena que sea, no puede comprender descripciones o reconocimientos detallados de cada uno de los hechos por los cuales los guerrilleros ejecutaron sus órdenes. Este estándar también había sido adoptado por la Sala en el Auto No. 19 de 2021 al señalar que *"en cuanto son autores o coautores mediatos, es decir, dieron las órdenes, dada la generalidad de las órdenes y la magnitud de los hechos...la obligación de aportar verdad detallada, exhaustiva y plena no puede exceder lo que efectivamente conocieron, ni eludir el que sea poco probable que conozcan las circunstancias de todas las víctimas individuales acreditadas en este caso."*⁸¹

⁸¹ JEP. Sala de Reconocimiento. Auto No. 19 de 2021. Párrafos 816 - 818.

216. Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento estableció que el reconocimiento fáctico de los comparecientes exmiembros del Secretariado de las FARC-EP comprende, de un lado una intención sincera de liderar el reconocimiento colectivo, es decir, de liderar la participación de distintos miembros de la antigua guerrilla para aportar, en cuanto autores directos o testigos de los hechos, la verdad detallada, exhaustiva y plena sobre los hechos que buscan las víctimas y, de otro un reconocimiento individual de su participación en los hechos determinados en el Auto 19 de 2021, detallando de manera exhaustiva y plena su rol dentro de la estructura de mando de la antigua organización armada”⁸².

217. Frente al componente jurídico del reconocimiento, la Sala de Reconocimiento ha establecido que este comprende: i) la naturaleza no amniable de los hechos y conductas y a su gravedad, si bien no respecto a cada tipo penal específico, y ii) la modalidad de comisión que da lugar a la responsabilidad individual, en particular a la máxima responsabilidad del compareciente individual en la ocurrencia de los crímenes de sistema. Sobre este último punto, la Sala reafirmó la jurisprudencia constitucional frente a la necesidad de reconocer las modalidades de comisiones de la conducta para acceder a una sanción propia:

“Al respecto, la Corte Constitucional señaló que el reconocimiento de responsabilidad de los máximos responsables que puedan acceder a las sanciones propias debe ser individual y debe comprender las modalidades de comisión individual. Así, lo afirmó al estudiar la exequibilidad del artículo 128 de la Ley 1957 de 2019: *“la obligación de ofrecer verdad por parte de los responsables contiene dos obligaciones. Una la que tienen como testigos, en la cual, como indica la norma constitucional citada, no supone la obligación de reconocer responsabilidad, pero sí la de dar toda la información sobre la comisión de los hechos. Una segunda obligación es la de reconocer responsabilidad sobre los hechos que hayan cometido conforme a las diferentes modalidades de comisión, ya sea autor, autor mediato, coautor, instigador o determinador, y cómplice; incluyendo las formas de responsabilidad por cadena de mando contempladas en el Estatuto de Roma, así como en las normas aplicables del proyecto de Ley Estatutaria.*

⁸² JEP. Sala de Reconocimiento. Auto No. 27 de 2022. Consideración 33.

En todos los casos en que la persona sometida a la JEP sea responsable, deberá reconocer dicha responsabilidad para acceder a las sanciones propias” (Subrayado fuera del texto original).

218. Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que el reconocimiento de responsabilidad de los máximos responsables ante la Sala de Reconocimiento debe ser individual y debe comprender las modalidades de comisión que permiten comprender la ocurrencia de los crímenes de sistema por parte de estructuras organizadas con un mando responsable. Así, la Corte Constitucional al analizar el artículo 80 de la Ley 1957 de 2019 señaló: *“la Corte condicionará la expresión “colectiva” en el sentido de que la posibilidad de realizar reconocimientos de manera colectiva no sustituye ni agota de manera alguna, el deber individual de reconocimiento de verdad y responsabilidad”*. De este modo, debe entenderse también que la dimensión jurídica del reconocimiento de la modalidad de comisión de los delitos por parte de los máximos responsables está relacionada con el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad.

219. Frente al componente restaurativo del reconocimiento, la Sala de Reconocimiento considera que este debe responder a la gravedad de las conductas con el reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas (que es diferente a explicar su contexto de ocurrencia), reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes. De este modo, el reconocimiento ofrecido ante la Sala debe cumplir con los siguientes criterios restaurativos:

Reconocer que los hechos sucedieron. Este primer criterio implica aceptar la realidad de la denuncia de la víctima y la injusticia de su sufrimiento. Ello no quiere decir que el dicho de la víctima sea incontrovertible, sino que, al no tener elementos o razones para controvertirlo, se brinde credibilidad al relato de la víctima. La Sala reconoce que algunas narraciones especialmente graves parecen desgarrar el sentido de lo que comprendemos como real y posible. Sin embargo, el reconocimiento es también el de la crueldad humana que detona la guerra como circunstancia límite, que no se debe repetir. Además, debe advertirse que los

individuos viven las circunstancias de sufrimiento y humillación de manera distinta, y si bien los hechos pueden haber sido tolerados de manera distinta por los combatientes, esto no debe negar la realidad del trauma y el sufrimiento relatado por la víctima.

Reconocer que los hechos fueron graves crímenes. Los hechos determinados por la Sala deben ser reconocidos por los comparecientes como graves crímenes, no solo porque es un elemento del reconocimiento jurídico, sino porque la víctima, para sentirse reconocida como tal ante la ley y la administración de justicia, requiere la enunciación y el reconocimiento de la violación de la ley que la constituye en víctima. Este reconocimiento se diluye cuando se describe el hecho como un accidente o un error.

Frente a esto, la Sala ya se ha pronunciado en el Auto No. 19 de 2021 y el Auto 279 del mismo año. Las víctimas esperan que los comparecientes al referirse a los hechos reconozcan el carácter no amnistiable, condenable e inaceptable que tuvieron. Ello no requiere, como ya se anotó frente a este punto, el reconocimiento de todas y cada una de las tipologías penales específicas del derecho nacional e internacional que la Sala emplea para calificarlas, pero sí de su gravedad en cuanto crímenes de guerra y lesa humanidad, y no errores o accidentes.

No justificar los hechos. El reconocimiento de responsabilidad que se hace ante la Sala no debe justificar los hechos y conductas bajo las mismas lógicas que acompañaron su ocurrencia dentro de una guerra a la cual ya se puso fin. Así, no justificar las graves conductas implica evitar utilizar una retórica que pretenda validar moral y éticamente la comisión de las atrocidades cometidas durante la guerra, lo cual no implica negarse a dar a conocer los elementos contextuales que permiten conocer lo sucedido. A partir del relato de los comparecientes, la Sala notó que en la lógica bélica los combatientes actuaban bajo lo que ellos denominaban como “necesidad militar” y tácticas de la guerra.

Estas explicaciones también son experimentadas por las víctimas como la exculpación de quienes, por el control que tenían de la organización, han debido asegurarse de que, en efecto, el trato brindado reconociera la dignidad humana.

Para la Sala, el reconocimiento implica deponer la razonabilidad que operó en el pasado, y evidenciar un cambio en el marco ideológico, desde el cual cualquier justificación es insuficiente para el daño causado. En esta medida, las víctimas pueden entender el sentido que tuvieron las acciones en el momento de la guerra, pero exigen que hoy en día los antiguos combatientes renuncien a esta justificación cuando esta resultó en graves violaciones de los principios de humanidad, distinción y proporcionalidad que deben guiar el accionar bélico de todos los actores armados.

Reconocer el daño causado en su especificidad. Nombrar el daño que se asocia con los hechos y conductas, permite que las víctimas escuchen que este no es aceptable en el presente. En el caso de los crímenes asociados a malos tratos de las víctimas, los comparecientes reconocen la dignidad de las víctimas que los sufrieron, al nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos. En el caso de las personas dadas por desaparecidas, el reconocimiento implica la aceptación de la voluntad que tuvo la antigua guerrilla de negar el paradero del ser querido, pese al sufrimiento de sus allegados que persistían en la búsqueda, e implica reconocer el sufrimiento de sus familiares al negarles saber de sus seres queridos desaparecidos, y la gravedad del tratamiento que dieron a los cuerpos de las víctimas, lo cual actualmente dificulta su localización. El reconocimiento del daño vinculado con los hechos y conductas es restaurador porque las víctimas identifican que el perpetrador reconoce el dolor que aún las aflige (porque las aflige en la memoria del pasado,) y en la vivencia de las consecuencias de los hechos.

Aceptar la responsabilidad individual. El reconocimiento de la responsabilidad individual humaniza a los comparecientes, pues la víctima puede fijar un rostro y un nombre a quien le causó daños y se enuncia con la voluntad de restauración.

Por esto, la Sala espera que los comparecientes reconozcan que fueron responsables, tal como lo estableció en el Auto No. 19 de 2021: (i) en cuanto máximos responsables de hechos concretos en caso de participación directa en ellos; (ii) y/o en cuanto persona con mando en la organización armada y que dio órdenes generales o específicas que resultaron en los crímenes, (iii) en cuanto persona con mando en una estructura específica y que omitió el control (prevención o castigo) de la tropa que realizó los crímenes, estando a su disposición la información sobre estos hechos.

Dar cuenta de su voluntad de resarcir y no repetir. La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción transicional, nacida de un Acuerdo Final de Paz. Las víctimas que han acompañado el proceso requieren reconocimiento y el compromiso de que estas conductas no sólo son injustificables, sino que no van a volver a ocurrir. La garantía de no repetición es uno de los ejes centrales de la justicia transicional y uno de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado”⁸³.

220. Los siguientes apartes de esta resolución de conclusiones proveerán, leídas de manera conjunta con la imputación hecha, los elementos necesarios para el juicio de correspondencia que debe efectuar la Sección con Reconocimiento del Tribunal de Paz, receptora de las resoluciones de conclusiones de la Sala de Reconocimiento. Así, se abordará el reconocimiento individual de cada uno de los comparecientes.

C.2. Análisis y valoración del reconocimiento individual

C.2.1 Laureano Serna Abdala

C.2.1.1 Individualización como máximo responsable y control del aparato armado

⁸³ JEP. Sala de Reconocimiento. Auto No. 279 de 2021. Pp. 26-27. En este sentido, la Sala estableció que “Por lo cual, no puede la Sala requerir un complemento al reconocimiento, con base en el literal q del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, para que este incluya el reconocimiento de un tipo penal específico” (p.27).

221. Laureano Serna Abdala ostentó la calidad de miembro del Estado Mayor Central de las extintas FARC-EP y fungió como comandante en jefe de bloques, frentes y columnas móviles que operaron en los departamentos de Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas ha determinado, tras un exhaustivo proceso de contrastación probatoria, su calidad de máximo responsable a título de coautor mediato mediante un aparato organizado de poder.

C.2.1.3 Condenas e investigaciones históricas en la jurisdicción ordinaria

222. La Fiscalía General de la Nación, reportó que Laureano Serna Abdala fue condenado en el año 2014 por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Valledupar por los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el radicado número 05001-31-09-003-2014-00214-00 y por los delitos de rebelión y concierto para delinquir bajo el número de radicado 17001-31-09-001-2014-00089-00 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta.

223. Igualmente fue condenado por secuestro o toma de rehenes por los hechos sucedidos en cuatro tomas guerrilleras a bases y centros poblados, en algunas de las cuales fueron privados de la libertad oficiales y suboficiales de policía, así como políticos para forzar la liberación de guerrilleros presos. Los hechos por los que fue condenado corresponden a: las privaciones de la libertad luego de la toma de la base militar de Las Mercedes (1997), condena de 2003; Pijiguay (1998) condena de 2004; el secuestro de José Raúl Castro Escobar y Adolfo López Velandia, diputados de la Asamblea del Meta Departamento del Meta y de Carlos Peláez Maya, gobernador encargado del departamento (2002) sentencia de 2005 y secuestros derivados de la Toma de Corral del Medio (2002) Sentencia de 2011. La Fiscalía menciona también un proceso del 2008 de Córdoba, pero no da mayores datos. Todas las condenas coinciden por mando con la zona y tiempo de operación de Laureano Serna como comandante del Bloque La Mojana y fueron adoptadas en ausencia del condenado.

C.2.1.4 Reconocimiento del compareciente de su responsabilidad individual por los hechos y conductas imputados en el Auto 023 de 12 de febrero de 2024

- **Instancias procesales de participación, aporte de verdad y reconocimiento:** Durante las diversas etapas del proceso dialógico y restaurativo liderado por la JEP, Laureano Serna Abdala ha mantenido una participación proactiva, constante y plenamente ajustada a las exigencias de la justicia transicional. Compareció de manera presencial en sesiones de aporte a la verdad, presentó respuestas escritas, minuciosas, argumentadas y exhaustivas frente a cada uno de los acápites del Auto de determinación de hechos y conductas, y dialogó de forma directa, respetuosa y reflexiva con las víctimas acreditadas en las Audiencias Públicas de Reconocimiento. En estos escenarios de gran exigencia, el compareciente abandonó definitivamente la retórica exculpatoria, las justificaciones ideológicas ancladas en la lógica del "enemigo interno" y las narrativas de la guerra, adoptando, en cambio, un lenguaje de asunción plena, irrestricta y transparente de su responsabilidad legal, moral, ética e histórica.
- **Reconocimiento del secuestro con fines financieros, políticos y de canje:** Serna Abdala admitió incondicionalmente, y sin recurrir a atenuantes operacionales, su participación determinante en el diseño, materialización, expansión y sostenimiento de la política de financiación insurgente a través del secuestro indiscriminado de ciudadanos civiles. Reconoció que esta práctica cosificó a los seres humanos, arrebatándoles su dignidad inalienable y reduciéndolos a meros instrumentos mercantiles, "bienes de cambio" o "cuotas financieras" para la recolección de rentas destinadas a la maquinaria bélica. De igual forma, reconoció su rol primario, intelectual y operativo como coautor mediato en la toma sistemática de rehenes de "alto valor estratégico" con fines de "canje" político. Admitió taxativamente que la prolongación abusiva, arbitraria, cruel e indefinida de los cautiverios en condiciones extremas de aislamiento, constituyó una infracción grave, deliberada e injustificable a los principios de humanidad, distinción y proporcionalidad que deben guiar el accionar bélico de todos los actores armados.

- **Concurrencia de tratos crueles, inhumanos, degradantes y omisión del control de mando:** El excomandante guerrillero asumió su máxima responsabilidad por cadena de mando frente a la concurrencia sistemática de crímenes aberrantes y prácticas denigrantes perpetrados continuamente por las denominadas comisiones de guardia o "carceleros" durante las fases de cautiverio en la selva. Reconoció ante la magistratura y las víctimas que su negligencia voluntaria y la omisión deliberada de control disciplinario propiciaron, facilitaron y encubrieron prácticas sistemáticas de tortura psicológica (como simulacros de fusilamiento y aislamiento absoluto), tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la persecución implacable, el despojo y la estigmatización de las comunidades locales y familias extorsionadas. Admitió, expresando repudio por sus propias órdenes, que el uso sistemático de métodos de castigo y aseguramiento como cadenas al cuello, candados, grilletes, el confinamiento inhumano en "jaulas" de madera o mallas de alambre de púas (los llamados "alambrados"), la negación deliberada de asistencia médica básica frente a graves enfermedades endémicas tropicales (paludismo, leishmaniasis, desnutrición severa), y las marchas forzadas extenuantes nocturnas bajo amenaza inminente de muerte, constituyeron actos continuados de barbarie. Aceptó que estas conductas son absolutamente incompatibles con el derecho de la guerra y se subsumen plenamente como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de la mayor gravedad, los cuales son de naturaleza imprescriptible y no amniable a la luz del Estatuto de Roma.
- **Comprensión integral de la dimensión del daño y responsabilidad directa por la desaparición forzada:** En un ejercicio de reconocimiento del impacto psicosocial y moral de las conductas, Serna Abdala detalló y nombró cómo las prácticas inhumanas ordenadas directa o indirectamente desde su comandancia destruyeron de manera casi irreparable los proyectos de vida, los patrimonios y la salud mental de las víctimas directas. Reconoció que estas acciones indujeron un sufrimiento crónico, traumático y transgeneracional en los núcleos familiares, derivado de la incertidumbre diaria ("el síndrome del ausente"), la extorsión

económica prolongada que llevó a familias a la bancarrota, y el estigma social de ser "objetivo militar". Aceptó formalmente su responsabilidad penal directa, irrenunciable e ineludible por los homicidios en estado de indefensión absoluta de rehenes que intentaron fugarse de los campamentos o que fueron ejecutados a sangre fría como represalia táctica ante inminentes operaciones de rescate militar por parte del Ejército Nacional. Asimismo, asumió la responsabilidad por la desaparición forzada de aquellos secuestrados que fallecieron durante el cautiverio por negligencia médica o inanición y cuyos cuerpos fueron ocultados. Ante el clamor de las familias buscadoras, el compareciente adquirió el compromiso público, jurídico e inquebrantable de continuar aportando información topográfica pormenorizada, memorias territoriales reconstruidas con excombatientes de base, croquis manuales y coordenadas geográficas precisas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), garantizando su acompañamiento físico y logístico para asegurar la prospección, el hallazgo forense, la identificación y la restitución digna de los restos óseos a sus deudos.

C.1.2.5 Valoración definitiva de la Sala de Reconocimiento sobre el aporte a la verdad y el compromiso individual

C.2.1. Laureano Serna Abdala

224. El señor Laureano Serna Abdala, identificado con cédula de ciudadanía 79.276.584, nacido en Plata Perdida, Cesar en 1956. Ingresó a las extintas FARC-EP en el año 1973 en las filas del Frente 77 en Tolima. En 1978 ascendió a ser suplente del comandante del Frente 99, recién creado en el norte de Antioquia y en 1980 se convirtió en comandante de ese Frente. Desde 1997 hasta el año 2013, año de su captura, fue miembro del Secretariado de las FARC-EP.

225. El compareciente Serna suscribió acta de sometimiento a la JEP con número 301947 con fecha de 22 de enero de 2018. De conformidad con la información recopilada por la Unidad de Investigación y Acusación e información aportada por la Fiscalía General de la Nación, el compareciente cuenta con 24 procesos penales en la justicia ordinaria.

226. En el año 2014 fue condenado por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Valledupar por los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el radicado número 05001-31-09-003-2014-00214-00 y por los delitos de rebelión y concierto para delinquir bajo el número de radicado 17001-31-09-001-2014-00089-00 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta.

227. Se encuentra investigado por los delitos de rebelión en cuatro procesos diferentes, por el delito de injuria, por los delitos de daño en bien ajeno en concurso con concierto para delinquir, por el delito de irrespeto a cadáveres, múltiples procesos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cinco procesos por el delito de concierto para delinquir agravado, el delito de perfidia, por el delito de usurpación de tierras, por los delitos de manejo ilícito de especies exóticas, el delito de pesca ilegal en concurso con caza ilegal y por el delito de deforestación.

228. En lo que respecta a la JEP, mediante Resolución SAI-AOI-DAI-MGM-044-2021 del 31 de agosto de 2021 la Sala de Amnistía o Indulto concedió el beneficio de amnistía de *iure* por las conductas de rebelión y concierto para delinquir. Además, recibió amnistía de Sala por el delito de daño en bien ajeno.

229. Ante la Sala de Reconocimiento el señor Serna presentó su versión voluntaria de lo ocurrido en diligencia judicial que tuvo lugar el 05 y 06 de abril de abril de 2022 siguiendo el procedimiento fijado en el artículo 27 A de la Ley 1922 de 2018.

230. A través del Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento llamó al compareciente a reconocer su responsabilidad como máximo responsable por su contribución esencial al fenómeno macrocriminal descrito en esa providencia. En consecuencia, Laureano Serna Abdala debía aceptar su responsabilidad a título de **coautora mediata por aparatos organizados de poder** del crimen de guerra de toma de rehenes del artículo 8,2, c, iii. y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, del artículo 7, i., e). Estos crímenes, conforme a la determinación y

calificación realizada por la Sala no son amnistiables y respecto de ellos no es dable alegar la prescripción de la acción penal.

231. El señor Serna manifestó su voluntad de reconocer responsabilidad por escrito a través de memorial allegado a la Sala el 02 de julio de 2024 y oralmente en su intervención en la audiencia pública que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla, Atlántico el día 24 de agosto de 2024.

232. En relación con su contribución a los mecanismos extrajudiciales del Sistema Integral para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas le comunicó a esta Sala que el compareciente “aportó documentación en torno a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y participó en dos jornadas de búsqueda y prospección” y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, por su parte, no emitió ni certificado inicial ni certificado final de participación en la ruta de esclarecimiento de la verdad de esa Comisión.

233. Finalmente, el compareciente informó en su versión voluntaria que participó en hechos que no están agrupados en el Caso 01 y que no serán valorados en la presente resolución de conclusiones.

234. Antes de presentar las observaciones de las víctimas y valorar los aportes presentados es relevante mencionar que la compareciente aceptó su responsabilidad por los hechos imputados.

C.2.1.1 Observaciones de los intervinientes especiales

235. La Sala recibió dos informes de observaciones finales de los representantes de víctimas y uno del Ministerio Público en los que se hace alusión al aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad del señor Serna ante este órgano en el marco del Caso 01. A continuación, se reseñan las principales observaciones.

236. La abogada Natalia Córdoba Jaramillo, quien representa a 7 víctimas directas recalcó los avances en términos de aportes desde el acta de sometimiento y luego en la versión voluntaria, que mencionó muestran la voluntad de la compareciente de realizar aportes a la verdad.

237. Sin embargo, consideró insuficientes los aportes y argumentó que “era inaceptable que el compareciente conociera tan poco de lo que sucedía dentro de su bloque bajo sus narices”.

238. La Organización para los Secuestrados de la Mojana cuestionó el proceso del compareciente, mencionando que no encontraban muestras de arrepentimiento ni de reconocimiento de todo el daño cometido a las víctimas y al territorio. Además, argumentó que no se ha hablado de la influencia que tenía el compareciente estando privado de la libertad y que era un asunto sobre el que la JEP debía profundizar.

239. Finalmente, el Ministerio Público presentó en su escrito diferentes apreciaciones frente a los aportes del compareciente y sobre las propuestas de reparación.

C.2.1.2. Análisis del aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad del señor Laureano Serna Abdala.

240. Tras un análisis metodológico estricto y riguroso de las contrastaciones procesales, las pruebas de contexto y las observaciones de las víctimas, la Sala de Reconocimiento concluye de manera afirmativa que Laureano Serna Abdala ha satisfecho a plenitud y con creces los estrictos y elevados estándares constitucionales, legales y jurisprudenciales del Sistema Integral para la Paz. El compareciente ha realizado un aporte de verdad temprana, detallada, proactiva y exhaustiva, elementos sine qua non para mantener su elegibilidad procesal y su permanencia en la jurisdicción transicional de cara a la imposición de una sanción propia restaurativa.

241. La Sala resalta que el compareciente ha logrado un hito restaurativo al trascender por completo los eufemismos bélicos, el lenguaje justificatorio y la doctrina de su antigua estructura armada, identificando críticamente las profundas fallas sistémicas, morales y

organizacionales de la extinta guerrilla. Ha asumido que los atroces vejámenes sufridos por los cautivos no fueron accidentes de la guerra, sino la consecuencia directa, planificada e ineludible de las políticas generales de las FARC-EP que él, en su rol de liderazgo contribuyó sustancialmente a diseñar, materializar, dirigir e imponer a sangre y fuego.

242. Si bien la Sala advierte, comprende a cabalidad, legitima y respeta profundamente las comprensibles demandas de mayor detalle fáctico exigidas por algunas de las víctimas acreditadas (especialmente frente a la particularidad de casos de secuestro específicos, el paradero exacto de algunos desaparecidos y la identidad de los eslabones de mando más bajos en la custodia), la Magistratura ratifica jurídica y conceptualmente que el reconocimiento del señor Serna Abdala responde a cabalidad al estándar de conocimiento material exigible a un "máximo responsable". Su responsabilidad se fundamenta en el control macrocriminal de la política operativa regional, y no se le puede exigir el conocimiento pormenorizado de la logística individual de cada uno de los miles de secuestros ejecutados por la base guerrillera, sin que esto lo exima de la responsabilidad de coautoría mediata por el total de los crímenes.

243. El compareciente demostró una actitud de escucha activa, paciente y respetuosa durante las audiencias públicas, la asunción integral y no fragmentada de los incommensurables daños morales, psicológicos, físicos y patrimoniales ocasionados a la sociedad colombiana, y su disposición formal, documentada y expresa para formular, liderar y ejecutar de manera sostenida los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador y Restaurador (TOAR).

244. Desde un principio, en su acta de sometimiento el compareciente mencionó en extenso sus primeros años en las filas de las FARC-EP y su llegada a la comandancia del Bloque y al Secretariado. Relató también sus labores en la comandancia y la relevancia de los secuestros en los dos patrones.

245. En su versión voluntaria la compareciente amplió esos aportes y presentó nuevos aportes de verdad.

[...] Después de ese despliegue territorial que comentaba ahorita, fue en el año 97 cuando en las FARC empezamos a implementar de lleno el intercambio de guerrilleros presos por militares y policías. En este año recuerdo que fue cuando se hizo la primera negociación con el gobierno de turno, para liberar miembros de la fuerza pública que teníamos secuestrados nosotros. Ya para el año 1998 que fue cuando iniciaron los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, ahí nosotros como Secretariado le informamos al país por los canales de noticias que, a partir de ese año, la política iba a cambiar porque entonces ya la liberación de los militares y policías se haría a modo de canje por guerrilleros que estaban presos en las diferentes cárceles del país, ahí ya se convertían entonces en rehenes.

[...]

En esa ocasión nos habló del caso de Aldo Moro, creo que era así el nombre, un dirigente político italiano que había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. A partir de ese ejemplo, nos planteó la idea de aplicar una estrategia similar en Colombia. Su planteamiento era que la política de retención de miembros de la Fuerza Pública no estaba produciendo los resultados que se esperaban en términos de presionar al Gobierno para lograr la liberación de guerrilleros presos.

La retención de dirigentes políticos podría generar un impacto mucho mayor sobre el Gobierno de turno y sobre la opinión pública, y por esa razón, el Estado podría verse más presionado a aceptar una negociación o algún mecanismo que permitiera avanzar hacia la liberación de integrantes de la organización que se encontraban privados de la libertad.

Esa fue la idea que adoptamos: trasladar el foco de la presión desde los miembros de la Fuerza Pública hacia figuras políticas relevantes, bajo la consideración de que ello podría contribuir a alcanzar el objetivo que se buscaba en ese momento, que era obtener la liberación de un mayor número de guerrilleros presos.

Y si, fue bajo esa lógica que nosotros empezamos a desarrollar esa política. Pensábamos que, al involucrar figuras políticas, aumentaría la presión sobre el Gobierno y, en consecuencia, habría mayores posibilidades de alcanzar el objetivo que se perseguía en ese momento, que era lograr la liberación de un mayor número de integrantes de las FARC-EP que estaban presos.

[...]

Igualmente, dentro de la estrategia la organización buscó establecer una relación con los habitantes de estos territorios, se buscaba por un lado la legitimidad de la organización, pero también el ejercicio de un control. Inicialmente, las FARC-EP aprovechaba los conflictos por la tierra para presentarse como el "ejército de los pobres" que luchaba por los campesinos. Esta táctica nos permitió promover la movilización y ganar la simpatía de los sectores populares para construir una base social y reclutar nuevos combatientes.

Sin embargo, a medida que nos consolidábamos, la relación se transformó en un ejercicio de autoridad. Por eso, implementamos los secuestros como una herramienta de "justicia" para castigar a quienes violaban nuestras órdenes o para interrogar a personas consideradas "potenciales enemigos" o colaboradores del ejército y los paramilitares.

246. Como se mencionó, el compareciente Serna reconoció su responsabilidad en la audiencia pública que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla, Atlántico el día 24 de agosto de 2024.

247. En esa oportunidad mencionó:

Como se me ha convocado en este espacio debo iniciar mencionando que a todos los que están acá presentes, a los que nos ven en otros lados, a todos los que les hicimos daño como FARC, especialmente en mi región Caribe, a todos los que hayan sido victimizados de alguna forma, les pido perdón.

Los hechos que se han comentado a lo largo de este proceso no debieron haber ocurrido, como organización cometimos graves errores y nos arrepentimos por ello.

Los secuestros, de policías y militares a quienes considerábamos el enemigo, de políticos y de civiles para mantener el control sobre el territorio estuvieron mal y causaron muchos daños. Sin embargo, también debo decir que esto era parte de una política más grande y se hizo lo que se pudo en medio de la guerra. Con esto no quiero dar una excusa, esa no, no es la intención, pero, ajá, debo ser sincero ante ustedes.

Esos secuestros eran una cosa que vino desde arriba, desde nosotros como Secretariado en muchos puntos. No me refiero al detalle, de cada uno ni cómo

sucedió la vaina en cada caso, pero sí la orden o directriz general. Además, eso fue en un contexto de guerra, y las condiciones de los prisioneros respondieron un poco a ese estado también.

248. Por consiguiente, la Sala determina mediante auto que su reconocimiento cumple con las garantías de no repetición, es veraz, pleno, incondicional, empático y de profundo corte restaurativo, habilitando jurídicamente y de manera definitiva su remisión formal al Tribunal para la Paz, incluyéndolo en la respectiva Resolución de Conclusiones para la imposición de las sanciones correspondientes.

249. La Sala observa que el contenido del reconocimiento de responsabilidad del señor Serna en su dimensión fáctica debe ser leído en conjunto con su versión voluntaria ya citada en varias oportunidades. El compareciente no solo se refirió a su participación en hechos sino también refirió a sus aportes al patrón de macrocriminalidad.

250. A diferencia de alguna de las observaciones de las víctimas, la Sala resalta que el reconocimiento permite identificar en el compareciente una consciencia sobre los hechos, su papel en ellos y las consecuencias que supuso. En consecuencia, esta Sala considera que cumple con lo esperado en la dimensión fáctica de su reconocimiento de responsabilidad.

C.2.2 Ainhoa Etxebarria García

251. La señora Ainhoa Etxebarria García, con cédula de extranjería 570987, nacida en Villamediana de Iregua, La Rioja, España en el año 1958. Ingresó en el año 1998 a las FARC-EP y en 1999 fue nombrada miembro del Estado Mayor del Bloque La Mojana, como líder de la cartera de educación de ese bloque.

252. Antes de su ingreso a las FARC-EP, en España fue miembro de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) desde 1977, como parte de la rama político militar de esa organización. También entre los años 1978 y 1982 perteneció a las Brigadas Rojas en Italia.

253. La compareciente Etxebarria suscribió acta de sometimiento a la JEP con número 301348 con fecha de 06 de julio de 2017. De conformidad con la información recopilada por la Unidad de Investigación y Acusación e información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la compareciente cuenta con 8 procesos penales en la justicia ordinaria. Fue condenada en España por el delito de homicidio agravado, confirmada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. En Colombia se profirieron 2 condenas en ausencia por los delitos de desplazamiento forzado, rebelión y abigeato⁸⁴. Por otro lado, fue acusada en un proceso penal por el delito de agiotaje; fue acusada por el delito de daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles⁸⁵. Se encuentra investigada por los delitos de fraude al sufragante en concurso con fraude en inscripción de cédulas; por los delitos de rebelión y sedición; y por el delito de contrabando⁸⁶.

254. En lo que respecta a la JEP, mediante Resolución SAI-AOI-DAI-ASM-404-2020 del 30 de agosto de 2020 la Sala de Amnistía o Indulto concedió el beneficio de amnistía de *iure* por las conductas de rebelión, abigeato, agiotaje y sedición. Además, la conducta de daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles se encuentra en trámite de análisis de amnistía de Sala.

255. Ante la Sala de Reconocimiento la señora Etxebarria presentó su versión voluntaria de lo ocurrido en diligencia judicial que tuvo lugar el 27 de abril de 2022 siguiendo el procedimiento fijado en el artículo 27 A de la Ley 1922 de 2018.

256. A través del Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, la Sala de Reconocimiento llamó a la compareciente a reconocer su responsabilidad como máxima responsable por su contribución esencial al fenómeno macrocriminal descrito en esa

⁸⁴ (1) Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión del Departamento de Norte de Santander, Radicado No. 152-2008 del 09 de abril de 2014, relacionada con los hechos de desplazamiento de la víctima Francisca Nazareth; (2) Juzgado Promiscuo de Pivijay, Magdalena, Radicado 348-2005 del 14 de agosto de 2010.

⁸⁵ Proceso penal radicado No. 110016000049200314576 (agiotaje); No. 544986001135200600084 (Daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles).

⁸⁶ Proceso penal radicado No. 544986000000199900015 (rebelión y sedición); No. 544986000000200900001 (contrabando); No. 544986000000200200013 (fraude al sufragante y fraude en inscripción de cédulas).

providencia. En consecuencia, Ainhoa Etxebarria García debía aceptar su responsabilidad a título de **coautora mediata por aparatos organizados de poder** del crimen de guerra de toma de rehenes del artículo 8,2, c, iii. y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, del artículo 7, i., e). Estos crímenes, conforme a la determinación y calificación realizada por la Sala no son amnistiables y respecto de ellos no es dable alegar la prescripción de la acción penal.

257. La señora Etxebarria manifestó su voluntad de reconocer responsabilidad por escrito a través de memorial allegado a la Sala el 01 de julio de 2024 y oralmente en su intervención en la audiencia pública que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla, Atlántico el día 24 de agosto de 2024.

258. En relación con su contribución a los mecanismos extrajudiciales del Sistema Integral para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas le comunicó a esta Sala que con la compareciente Etxebarria “no se ha iniciado ruta de aporte de información para la búsqueda.” y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, por su parte, no emitió ni certificado inicial ni certificado final de participación en la ruta de esclarecimiento de la verdad de esa Comisión.

259. Finalmente, la compareciente informó en su versión voluntaria que participó en hechos que no están agrupados en el Caso 01 y que no serán valorados en la presente resolución de conclusiones.

260. Antes de presentar las observaciones de las víctimas y valorar los aportes presentados es relevante mencionar que la compareciente aceptó su responsabilidad por los hechos imputados.

C.2.2.1 Observaciones de los intervinientes especiales

261. La Sala recibió tres informes de observaciones finales de los representantes de víctimas y uno del Ministerio Público en los que se hace alusión al aporte a la verdad y

reconocimiento de responsabilidad de la señora Etxebarría ante este órgano en el marco del Caso 01. A continuación, se reseñan las principales observaciones.

262. La abogada Natalia Córdoba Jaramillo, quien representa a 7 víctimas directas recalcó los avances en términos de aportes desde el acta de sometimiento y luego en la versión voluntaria, que mencionó muestran la voluntad de la compareciente de realizar aportes a la verdad. Sin embargo, reprochó el uso de frases a su parecer revictimizantes o que restaban el efecto restaurador de la audiencia, como “Nunca entendí por qué se tomó esa decisión de matarlo, y fue una deshumanización que no sé cómo calificarla, pero la verdad viendo mi pasado sucedía mucho. No sé si es mala espalda o pura casualidad, pero casi siempre mis secuestros para intercambio finalizaban en la muerte del político, o en algunos casos politiqueros”. También la opinión de la compareciente frente al señor D’Zubiría, donde afirmó: “[...] de cualquier forma él nunca hubiera logrado la presidencia, no hubiera tenido los votos suficientes, y como organización no hubiéramos dejado que quedara, considero que teníamos el poder para al menos lograr eso con los votos en muchos territorios”.

263. Alegó que eso lleva a que se minimice el efecto restaurador que tiene la audiencia de reconocimiento para las víctimas, “porque efectivamente los hechos sucedieron, pero los comparecientes presentaron afirmaciones en las que insisten en que “hubieran” actuado diferente, apelando a sus propios reproches morales, a pesar de que no ejercieron acciones para prevenir o sancionar”.

264. Por su parte, el Colectivo de víctimas LPPI⁸⁷ argumentó que el reconocimiento de la compareciente fue parcial, y no consideró completo su reconocimiento por haber cambiado la política de las FARC-EP, lo que llevó a que civiles cuyo “único pecado era confiar en la política” terminaran presos o asesinados. Solicitó en consecuencia su remisión a la Unidad de Investigación y Acusación para afrontar la ruta adversarial.

⁸⁷ Conforme a lo solicitado, esta Sala determinó anonimizar con siglas el nombre del colectivo y de todos sus miembros.

265. La Organización para los Secuestrados de la Mojana cuestionó que la compareciente no respondiera todas las preguntas realizadas, particularmente frente a las condiciones en las que se encontraban muchos secuestrados; la razón del homicidio eventual de algunas víctimas, el paradero puntual de cuerpos todavía desaparecidos y la posible financiación de rivales políticos para perpetrar secuestros.

266. Finalmente, el Ministerio Público presentó en su escrito diferentes apreciaciones frente a los aportes de la compareciente y sobre las propuestas de reparación. Además, al igual que en otros escenarios, cuestionó la selección de la compareciente como máxima responsable. Igualmente, solicitó ante la JEP el ajuste del Régimen de Condicionalidad de la compareciente ante la eventual posibilidad que abandone el país por ser una ciudadana extranjera.

C.2.2.2. Análisis del aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad de la señora Ainhoa Etxebarria García

Aporte a la verdad

267. En primer lugar, esta Sala destaca los aportes de verdad entregados por la compareciente, que fueron relevantes para la identificación de una política de secuestro de personajes políticos (civiles) con la finalidad de intercambio.

268. Desde un principio, en su acta de sometimiento y su formato F-1 la compareciente mencionó en extenso sus primeros años en las filas de las FARC-EP, su labor en la cartera de educación y algunos aportes sobre su experiencia en grupos armados en Europa. De esos aportes iniciales se destacarán por su relevancia algunos extractos:

269. Sobre su experiencia, el acta de sometimiento menciona: “Debo también mencionar que mi vida y mi mayor experiencia en grupos armados, alzados en armas o similares se dio desde mi juventud en Europa. Yo inicié mi vida en Euskal Herria, en el ETA. Tuve un paso rápido en Italia con los compañeros de las Brigadas Rojas, y luego seguí

en ETA, donde adquirí cierto respeto. Estuve en el comando en Albacete un tiempo y luego regresé al norte en diferentes comandos. [...]”.

270. Sobre su trabajo en la comisión de educación, en el formulario F-1 afirmó: “[...] Además, yo pertenecía a la cartera de educación, que estaba encargada de la formación ideológica y política de los guerrilleros. Yo tuve la suerte de formarme y me permitía transmitir ese conocimiento a los camaradas. También me permitía seguir desarrollando mi filosofía, como un pequeño oasis en medio de la guerra”.

271. Posteriormente, ante un cuestionario enviado, la compareciente aportó aspectos puntuales respecto del secuestro. Afirmó:

[...] sobre el punto de los secuestros de políticos puedo informar que se trató de hechos generalizados en las FARC desde el 2001, más o menos. Por generalizado no digo que eran muy comunes ni lo hacían todos los bloques, pero me consta que sí sucedió y sucedió en varios bloques, incluido el Bloque La Mojana. Yo sé que el comandante Serna elevó el asunto para ser discutido por el Secretariado y recuerdo que se me citó a presentar ante ellos la forma y estrategia de secuestros de esa índole que se realizaba en ETA y en las Brigadas Rojas. No recuerdo las fechas puntuales, pero sí consideraba que se trataba de una estrategia que podía dar mayores frutos que el de militares, [...].

[...]

De los secuestros por control de la sociedad yo sabía que existían. Dentro de la formación ideológica de la tropa se enseña que la sociedad es nuestro fin y aliado, y el pueblo nunca es enemigo. Sin embargo, ya en la dinámica práctica, de la cual no me encargaba, se sabe que debe ser una de cal y una de arena. El poder, como se ha visto en la filosofía, a veces se ejerce con violencia, y muchas veces la forma de hacernos respetar o hacer cumplir nuestro mandato suponía el secuestro de algunas personas”.

272. En su versión voluntaria la compareciente amplió esos aportes y presentó nuevos aportes de verdad.

[...] Yo sé que el comandante Serna elevó el asunto para ser discutido por el Secretariado y recuerdo que se me citó a presentar ante ellos la forma y estrategia de secuestros de esa índole que se realizaba en ETA y en las Brigadas Rojas. No recuerdo las fechas puntuales, pero sí consideraba que se trataba de una estrategia que podía dar mayores frutos que el de militare y fue algo que se lo comuniqué al comandante el Cucayo. Como les comenté, era frecuente que el me buscara para hablar diferentes temas del funcionamiento del Bloque, en una de tantas ocasiones, hablamos sobre esa estrategia y sobre mi participación relacionada con el secuestro de políticos en ETA y en las Brigadas Rojas.

También, brindó más información sobre el secuestro de Juan Nicanor D'Zubiría:

[...] Ese hecho fue lo que se llamó internamente una operación de prueba del nuevo enfoque. El secuestro del señor D'Zubiría fue una prueba para la estrategia del cambio de la política. Como ya he mencionado, yo sabía, por mi experiencia previa en ETA que era más probable lograr un intercambio por un político que por un miembro del ejército. Los compañeros del Secretariado me dijeron que era la encargada de demostrar cómo podía funcionar, y por eso planeé el secuestro de Juan Nicanor. Consideré que era un objetivo idóneo por su popularidad y protagonismo en el momento de los hechos, además, porque dejaba muy mal parado al gobierno del momento que bajo su mandato no hubiese garantías de seguridad en el ejercicio democrático. Además, fue un candidato que estudiamos y nos dimos cuenta de que podía ser el más sencillo de secuestrar porque notamos que no tenía un esquema de seguridad fuerte y una agenda especialmente enfocada en regiones a las que podíamos acceder con facilidad. Después, solicité que la operación fuese ejecutada por el Cóndor Herido y les expliqué como se debía desarrollar estratégicamente el secuestro, quedaron al mando de la operación mis compañeros Julián Álvarez y Antonio Vargas. El candidato estaba en una campaña en Puerto Wilches cuando fue capturado por la organización. Como habíamos establecido, lo condujimos a la región en la que el bloque la Mojana se movía por el río Magdalena, para que quedara en manos del Bloque 88, eso también lo especifiqué yo. Cuando me avisaron que habían llegado hablé con

Laureano y le dije que grabara al candidato y que tomara diferentes pruebas de su cautiverio para usarlas en el marco de la negociación. Es una lástima que la estrategia haya fracasado por completo y que haya permanecido tanto tiempo secuestrado, a los meses de su secuestro manifesté que consideraba que la estrategia no había sido exitosa y que difícilmente lo sería así que solicité la liberación del candidato, pero mi opinión no fue tomada en cuenta y se decidió mantenerlo retenido.

Reconocimiento de responsabilidad

273. Como se mencionó, la señora Etxebarria reconoció su responsabilidad en la audiencia pública que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla, Atlántico el día 24 de agosto de 2024.

Dimensión fáctica del reconocimiento

274. La Sala encuentra que la compareciente se refirió a su participación en hechos específicos, particularmente desde la fase de planeación, y su contribución en el patrón macrocriminal determinado en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas. Al respecto señaló:

Hoy vengo acá con la conciencia afligida y apenada. Como mis camaradas acá he hecho una reflexión de conciencia, al igual que la que hicimos como guerrilla en el 2016. Ante ustedes, las víctimas y la sociedad, aunque muchos no me conozcan vengo a externalizar mi arrepentimiento por todo lo que pasó en esa época, respecto a las víctimas.

Aunque muchos no lo sepan, soy una persona dedicada al estudio y el análisis de las obras de grandes pensadores como Hegel y Marx, a releer a Engels y cuestionarme los privilegios que el gran capital ha ido construyendo a costa del pueblo trabajador. Pero hoy debo decir que ese camino personal en algún punto se torció, pase de luchar por unos ideales a luchar contra esos ideales. Nuestras

conductas llevaron a que ese pueblo oprimido fuera la víctima y sufriera más que nadie las consecuencias de una lucha por tomar el poder bajo estas banderas.

El secuestro que se cometió en el Bloque, especialmente el que tenía como finalidad el intercambio fue un grave error, y uno en el que lastimosamente yo tuve una gran culpa. Privarles la libertad a personas cuyo único pecado era confiar en la política no estuvo bien, y hubiera sido mejor el ejercicio de otras vías o formas de lucha. El dolor que causamos a esas personas, a sus familias y cercanos e incluso a la democracia en el país nunca se podía poner en la balanza con el fin de traer de regreso a nuestros camaradas, presos políticos del régimen opresor.

Esos hechos por supuesto que ocurrieron, y no solo en mi Bloque, sino a lo largo y ancho del país. No se trató nunca de una orden directa de las altas instancias o una política desde los estatutos, pero sí ocurrió y se sabía que ocurría, hasta el Secretariado sabía.

275. La Sala observa que el contenido del reconocimiento de responsabilidad de la señora Etxebarria en su dimensión fáctica debe ser leído en conjunto con su versión voluntaria ya citada en varias oportunidades. La compareciente no solo se refirió a su participación en hechos sino también refirió a sus aportes al patrón de macrocriminalidad.

276. A diferencia de alguna de las observaciones de las víctimas, la Sala resalta que el reconocimiento permite identificar en la compareciente una consciencia sobre los hechos, su papel en ellos y las consecuencias que supuso. En consecuencia, esta Sala considera que cumple con lo esperado en la dimensión fáctica de su reconocimiento de responsabilidad.

Dimensión jurídica del reconocimiento

277. La compareciente en su escrito y particularmente en la audiencia pública reconoció la forma de atribución de responsabilidad:



Debo ser sincera en no entender del todo todavía este mundo de abogadillos con sus términos enredados y latinazgos. Sin embargo, reconozco que participé de manera esencial en que las FARC-EP privara de la libertad a políticos. Digo esencial, pero no sé cómo es el término que usan, pero fui importante en ello. Además, perteneciendo a esa organización armada que la institucionalidad ha denominado como ilegal determiné que ocurrieran esas conductas. Por ello, acepto mi responsabilidad en el título que se me ha mencionado, de tener máxima responsabilidad como coautora en medios o de medios, perdonen no recordar el término.

278. Más allá de las imprecisiones en el discurso, para esta Sala es claro que la compareciente aceptó por un lado su calidad de máxima responsable del patrón macrocriminal, y por otro el título de coautora mediata en aparatos organizados de poder por los crímenes internacionales de secuestro y otras privaciones graves de la libertad.

279. La Sala encuentra en esta cita que coinciden los elementos esperados del reconocimiento de responsabilidad en su dimensión jurídica: el reconocimiento de las conductas criminales cometidas cuyo carácter es no amnistiable, la modalidad de participación en las mismas y su identificación como máximo responsable de lo ocurrido. Además, la Sala de Reconocimiento no encontró manifestación alguna por parte de la compareciente ni por escrito ni en audiencia pública que permitiera desvirtuar el alcance de su reconocimiento de responsabilidad en términos jurídicos, todo lo cual resulta coherente en lo sustancial con los términos de la imputación realizada en su contra.

Dimensión restaurativa del reconocimiento

280. La Sala de Reconocimiento encontró en el reconocimiento de responsabilidad de Etxebarria una disposición y actitud sinceras que involucran un reproche moral por su participación en el patrón de macrocriminalidad y que fue expresado públicamente.

281. Más allá del aparte citado, la Sala destaca un momento particular de la audiencia pública en el que la compareciente solicitó respetuosamente al señor D'Zubiría ponerse de

pie con la finalidad de dignificar su nombre y reconocer su valentía, lo cual estuvo acompañado por un reconocimiento de responsabilidad por ese hecho:

Ahora que está de pie le debo decir, como lo he hecho en otros espacios, que yo no busco ni pretendo su perdón. En mis tiempos en el País Vasco yo aprendí por las malas lo que es perder a una pareja, a alguien que uno quiere y estima. Y créame que no busco equiparar el dolor, ni mucho menos. El motivo por el que le pedí ponerse de pie es para reivindicar su nombre y decir en público que jamás debió ser secuestrado. También, pedirle perdón a su familia, porque debieron sufrir mucho, como aquí también lo expresaron. Pese a nuestras diferencias políticas e ideológicas, veo en usted una buena persona, que probablemente hubiera llegado lejos en la presidencia. En su momento lo seleccioné por ser un “pez gordo” como decimos coloquialmente, pero con poquita seguridad y cerca de zonas donde estábamos nosotros. Hoy veo que fue un error. No solo porque eso llevó a que nuestro discurso perdiera fuelle y llegaran gobiernos de derecha, sino especialmente porque causamos un gran daño a usted, a su familia, a sus seres cercanos y a la democracia. Le pido, desde acá, excusas, perdón real por lo que pasó. Y no dejo de lado tampoco el sinsentido que fue tenerlo retenido tanto tiempo, eso es otro tema por el que le pido y le pedimos perdón.

282. Tampoco deja de lado esta Sala que la compareciente demostró entender la dimensión del daño que sus conductas produjeron y se comprometió a aportar a la reparación: “[...] Miren, en este modelo novedoso que todavía no entiendo del todo no sé cómo sea posible, pero con total sinceridad, me comprometo a hacer lo que esté en mi poder para intentar reparar en lo que se pueda el daño. Yo soy buena escribiendo, imaginando, pensando, no sé si eso sea útil. Pero realmente, estoy comprometida con la paz, que fue lo que firmamos en 2016, y con la reparación del daño.

283. Estas manifestaciones realizadas en audiencia pública por parte de la compareciente permiten a la Sala entender que existe una voluntad genuina de reconocer responsabilidad y una conciencia clara sobre la gravedad de lo ocurrido. En consecuencia,

la Sala concluye que la compareciente también cumplió satisfactoriamente con la dimensión restaurativa de su reconocimiento.

284. En conclusión, la Sala encuentra que Ainhoa Etxebarria García ha aportado a la verdad plena, detallada y exhaustiva y ha reconocido su responsabilidad penal individual en los crímenes que esta Sala le ha imputado. Por ello, la Sala concluye que conforme a la Constitución y la Ley es elegible para la imposición de una sanción propia de esta jurisdicción especial.

D. PROYECTO DE SANCIÓN PROPIA

D.1. Marco normativo de las sanciones propias en la justicia transicional

285. El Acuerdo Final de Paz y las normas que lo implementan han establecido la justicia restaurativa como paradigma orientador de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte Constitucional definió la justicia restaurativa acordada como un modelo que se aparta de la noción retribucionista de los sistemas penales, centrándose en la víctima y en su reparación, al igual que en la reconstrucción del tejido social⁸⁸. Así mismo recogió la definición ofrecida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que explica que *“un proceso restaurativo es aquel que se refiere a escenarios en los que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, otras personas o miembros de la comunidad afectados por el delito, participen conjuntamente en la resolución de cuestiones derivadas del delito”*⁸⁹.

286. Para ello, el Acuerdo Final precisó como ejes centrales los derechos de las víctimas de graves violaciones al DIH y a los DDHH, quienes deberán ser reparadas y restauradas, cuando sea posible, de manera que se garantice la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido.

⁸⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

⁸⁹ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre programas de justicia restaurativa, Nueva York, 2006. Pág. 11.

287. Así, la Corte Constitucional estableció que la JEP deberá buscar la reparación de las víctimas a través de proyectos restaurativos, sin dejar de lado la sanción por la gravedad de la ofensa cometida contra las víctimas y contra la sociedad⁹⁰. En concordancia con esta indicación, las finalidades de las sanciones que aplicará la JEP son satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, teniendo la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que hicieren los comparecientes ante la JEP en sus declaraciones.

288. En ese sentido, el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia estableció tres tipos de sanciones que la JEP podrá imponer: propias, alternativas y ordinarias.

289. Las sanciones propias están destinadas a todos quienes reconozcan responsabilidad y verdad exhaustiva, detallada y plena ante la SRVR, contemplan una pena de mínimo cinco (5) y máximo ocho (8) años, bajo un régimen de restricción efectiva de libertades y derechos cuyas condiciones de monitoreo son establecidas por la JEP y en ningún caso podrán ser privativas de la libertad en cárcel o prisión, ni medidas de aseguramiento equivalentes.

290. Las sanciones alternativas son aquellas que se imponen a quienes reconozcan responsabilidad ante el Tribunal antes de que se profiera la Sentencia, tienen una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad, es decir, en cárcel o prisión, y una duración mínima de dos años y máxima de cinco.

291. Las sanciones ordinarias están destinadas a quienes no reconozcan verdad y responsabilidad y deberán ser cumplidas bajo el régimen ordinario con privación de la libertad por mínimo quince años y máximo veinte.

292. Por su parte, el artículo 141 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia determinó que el contenido general de las sanciones propias incluye dos componentes, i)

⁹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

uno restaurativo y reparador y **ii)** uno de restricción de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y de movimiento, que sean necesarias para su ejecución. En este mismo artículo, el legislador dispuso los ítems específicos que debe contener el proyecto de sanción propia, estos son: obligaciones, objetivos, fases temporales, horario, lugares de ejecución, personas que los ejecutarán, lugar donde residirán (con condiciones de habitabilidad y dignidad), y un mecanismo de consulta con las comunidades residentes en el lugar de ejecución, que deberá ser aprobado por la Sala y ejecutado bajo su supervisión.

293. El mismo artículo incluye un componente en términos de meta o resultado al señalar que, para la ejecución de la sanción, podrá definirse que su cumplimiento se efectúe durante un periodo preestablecido o atendiendo a resultados, como, por ejemplo, la culminación de la construcción de una obra determinada, sin perjuicio de la duración de la sanción impuesta por el Tribunal.

294. Así, los elementos que se mencionan en los artículos citados armonizan los componentes restaurativo y retributivo de la sanción. Mientras que los objetivos, obligaciones y mecanismos aluden al contenido temático del componente restaurativo, las fases temporales, los horarios, lugares de ejecución y de residencia de los comparecientes aluden a las condiciones del cumplimiento efectivo de la sanción, es decir, a su componente de restricción de la libertad.

295. A partir de esos derroteros normativos, la Sala recalca que, por los crímenes imputados en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, y que han sido reiterados en esta decisión, así como los demás que se determinen durante el trámite, lo procedente sería la imposición de una sanción propia; esto, siempre que los comparecientes Laureano Serna y Ainhoa Etxebarria acepten responsabilidad y aporten verdad de manera exhaustiva, detallada y plena.

296. Como criterios para valorar la función restaurativa de las sanciones, el artículo 125 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP estableció que se deben tener en cuenta dos criterios: el daño causado y el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la JEP. Para tales efectos, es importante recordar que la

sección precedente (C) de esta resolución estableció que la Sala estima el reconocimiento de la imputación hecha en el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024, incluyendo la identificación de los daños causados, como satisfactorio.

297. En cuanto al proyecto, además de la relación con el daño, la Sala en su valoración tuvo en cuenta que el artículo 141 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en reproducción del numeral 75 del Acuerdo Final de Paz, establece que el proyecto de sanción propia podrá incluir, entre otros, una serie de posibles trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) que deberán ser compatibles con las políticas públicas del Estado en la materia, siempre que sean acordes con las tradiciones y costumbres étnicas y culturales de las comunidades beneficiarias. Esta serie de posibles TOAR fue diseñada en el Acuerdo en relación con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los puntos 1. Reforma Rural Integral. 2. Participación Política, y 4. Solución al problema de las Drogas Ilícitas.

298. El listado de la Ley 1957 de 2019 contempla acciones en zonas rurales y urbanas. Entre las posibles acciones de zonas rurales están la participación y/o ejecución de programas de reparación efectiva para campesinos desplazados, protección medio ambiental de zonas de reserva, construcción y reparación de infraestructura pública en zonas rurales, desarrollo rural, eliminación de residuos, mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, sustitución de cultivos de uso ilícito, recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito, construcción y mejora de las infraestructuras viales, y participación y/o ejecución de programas de alfabetización y capacitación en diferentes temas escolares.

299. Al decretar el artículo 141 que los trabajos que podrá incluir la sanción propia son “entre otros” los listados en el párrafo anterior, la Sala y la JEP en general han entendido a partir del análisis de la Corte Constitucional que la lista no es taxativa, es decir, los posibles trabajos no serán solo los que se circunscriben a dicho listado⁹¹. De manera adicional al

⁹¹ Jurisdicción Especial para la Paz. Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Tribunal para la Paz. Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido

listado, el subpunto 5.1.3.2. del Acuerdo Final de Paz denominado “*Acciones concretas de contribución a la reparación*” fijó la obligación de reparar a las víctimas que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y el Acto Legislativo 01 de 2017 asignaron al Gobierno Nacional y Sistema Integral Para la Paz (SIP). Así, el artículo transitorio 18 de la Constitución Política estableció que, en el marco del SIP, el Estado garantizará el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado. Este artículo fue recogido a su vez en el artículo 39 de la LEAJEP, que establece, tal como el Acuerdo Final de Paz, que en el marco del SIP todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos.

300. Siguiendo lo convenido en el Acuerdo Final, el artículo 141 de la LEAJEP también dispuso la facultad de los comparecientes de presentar ante la Sala un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas de la sanción propia. Este, de acuerdo con el mismo artículo, debe contener los elementos descritos en líneas precedentes. En caso de que dicho proyecto no fuere presentado por los comparecientes, la norma señaló que sería esta Sala la llamada a formularlo. Textualmente el artículo 141 indicó que, si bien el Tribunal de Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto de sanción propia, la Resolución de Conclusiones debe incluir un proyecto de este tipo.

301. En el Caso No. 01, los comparecientes objeto de esta decisión y su defensa optaron por asumir la facultad que la ley les da, y presentaron a la Sala sus proyectos de sanción, luego de los actos procesales que fueron mencionados en la sección de antecedentes, proyecto que fue trasladado a las víctimas y sus representantes para sus observaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que la misma ley contempló entre los componentes específicos del proyecto de sanción un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, o con las autoridades indígenas del lugar donde vayan

Reparador – Restaurador. Adoptados por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz

a ejecutarse los elementos de la sanción cuando esta vaya a realizarse en resguardos, para recibir su opinión y constatar que no se oponen a su contenido. Adicionalmente, el legislador les dio a las víctimas un tercer escenario de participación ante el Tribunal, para comunicar su opinión sobre el proyecto propuesto.

302. El Acuerdo Final y la Ley 1957 de 2019 están atravesados también por un enfoque de derechos y un enfoque territorial que guían la implementación de lo acordado y así lo consignado en las normas y decisiones que lo desarrollan. El artículo 141 de la mencionada ley estableció que las sanciones que imponga la JEP por acciones ocurridas en el marco del conflicto armado contra las personas y/o pueblos indígenas, deberán contribuir a garantizar la permanencia cultural y la pervivencia de los indígenas como pueblos, conforme a su Plan de Vida o equivalentes, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor, o Derecho Propio y estar acordes con las tradiciones y costumbres étnicas de las comunidades.

303. Por su parte, el artículo 56 de la Ley 1922 de 2019 estableció que en casos relacionados con violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, los proyectos de ejecución de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas serán consultados con las víctimas, y la SRVR promoverá que el proyecto de ejecución de trabajos, obras o actividades incluyan compromisos que redignifiquen las actividades socialmente asignadas a las mujeres, y en las que se destruyan los prejuicios y estereotipos machistas, incluyendo labores de cuidado en lo público como limpieza y mantenimiento del espacio público y la participación en procesos de capacitación y formación sobre derechos de las mujeres, violencias y discriminaciones basadas en género con el fin de garantizar el contenido reparador y restaurativo del proyecto.

D.2. Propuestas sobre los componentes restaurativo y retributivo de la sanción propia formuladas por las víctimas y por los comparecientes

304. En este acápite la Sala presenta una síntesis de las propuestas de sanción remitidas por las víctimas durante su participación como intervinientes especiales, una síntesis de los proyectos de sanción presentados por los comparecientes y las observaciones que las víctimas presentaron a estos. En todo caso, la Sala encuentra procedente señalar que la

propuesta de los comparecientes parte del traslado que le hizo el despacho relator de las propuestas que sobre sanción propia ya habían indicado las víctimas de manera espontánea a lo largo del proceso, y que fueron sistematizadas en un Banco de Propuestas.

D.2.1 Las propuestas sobre la sanción propia formuladas por las víctimas directamente o a través sus representantes:

305. La Sala de Reconocimiento recopiló todas las propuestas de sanción hechas por las víctimas desde el inicio de su participación como intervinientes en el Caso No. 01. En total sistematizó las propuestas hechas por ellas directamente o a través de sus representantes, incluida la Procuraduría General de la Nación. Las propuestas allegadas fueron socializadas por la magistratura con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y con la defensa de los comparecientes en un espacio de reunión, en el cual se les hizo entrega del documento síntesis de las propuestas elaborado para esa fecha y de una presentación de dicho análisis.

306. El análisis realizado por el despacho relator partió de la recopilación sistemática de las propuestas de sanción y de reparación que fueron presentando las víctimas acreditadas, en su mayoría antes de la Audiencia de Reconocimiento. Estas propuestas provienen de lo dicho por las víctimas en sus informes, en sus observaciones escritas, en intervenciones orales en la presentación de informes o en las audiencias de observaciones a las versiones voluntarias, y en comunicaciones escritas dirigidas al Despacho en distintos momentos. El Despacho relator recopiló estas propuestas en un Banco de Propuestas de las víctimas, una base de datos que consta en el expediente.

307. En el examen de constitucionalidad la Corte Constitucional, en la sentencia C-080 de 2018, indicó claramente que la finalidad de la sanción propia está orientada a la satisfacción de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz. Para ello, afirmó, que las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado sin que se descarte totalmente el aspecto retributivo, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

308. Sobre la participación de las víctimas en el diseño de la sanción propia, la Corte Constitucional indicó *“la JEP integra varios elementos de la justicia restaurativa, principalmente el relacionado con el enfoque de reparación del daño causado a las víctimas y a las comunidades. Sin embargo, la determinación de la sanción y su supervisión no se realiza a través de procesos directos de diálogo de los responsables con la comunidad, sino que la participación de las víctimas para la definición de los proyectos restaurativos que presenten los responsables se hace ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los proyectos restaurativos serán sensibles a la participación de las víctimas y las propuestas de los responsables, pero las condiciones del cumplimiento de la sanción, así como el proyecto que se validará como proyecto restaurativo, no son definidos por la comunidad y el responsable, sino por la JEP misma”*.

309. A partir de estas indicaciones, la contrastación como labor central de la Sala de Reconocimiento incluye la documentación del daño causado, en cuanto es este uno de los elementos para evaluar la dimensión restaurativa del proyecto de sanción.

310. El daño, ha dicho la Sala, tiene una dimensión dual: por una parte, se trata de las lesiones ocurridas en el momento de los hechos y por otra de las consecuencias a mediano y largo plazo, para individuos, familias y comunidades. También ha considerado que, ante la percepción frecuente de las víctimas de estar ante un Estado indolente, la escucha directa a las víctimas que hace la Sala, y la respuesta a sus observaciones tiene una cualidad restaurativa. Por ello, el Auto SRVR-023-ADHC-CASO-01 del 12 de febrero de 2024 documentó, como se indicó arriba, el daño causado por la toma de rehenes y privaciones graves de la libertad a individuos, familias y comunidades. Entre estos, documentó daños a la integridad física (enfermedades, secuelas físicas, discapacidades); daño psíquico; estigmatización que de manera injusta era acompañada por rumores infundados de que la víctima se “merecía” lo sucedido; perjuicio material, de los bienes y los proyectos de vida perdidos para toda la familia; pérdida inmaterial de las relaciones humanas; pérdida de trabajos y ruptura familiar; secuelas psicológicas individuales y familiares.

311. En cuanto a la afectación comunitaria, la Sala determinó que esta incluye: el empobrecimiento y éxodo de comunidades campesinas, afectación a la vida económica y social de los pequeños pueblos, especialmente a ganaderos y agricultores modestos que

vivían en fincas apartadas de la protección de las autoridades; miedo y la desconfianza, y la erosión de formas históricas de cuidado comunitario.

312. Al analizar las propuestas y solicitudes relacionadas con el componente restaurativo de la sanción propia hechas por las víctimas acreditadas, la Sala encontró que un buen número de referencias son sobre la necesidad de que haya un reconocimiento de lo sucedido. Las víctimas solicitan el relato completo y detallado de los hechos concretos más allá del macrocaso, donde se identifique a sus responsables, incluyendo a los terceros, y las otras formas de victimización sucedidas durante los secuestros.

313. Este tipo de propuestas pueden ser adelantadas por los dos comparecientes imputados. En tanto, se trata principalmente de solicitudes públicas de perdón y arrepentimiento, a través de eventos a nivel nacional y territorial, en los cuales los comparecientes reconozcan y manifiesten arrepentimiento por el daño causado a las víctimas y a la sociedad civil. Igualmente, la Sala ha recibido solicitudes de encuentros privados para la restauración en los cuales las víctimas piden un espacio promovido por la JEP, con la mediación de expertos, que facilite el encuentro con los responsables de los crímenes, de manera que puedan ser abordadas desde una perspectiva restaurativa aquellas demandas de verdad o reconocimiento que exceden las posibilidades del escenario judicial. En estos escenarios las víctimas pueden buscar que los comparecientes resuelvan preguntas particulares sobre lo ocurrido, mientras que los máximos responsables pueden hacer reconocimientos sobre hechos concretos, atendiendo a los lineamientos que la Sala ha determinado en materia restaurativa y, también, se pueden llevar a cabo solicitudes de perdón individuales.

314. Estas propuestas también tienen una dimensión colectiva a través de la solicitud de acciones de memoria y dignificación. Las víctimas esperan que el reconocimiento de los comparecientes contribuya a la dignificación de la memoria de la vida que prevalece, a pesar de los intentos bélicos por disminuirla. En este sentido, solicitan la elaboración de elementos que den cuenta de los valores identitarios transgredidos y la defensa de la memoria de sus seres queridos, quienes nunca podrán ser olvidados.

315. En algunos casos, las comunidades solicitaron ser ellas quienes realicen estas acciones a manera de reapropiación de sus territorios, en otras, quieren ver el esfuerzo físico de los comparecientes en su elaboración. Estas propuestas incluyen la elaboración de estructuras para la dignificación de la memoria de las víctimas y las comunidades, la creación de escuelas de perdón y encuentros para la reconciliación; capacitación en no violencia e incluso, por ejemplo, que las extintas FARC-EP realicen un video documentando lo ocurrido en las tomas militares, el cual refleje la dignidad y valentía de los soldados y policías que resistieron las tomas.

316. Además de las acciones inmateriales de solicitud de perdón y de dignificación de las víctimas, hay propuestas dirigidas a pedir acciones asociadas a resarcir las dimensiones materiales del daño causado, individual y colectivo. Entre ellas se encuentran: que las sanciones incluyan la rehabilitación o construcción de tramos de malla vial rural, la construcción de infraestructura de salud, de educación y para la producción (centros de acopio), iniciativas de ecoturismo y protección del medio ambiente, así como destinadas a fortalecer la producción agropecuaria. También hay propuestas relativas al desminado humanitario.

317. Por otra parte, algunas de las propuestas se refieren específicamente a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En los casos de desaparición forzada, los aportes de verdad adquieren un carácter particularmente restaurador, dado que permiten dar cierre a la incertidumbre y a las posibilidades imaginadas que las víctimas habían advertido para sus seres queridos. Por ende, la mayoría de las propuestas se orientan a la consecución de información pertinente para el encuentro y plan de búsqueda.

318. Así mismo, se unen aquellas orientadas a la memoria de los desaparecidos para retornarle el valor a la vida del que fue restado. Por ejemplo, estas acciones pueden ser participar en metodologías de búsqueda activa en donde vean que los comparecientes se involucran físicamente en la ubicación de sus seres queridos; identificación de coordenadas geográficas de fosas comunes y prácticas que permitan entender cómo operaba este fenómeno; espacios de encuentro entre víctimas y comparecientes:

rememoración de quiénes eran las víctimas para sus familias, devolución de pertenencias despojadas y memoria de los comparecientes sobre la vida de las víctimas en el cautiverio.

319. Por último, la Sala recibió una serie de solicitudes de reparación dirigidas al Estado. De este modo, además de las solicitudes dirigidas a los comparecientes, las víctimas también pidieron medidas de reparación al Estado, en rechazo al desamparo que han sufrido por parte de sus instituciones. Se refieren a la ineficiencia estatal en proteger su seguridad e integridad al momento de los hechos, pero también a las bajas garantías en el acceso a medidas de reparación dignas y efectivas. Solicitan medidas como: el reconocimiento de su estatus legal como víctimas del conflicto por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV); la administración efectiva y transparente de justicia con sanciones representativas y ejemplarizantes para los perpetradores; que los responsables de la administración de los fondos otorgados por la Ley de Víctimas entreguen informes regulares a un comité de víctimas; que la fuerza pública reconozca las afectaciones causadas por el cautiverio.

320. A partir del análisis de las propuestas y manifestaciones de las víctimas acreditadas, la Sala reiteró su convencimiento de que los proyectos de sanción, para tener una dimensión restaurativa deben armonizar el reconocimiento, los trabajos, y el daño documentado (individual, familiar y colectivo) para responder, por lo menos en parte, a las solicitudes y expectativas de las víctimas. También concluyó que es deseable que las sanciones contemplen trabajos relativos al reconocimiento del daño individual causado, por ejemplo, tiempo dedicado a encuentros privados, a búsqueda de personas desaparecidas, a reconstrucción de lugares campamentarios para facilitar la identificación de polígonos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

321. Sumado a ello, es deseable que las sanciones contemplen trabajos relativos a la reparación material de la guerra a las comunidades afectadas por el secuestro (minas, vías, infraestructura). Al respecto la Sala observó que una parte importante de las propuestas de sanción de las víctimas no tienen como fin último su solo beneficio personal. En efecto, la solidaridad de las víctimas con otras víctimas es una constante en la formulación de sus propuestas de sanción, al plantear acciones y medidas que lleven a mejorar la situación de

grupos de víctimas en condiciones que ellas mismas consideran desfavorables, así como con la situación de violencia y victimización en el país. Por último, encuentra que es deseable que estos trabajos, tanto de reconocimiento como de reparación del daño material, tengan una dimensión de memoria y dignificación, por ejemplo, al estar asociados a comunidades con impactos que simbolizan afectaciones más amplias o concretas o con los nombres dados a los lugares construidos.

322. Las solicitudes de las víctimas también llevaron a la Sala a reflexionar sobre la importancia de que el Tribunal reitere la obligación del Estado de otorgar reparaciones administrativas, y aclarar la relación entre esta obligación y los dineros entregados por las FARC-EP en el momento de su reincorporación a la vida civil.

323. Finalmente, la Sala llama la atención sobre la solicitud reiterada de las víctimas de contar con apoyo psicosocial y psicológico para hacer procesos de duelo y cierre personal. Si bien esta es una de las medidas de rehabilitación consideradas en la Ley 1448, la Sala recuerda que uno de los compromisos del Acuerdo Final de Paz fue, precisamente, la implementación de medidas de recuperación emocional a nivel individual de acuerdo con el daño específico que hubieren padecido, para lo que el Gobierno Nacional se comprometió a fortalecer el acceso de oferta en salud mental para las víctimas que así lo requirieran, en este caso, con respecto a los daños específicos ocasionados a la salud emocional de las víctimas por las privaciones de la libertad.

324. La Sala recopiló también las expresiones de las víctimas con respecto a elementos del componente retributivo de la sanción, en particular sobre su duración. Al hacer la recolección de esta información, además, la Sala pudo percatarse de que hay víctimas que solicitan la pena privativa de la libertad o tiempos de duración superiores a los previstos en la normatividad que desarrolla la obligación de hacer justicia por parte de la JEP. Al respecto, como se ha establecido, la Sala y el Tribunal tienen un marco específico de aplicación de las sanciones que la lleva a descartar, para el caso de los comparecientes que han reconocido su responsabilidad y aportado verdad de manera plena, detallada y exhaustiva, las penas privativas de la libertad, así como periodos de duración de estas mayores a 8 años por las razones anteriormente expuestas.

D.2.2. Propuestas de sanción de los comparecientes

325. El proyecto de sanción presentado por los comparecientes a partir de las propuestas de las víctimas trasladadas por el despacho relator habiendo recibido con antelación a la audiencia de reconocimiento la síntesis de las propuestas de sanción de las víctimas acreditadas y su análisis. Los comparecientes radicaron ante la Sala un “Proyecto de Sanción Propia”, compuesto por seis partes, la primera presenta consideraciones sobre la justicia restaurativa, el Acuerdo Final de Paz, el impacto restaurador de las sanciones propias y el proceso de formulación de los proyectos.

326. La segunda expone cinco elementos transversales al proyecto: i) lo relativo a la aplicación de enfoques como el de interseccionalidad y los enfoques diferenciales de niñez y adolescencia, género, étnico-racial, de curso de vida o persona mayor, discapacidad y el enfoque territorial; ii) la propuesta que hacen los comparecientes y su defensa sobre el mecanismo de consulta con víctimas, iii) una descripción de los posibles roles que podrían desempeñar los comparecientes en la implementación de los proyectos de sanción, iv) una propuesta sobre la restricción efectiva de derechos y libertades, y v) un diagnóstico sobre la situación de seguridad de la población compareciente.

327. En la tercera parte, el documento presenta los proyectos. Estos son tres: i) uno dirigido a actividades de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ii) uno orientado al reconocimiento del medio ambiente como víctima y la reparación de los daños medioambientales ocasionados con la comisión de los delitos y iii) uno que denominan transversal, relativo a medidas de memoria y memorialización.

328. La cuarta sección del documento hace una descripción de la participación individual de los comparecientes objeto de esta decisión en los proyectos, la quinta corresponde a un petitorio en el que solicitaron que el proyecto fuera tenido en cuenta por la Sala en cuanto tal, así como que se instalara una mesa de trabajo cuyo objetivo fuera dar viabilidad a los proyectos presentados.

329. La sección sexta del proyecto de los comparecientes es una sección de anexos. Esta incluye los siguientes documentos: tres que desarrollan de manera más amplia los proyectos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el proyecto del reconocimiento del medio ambiente como víctima del conflicto; y dos fichas individuales de caracterización de los comparecientes que incluyen, cada una, datos de identificación, información sociodemográfica, información familiar, condiciones físicas y de salud, actividades que desarrollan en el marco de la reincorporación, condiciones de seguridad y un último apartado llamado “proyección sanción” donde los comparecientes informaron sobre sus condiciones de residencia y la posibilidad de cambiarla para el desarrollo de la sanción, así como datos sobre los TOAR anticipados en los que han participado.

330. Para efectos prácticos, la Sala sintetiza a continuación solamente el contenido de los proyectos, las salvedades hechas en el documento sobre algunos de sus componentes, la propuesta de mecanismo de consulta presentada, el diagnóstico en materia de salud y seguridad, su propuesta de restricción efectiva de derechos y libertades, y las consideraciones sobre los roles que, a su juicio, podrían ejecutar los comparecientes.

331. En cuanto a las salvedades hechas por los comparecientes y su defensa con respecto a los contenidos del proyecto, dejaron constancia de las dificultades que encontraron para referirse a elementos como la viabilidad financiera y presupuestal, y las condiciones de ejecución de las sanciones, especialmente en lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad de los comparecientes.

332. Al respecto señalaron que, si bien tuvieron en cuenta las condiciones de financiación y viabilidad presupuestal, esto requiere una voluntad política del gobierno nacional que estuvo ausente en el último cuatrienio. Sobre las condiciones de seguridad indicaron, entre otros, que las zonas más afectadas por el conflicto armado hoy día coinciden con las regiones que están sufriendo un recrudecimiento exacerbado de las violencias. Esta situación, de un lado, dificulta acceder a los territorios para generar diagnósticos y formular proyectos. Del otro, plantea retos y preguntas sobre las condiciones de ejecución de sanciones cuando sean impuestas, tanto por las garantías para la vida de las personas sancionadas, quienes sufren riesgos extraordinarios, como de las

comunidades receptoras y beneficiarias. De ahí que, como se verá, los proyectos no se refieren en concreto a elementos como los lugares de ejecución o las condiciones de habitabilidad, sino que le entregan a la Sala información relevante para tener en cuenta al respecto.

333. Los comparecientes hicieron una propuesta sobre el mecanismo para consultar los proyectos concretos con las víctimas acreditadas como un elemento más de cada uno de los proyectos propuestos. Para ello sugieren que la responsabilidad de dicha consulta, en lo administrativo, logístico, presupuestal, de difusión y de preparación y acompañamiento social de las víctimas y comparecientes que participan, sea asumido por la SEJEP de la JEP.

334. La propuesta incluye tres fases para su desarrollo denominadas apertura al diálogo, diálogo restaurativo y retroalimentación del proyecto. Sugiere que el lugar para la consulta al que se refiere la norma es la ubicación geográfica en la que se ejecutarán los proyectos, prefiriendo siempre el mayor grado de focalización posible. Considera que las víctimas acreditadas que residen en el lugar donde se proyecta la realización de los trabajos y obras serán convocadas al mecanismo de consulta a nivel territorial y de no ser así (si no residen en el lugar) no harán parte del mecanismo, y prevé que los espacios de consulta con las víctimas residentes deberán ser las mesas de participación de víctimas o de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia o las Juntas de Acción Local (JAL) asentadas en los territorios focalizados.

335. También, como parte de los elementos que los comparecientes piden que se tenga en cuenta para el proyecto de sanción se encuentran sus condiciones de salud y seguridad. En cuanto al primer elemento, en las fichas individuales anexas al proyecto los comparecientes presentaron diagnósticos de salud variados, tanto asociados a la guerra como a condiciones propias de la edad, así está expuesto en las fichas de caracterización de los comparecientes. Además, el hecho de que el proyecto solicite que se tenga en cuenta el enfoque de adulto mayor tiene que ver directamente con que los dos comparecientes superan los 60 años.

336. En lo relativo a la restricción efectiva de derechos y libertades, el documento de los comparecientes hace una síntesis de las disposiciones de la Corte Constitucional en la materia, así como de experiencias internacionales donde se aplicaron modelos de justicia transicional y su imposición de sanciones. Posterior a estas cuestiones, su propuesta alrededor de la restricción efectiva de derechos y libertades se centra en lo siguiente: en primer lugar, estiman que el lugar de residencia de los comparecientes podrá ser distinto al lugar donde estas se ejecutarán, de ahí que el sancionado podrá tener residencia en lugar distinto al señalado por la magistratura para ejecutar los trabajos que hacen parte de la sanción. Consideran también que la restricción más efectiva podría ser aquella que se materialice cuando el sancionado esté ejecutando los trabajos dispuestos en la Sentencia y que, entonces, lo que ocupa es encontrar fórmulas adecuadas para definir la restricción sobre el movimiento y la residencia.

337. Sobre el movimiento, la propuesta de los comparecientes es que este se restrinja únicamente dentro del espacio y tiempo definido para el cumplimiento específico de la sanción, por lo que la limitación abarca las obligaciones derivadas de los trabajos impuestos. Así, consideran que los sancionados deberán tener tareas definidas y tiempos para el cumplimiento, que podrán ser realizadas desde diferentes lugares dependiendo de la naturaleza o fase del proyecto.

338. Sobre la residencia, la propuesta indica que los comparecientes mantendrán sus lugares de residencia y domicilio principal donde realicen sus actividades de reincorporación, así como una residencia y domicilio temporal donde cumplen la sanción, por la duración de los proyectos propuestos por los cinco años mínimos planteados en las normas para quienes reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena, detallada y exhaustiva. Finalmente, los comparecientes proponen que como mecanismos para la garantía efectiva del cumplimiento de la sanción se retomen la aproximación de los tribunales mixtos de Ruanda, donde operó como principio un enfoque comunitario. Eso, en la práctica, se traduce en la propuesta como la vinculación de las Juntas de Acción Comunal y de colectivos comunitarios en el seguimiento y vigilancia de la sanción, siendo estos quienes acrediten el cumplimiento de la restricción y quienes gestionen permisos de movimiento y salida a los comparecientes.

339. Considerando las salvedades anteriores, así como el diagnóstico de salud y seguridad, los comparecientes propusieron unos roles que, de acuerdo con sus conocimientos, aptitudes, arraigos, y limitaciones, pueden desarrollar en los trabajos que sean impuestos como sanción. Son dos, el primero se denomina “líder de proyecto”, estiman que debe ser desarrollado por el compareciente a quien se le imponga una sanción de cinco a ocho (5 a 8) años, y su papel sería el de liderar las fases o capítulos regionales de los trabajos que les serán asignados, llevar a cabo labores de gestión y concertación y liderar los grupos de personas sancionadas. El segundo rol se denomina “líder territorial”, según la propuesta debería ser desarrollado por la persona a la que se le imponga una sanción de dos a cinco (2 a 5) años o de cinco a ocho (5 a 8) años, su papel sería el de impulsar y ejecutar en terreno las diferentes fases, actividades y acciones de cada uno de los trabajos impuestos como parte de la sanción.

340. Así, con estas salvedades y propuestas hechas por los comparecientes, a continuación, la Sala procede a sintetizar el contenido de los trabajos y actividades propuestos como parte del proyecto.

Proyecto No. 1 “Búsqueda de personas desaparecidas”

1. Objetivo general:

Restablecer los derechos de las víctimas de desaparición forzada a partir de obras, trabajos y acciones orientadas a la búsqueda, localización y entrega digna de personas dadas por desaparecidas.

1.1. Objetivos específicos:

- Estructurar un Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que permita plantear acciones en el corto, mediano y largo plazo para garantizar la búsqueda de personas.

- Ofrecer verdad sobre los hechos ocurridos en los casos en los que se involucra desaparición forzada.
- Propiciar encuentros con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras entidades relacionadas para entregar información relevante sobre la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
- Desarrollar acciones de cartografía para la búsqueda, localización, sistematización, identificación y dignificación de personas dadas por desaparecidas.
- Contribuir en el desarrollo de la búsqueda en campo, en las zonas delimitadas cartográficamente, de personas dadas por desaparecidas.

1.2. Justificación y análisis del daño causado en relación con el proyecto:

Los comparecientes consideraron que el proyecto incidía directamente en la reparación de una de las dimensiones del daño ocasionado como consecuencia de los crímenes derivados del patrón. Lo anterior, teniendo en cuenta que varias de las personas que fueron privadas de su libertad como consecuencia de los secuestros y tomas de rehenes, con posterioridad, fueron asesinadas y desaparecidas.

Enfatizaron que una de las principales afectaciones de las víctimas indirectas provenía de la zozobra, angustia y temor de desconocer el paradero de sus seres querido y las condiciones en las que habían sido asesinados. Por ello, plantearon que impulsar acciones para garantizar la búsqueda podría contribuir a reparar el daño moral causado.

2. Obligaciones (Trabajos, obras y actividades que hacen parte de la sanción)

TOAR 1:

Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas: Este TOAR busca que, en apoyo de autoridades y organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, se estructure un Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que pueda asignar fases, responsables, proyectos y recursos para que, en el corto, mediano y largo plazo se puedan implementar acciones permanentes de búsqueda, localización y entrega digna de restos óseos.

Se considera que este plan es esencial, pues podría articularse con instrumentos de planificación territorial y sectorial y, de esta forma, obtener recursos para financiar acciones y proyectos.

TOAR 2:

Jornadas de verdad “Contando dónde están”: A través de este TOAR se busca propiciar espacios con las víctimas, acompañados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y dirigidos a la contribución a la verdad y el esclarecimiento de hechos relacionados con desaparición forzada. Estas jornadas se llevarían a cabo en las plazas públicas de los municipios que se acuerden con las víctimas.

Con ellas se pretende que los comparecientes entreguen verdad detallada y respondan las demandas de verdad de las víctimas en espacios dialógicos, de reflexión y de perdón. Además, se busca, a través de un componente pedagógico, concientizar a la sociedad sobre la gravedad del crimen de desaparición forzada y los mecanismos con los que cuentan las víctimas para ejercer sus derechos.

TOAR 3:

Cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento: Este TOAR consiste en recorrer con excombatientes zonas priorizadas del territorio nacional, indagando sobre posibles sitios de enterramiento de víctimas de desaparición forzada.

Una vez identificados los sitios se procede a georreferenciar, compilar y hacer entrega formal de las coordenadas a las autoridades competentes.

TOAR 4:

Búsqueda en campo: Este TOAR pretende que los comparecientes reciban las capacitaciones pertinentes para que, una vez georreferenciados los puntos de interés, puedan acompañar directamente a los equipos técnicos y tener un rol activo en el proceso de búsqueda de restos óseos de personas desaparecidas.

3. Fases temporales

Los comparecientes estructuraron el proyecto en las siguientes fases:

Fase 1. Diálogo y preparación:

Esta fase considera como paso previo la concertación de detalles alrededor de acciones con el objetivo de garantizar la inclusión del criterio de acción sin daño. Por ejemplo, en lo relacionado para un adecuado desarrollo de las jornadas de verdad es importante recoger, las pretensiones que tengan las víctimas en la materia y escuchar sus propuestas para el desarrollo de la actividad.

Fase 2. Cumplimiento de sanciones:

El cumplimiento de la sanción se discriminó por parte de los comparecientes así:

- **TOAR 1:**
 - Mesas de trabajo preparatorias del Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas: un (01) año.
 - Estructuración del Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas: parte general seis (06) meses y componente programático (06) meses.

- Revisión y retroalimentación: dos (02) meses.
- Socialización con entidades, grupos de interés y actores estratégicos: seis (06) meses.
- **TOAR 2:**
 - Este TOAR se desarrollará por un periodo de tres (03) años. Se pretende que cada jornada de verdad esté precedida por mesas preparatorias con las víctimas, la JEP y las demás entidades del SIP.
- **TOAR 3:**
 - Mesas de trabajo para delimitación geográfica de sitios de enterramiento: seis (06) meses.
 - Recorridos en campo de los lugares delimitados: seis (06) meses
 - Georreferenciación, compilación y entrega de coordenadas: un (01) año.
 - Jornadas de socialización con víctimas: tres (03) meses.
- **TOAR 4:**
 - Capacitación de comparecientes vinculados al TOAR: un (01) año.
 - Acciones de búsqueda en campo: dos (02) años.

4. Horario:

No especifica.

5. Lugares de ejecución:

Todo el territorio nacional.

<p>6. Personas que lo ejecutarán</p> <p>Laureano Serna y Ainhoa Etxebarria</p>
<p>7. Lugar donde residirán</p> <p>No especifica.</p>
<p>8. Resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOAR 1: Un (01) documento de Plan Integral de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas socializado y retroalimentado. • TOAR 2: Veinte (20) jornadas de “Contando la Verdad” en municipios concertados con las víctimas. • TOAR 3: Un (01) documento de cartografía nacional de posibles sitios de enterramiento socializado. • TOAR 4: Sin resultados especificados.

Proyecto No. 2 “Naturaleza, medio ambiente y activación económica”

<p>1. Objetivo general: Trabajar de manera conjunta con las comunidades y víctimas en la recuperación y conservación de las áreas de interés ambiental de la región de La</p>
--

Mojana, mediante estrategias integrales de restauración ecológica, educación ambiental y promoción del ecoturismo sostenible.

1.1. Objetivos específicos:

- Coordinar, entre comparecientes, instituciones, comunidades y víctimas los planes para la rehabilitación o construcción de tramos de malla vial rural, la construcción de infraestructura de educación, iniciativas de ecoturismo y protección del medio ambiente en la región de La Mojana.
- Promover acciones de restauración ambiental en las zonas de la región de La Mojana que permitan mejorar los humedales presentes en el territorio.
- Realizar acciones de educación ambiental y ecoturismo para la restauración y conservación de los ecosistemas y, a su vez, contribuir al desarrollo rural del territorio.

1.2. Justificación y análisis del daño causado en relación con el proyecto:

Los comparecientes reconocieron que el daño ocasionado en la región de La Mojana provocó una gran afectación ambiental. Este proyecto busca implementar acciones para reparar los daños ocasionados a los ecosistemas de la región.

2. Obligaciones (Trabajos, obras y actividades que hacen parte de la sanción)

TOAR 1:

Senderos de paz: los caminos utilizados para la materialización de los secuestros serán objeto de reconstrucción. Ayapel-Córdoba.

TOAR 2:

Construcción de la Escuela de Artes “La Momposina”: actividades educativas por medio del teatro, la música, la pintura para promover la educación ambiental. Nechí-Antioquia

TOAR 3:

Ecohotel “La tierra del Agua”: por medio del Ecohotel se realizará una activación económica y turística de la región, promover acciones turísticas siempre y cuando se impulse la valoración social de la naturaleza, se reduzcan las presiones sobre los ecosistemas, y generen beneficios locales y regionales a la economía y calidad ambiental. San Marcos-Sucre

3. Fases temporales

Duración total: Cuatro (04) años

Fase 1. Planeación:

Esta fase tiene como objetivo la concertación entre los comparecientes, víctimas, comunidades e instituciones respecto de los planes de ejecución de los TOAR en la Región de la Mojana.

Fase 2. Ejecución:

- Procesos de capacitación y alfabetización de los comparecientes en asuntos de restauración ambiental y construcción de programas de educación ambiental. Tiene una duración estimada de seis (06) meses.
- Ejecución de acciones de restauración ambiental, ecoturismo y educación ambiental. Tiene una duración estimada de tres (03) años.

Fase 3. Seguimiento y evaluación de los resultados:

Esta fase tendrá como objetivo realizar entregas formales de cada uno de los TOAR propuestos, evidenciando los resultados del cumplimiento de las sanciones. 6 meses.
4. Horario: No especifica.
5. Lugares de ejecución: <ul style="list-style-type: none"> • TOAR 1: Senderos de paz: Ayapel-Córdoba. • TOAR 2: Escuela de Artes” La Momposina”: Nechí-Antioquia • TOAR 3: Ecohotel “La tierra del Agua”: San Marcos-Sucre
6. Personas que lo ejecutarán Laureano Serna y Ainhoa Etxebarria
7. Lugar donde residirán No especifica.
8. Resultados No especifica.

Proyecto No. 3 “Memoria y dignificación”

1. Objetivo general: Implementar actividades restaurativas de memoria y dignificación que reconozcan la responsabilidad de los delitos cometidos y que

reivindiquen la dignidad de las víctimas y contribuyan a la reconciliación y la no repetición.

1.1. Objetivos específicos:

- Fomentar procesos de sensibilización y reflexión social sobre los impactos del conflicto armado y la importancia de la memoria como garantía de no repetición.
- Fortalecer procesos comunitarios y territoriales de memoria que favorezcan la reconstrucción del tejido social.
- Promover procesos de reflexión colectiva y apropiación de la memoria histórica a través de intervenciones artísticas y espacios simbólicos de dignificación de las víctimas.
- Socializar con la comunidad los ejercicios de reconocimiento de verdad en los que han participado los comparecientes en sede judicial del Caso 01.

1.2. Justificación y análisis del daño causado en relación con el proyecto:

Los comparecientes establecieron una relación entre las medidas simbólicas y los mecanismos de dignificación de las víctimas, destacando que estas también generan un impacto en el tejido social, entendido como el conjunto de relaciones de confianza, cohesión, solidaridad y apoyo. Lo anterior, al hacer visible el sufrimiento privado y reconocer la capacidad de resiliencia y supervivencia de quienes padecieron los daños.

2. Obligaciones (Trabajos, obras y actividades que hacen parte de la sanción)

TOAR 1

Pedagogía de la memoria transformativa: Los comparecientes orientarán un curso dirigido a las víctimas de la comunidad campesina afectada en el que aportarán

elementos teóricos, prácticos, experienciales y vivenciales de lo que fue el conflicto armado en el país. Los contenidos que proponen incluyen: **i)** origen, causas y desarrollo del conflicto armado colombiano, **ii)** el reto de construir paz en Colombia y los caminos al Acuerdo Final de Paz, **iii)** daños, afectaciones e importancia de las víctimas y su memoria y **iv)** prevención y garantías de no repetición.

TOAR 2

Ruta de memoria: Los comparecientes propiciarán encuentros comunitarios en los que, junto a las víctimas, líderes sociales, jóvenes y demás habitantes de la comunidad se identificarán lugares significativos del territorio relacionados con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. A través de recorridos pedagógicos, se realizará una señalización simbólica de dichos espacios, resaltando su importancia para la memoria colectiva y la dignificación de los lugares públicos afectados por el conflicto armado.

TOAR 3

Libro “La memoria de quienes ya no están”: Esta iniciativa contempla la creación y edición de un libro en formatos digital, físico y audiolibro en el que se reunirán textos elaborados por firmantes del Acuerdo Final y víctimas de delitos relacionados con la desaparición forzada. El propósito del libro es dignificar y preservar la memoria de las víctimas mediante relatos sobre sus vidas, las dinámicas del conflicto armado en los territorios donde habitaban y las experiencias de quienes han liderado la búsqueda de sus seres queridos. Para su elaboración, se proyecta desarrollar un proceso de investigación, entrevistas y sistematización de información, estructurado en siete capítulos regionales, correspondientes a las zonas donde tuvo presencia el Bloque La Mojana de las extintas FARC- EP.

TOAR 4

Conversatorio comunitario: Los comparecientes socializarán con la comunidad afectada, en un lenguaje claro y pedagógico, los principales aportes de verdad realizados ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En estos espacios se promoverá la escucha de las víctimas y de las organizaciones sociales, la construcción colectiva de

reflexiones y compromisos con la comunidad, así como el reconocimiento del daño causado.

3. Fases temporales

Fase 1. Planificación:

Esta primera fase tendrá como objetivo construir los contenidos (Lugares y personas que harán parte de cada acción), así como los tiempos de cumplimientos.

Fase 2. Implementación y seguimiento:

La segunda fase tendrá como objetivo garantizar la implementación de lo construido en la fase 1, así como desarrollar un seguimiento que permita dar cuenta del cumplimiento de los objetivos del presente proyecto.

Fase 3.

Entrega de los resultados: Finalmente la tercera fase tendrá como objetivo realizar una entrega formal de cada uno de los resultados de las acciones desarrolladas (Libro y audio libro, señalizaciones simbólicas, entre otras).

4. Horario:

No especifica.

5. Lugares de ejecución:

Todo el territorio nacional.

6. Personas que lo ejecutarán

Laureano Serna y Ainhoa Etxebarría

<p>7. Lugar donde residirán</p> <p>No especifica.</p>
<p>8. Resultados</p> <p>No especifica</p>

Observaciones de las víctimas y sus representantes al proyecto presentado por los comparecientes

341. La Sala recibió cinco (5) memoriales de observaciones al proyecto de los comparecientes, presentados por los representantes de víctimas acreditadas durante el trámite y por el Ministerio Público. A partir de su lectura, la Sala pudo distinguir que todos ellos se refieren a los elementos del proyecto, por lo que no hará una exposición uno a uno de los documentos, sino que lo hará en relación con los temas allí tratados, poniendo a dialogar las posiciones de las víctimas en cabeza de sus representantes, así como las apreciaciones de la Sala en los temas concretos.

342. En sus escritos, los representantes de víctimas echaron de menos la aplicación de los enfoques diferenciales enunciados en la sección transversal del proyecto en cada una de las propuestas de TOAR planteadas por los comparecientes. Además, estimaron que *“no es objeto de los enfoques diferenciales de un proyecto de reparación a las víctimas atender las particularidades de los responsables”*, e hicieron un llamado a la JEP para que los enfoques fueran tomados en cuenta en el momento de aprobación de los proyectos.

343. De manera similar se expresó la Procuraduría, haciendo énfasis también en la necesidad de proponer acciones de reparación para las mujeres, quienes constituyen el mayor número de víctimas acreditadas en el Caso. Sumado a ello, ofreció un análisis de los daños causados con ocasión de las privaciones de la libertad; para esta entidad, en primer lugar, los proyectos de TOAR deben atender a un daño colectivo que responda a las dinámicas propias del conflicto armado, ya que, de lo contrario, se generarían

clasificaciones o categorizaciones entre las víctimas que pueden llevar a que algunas se sientan excluidas de los proyectos o a recibir beneficios desiguales. En segundo lugar, la Procuraduría estimó que, en cierta medida, los proyectos deben apuntar a conciliar conflictos históricos, afectaciones globales e incluso a retroalimentar otros macrocasos.

344. Por último, todos los memoriales se refirieron a que los elementos específicos establecidos en el artículo 141 de la Ley 1957 de 2019, y citados en la sección precedente, no fueron abordados en su totalidad en el proyecto.

345. En términos similares la representación de víctimas destacó la falta de certeza sobre los tiempos de implementación de algunos proyectos y se preguntó si estos iban a darse de manera simultánea; además, afirmó abiertamente que algunos de los proyectos no cumplen con los requisitos exigidos en el mencionado artículo; y estimó que no hay un análisis de compatibilidad con las políticas públicas y la reincorporación. Adicionalmente, tanto la Procuraduría como las víctimas señalaron que no hay referencia a las condiciones de financiación y de viabilidad presupuestal, ni tampoco a los lugares detallados donde se ejecutarán los trabajos.

346. En particular, de cada uno de los proyectos las víctimas formularon las siguientes observaciones:

- Proyecto de “Búsqueda de personas desaparecidas”
Coincidieron en observar que las actividades relacionadas, de plantearse como sanción, entrarían en tensión con las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad.
- Proyecto de “Naturaleza, medio ambiente y activación económica”
El común denominador de las observaciones presentadas por los representantes con respecto a este proyecto es la relación con las afectaciones de las víctimas de privaciones de la libertad y los delitos que con ellas concurrieron.
- Proyecto de Proyecto No. 3 “Memoria y dignificación”

Destacaron que algunos de los TOARS podrían dar prevalencia a relatos permeados de la visión de los comparecientes y cuestionaron la posibilidad de llevar a cabo este proyecto de cara a la situación de seguridad de muchos municipios del país.

D.3. Valoración del proyecto de sanción propia realizado por la Sala de Reconocimiento

347. A continuación, la Sala procede a hacer una valoración de los tres proyectos presentados por los comparecientes. Esta valoración parte de lo que indican los incisos 5, 6 y 7 del Artículo 141 de la Ley Estatutaria. Mientras que el inciso 6 indica que el Tribunal tendrá “plena autonomía para decidir sobre el proyecto”, el inciso 7 anota que dicho proyecto deberá haber sido previamente aprobado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Por su parte, el inciso 5 indica que, en caso de que el proyecto fuera propuesto por los comparecientes y aprobado por la Sala, las víctimas, si lo creen conveniente, podrán comunicar al Tribunal su opinión sobre el programa propuesto.

348. Interpretados en conjunto, es claro, para la Sala, que es el Tribunal el que otorga o no la aprobación definitiva del proyecto, modificándolo, o no, dentro de sus facultades constitucionales y legales y con participación de las víctimas. Sin embargo, es también labor de la Sala sentar una valoración de los proyectos de sanción, a partir de la instrucción del caso, especialmente a partir del proceso dialógico adelantado hasta ahora con comparecientes y víctimas.

349. Esta valoración parte de lo que dispone la Ley y la jurisprudencia constitucional, así como de los “*Líneamientos en materia de sanción propia y TOAR*” previamente adoptados por la Sección de Reconocimiento en sesión ordinaria del 14 de abril de 2020 y complementados en sesiones del 2 y 9 de noviembre de 2023. A continuación, la Sala realiza la valoración del proyecto propuesto en cuatro ejes temáticos. En primer lugar, valora i) el contenido reparador-restaurador del proyecto, incluyendo lo que hace referencia a los enfoques diferenciales y la participación de las víctimas en la valoración de la sanción. En segundo lugar, valora ii) su contenido de restricción efectiva de libertades y derechos. En tercer lugar, valora iii) la propuesta desde el principio de proporcionalidad

de la sanción propia por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como criterio del derecho penal internacional para la valoración judicial de la sanción. Por último, valora la propuesta desde iv) los roles propuestos para cada uno de los comparecientes individualizados en la presente resolución de conclusiones.

a. Valoración del contenido reparador-restaurador de los TOAR propuestos en el proyecto de sanción propia presentado por los comparecientes

350. La normatividad aplicable a este órgano reitera de múltiples maneras que los TOAR propuestos como sanción propia por los comparecientes deben tener un componente reparador-restaurador. Esta Sala ya lo manifestó en la Resolución de Conclusiones 01, del Caso 03, cuando hace su propia propuesta de sanción propia aplicable a los comparecientes de la fuerza pública que comparecieron en el Sub-caso Catatumbo. Al hacerlo, retomó la normativa estatutaria, llamando la atención sobre la coherencia que esta exige entre el proyecto de sanción, la satisfacción de los derechos de las víctimas en el marco del sistema Integral de Paz, la consolidación de la paz y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

351. Respecto a los lineamientos normativos, los proyectos si bien indican objetivos, fases temporales, obligaciones y personas que los ejecutarán, algunos carecen de lugares de ejecución, lugar de residencia y horarios. La Sala valoró las salvedades hechas al respecto por los comparecientes con relación a la insuficiente articulación institucional, y a los escenarios de incertidumbre que llevaron a la formulación del proyecto en los términos en los que se encuentra, y los encontró razonables, ante la ausencia de oferta institucional. La Sala además valoró positivamente la propuesta de los comparecientes de continuar en la construcción detallada de los proyectos con la participación de las víctimas, metodología que es parte de la misma propuesta. En esa medida, pone a consideración los proyectos a la Sección de Reconocimiento, destacando la importancia de continuar en su construcción conjunta con la participación de las víctimas.

352. El artículo 141 de la Ley Estatutaria indica que los proyectos:

- Deben tener relación con el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, e incluye un listado de proyectos, indicando que deben corresponder al listado o ser compatibles con este.
- Deben ejecutarse en coordinación con la reincorporación de los comparecientes a la vida civil.
- Deben atender a la necesidad de reparación- restauración de las víctimas.
- Deben contemplar un mecanismo de consulta con las víctimas residentes en los lugares donde van a desarrollarse.

353. Por su parte, la Sección con Reconocimiento en sus Lineamientos del 14 de abril de 2020 reiteró que los proyectos, colectivos o individuales, deben cumplir con estos requisitos, y destacó que los proyectos deben incluir una participación personal. Además la Sección, a partir de un cuidadoso análisis de la jurisprudencia constitucional, concluyó que los proyectos deben guardar coherencia con el establecimiento de condiciones de desarrollo e igualdad en las zonas más afectadas por el conflicto, restablecer derechos colectivos de las comunidades afectadas, la reconstrucción de lazos sociales de las comunidades y colectivos afectados, y propender por la realización material del Acuerdo de Paz y del estado Social de Derecho y la superación del conflicto armado interno.

354. De la lectura conjunta de las normas y los lineamientos, la Sala, más allá de los componentes señalados arriba (objetivos, fases, etc.) se enfoca en una valoración sustantiva de la propuesta, retomando los elementos plasmados en los Lineamientos y en la Ley Estatutaria. Estos se pueden sintetizar en los siguientes aspectos concretos de los proyectos: **i)** estar en el listado del artículo 141 o ser compatibles con este **ii)** tener propósito reparador-restaurador, **iii)** incluir una participación personal, y **iv)** contemplar un mecanismo de consulta con las víctimas residentes en los lugares donde vayan a desarrollarse.

355. A continuación, se analiza cada uno de los proyectos presentados por los comparecientes haciendo énfasis a partir de los dos primeros componentes señalados (el listado del artículo 141, y el propósito reparador-restaurador.) Para la Sala, estos dos componentes de manera conjunta apuntan también al cumplimiento de los propósitos

inmateriales de la sanción propia que se refieren al cumplimiento del Acuerdo de Paz, la materialización del Estado Social de Derecho, la superación del conflicto armado interno, el restablecimiento de los lazos sociales y de los derechos colectivos de las comunidades afectadas. En cuanto a los segundos dos componentes (participación personal y mecanismo de consulta), la sala lo valorará de manera transversal a los tres proyectos presentados, luego de la valoración de los proyectos específicos.

356. *Valoración del proyecto denominado “Búsqueda de personas desaparecidas”.* Este proyecto si bien no se encuentra en el listado del artículo 141, tiene una relación directa con los crímenes cometidos y los daños suscitados por las privaciones de la libertad y los delitos que con ellas concurrieron. Así también, la Sala es consciente de que los aportes sobre estas actividades hacen parte del régimen de condicionalidad y del acceso a los beneficios en materia de tratamiento penal especial ofrecidos por la jurisdicción. No obstante, estima la Sala, que sí puede ser tenido en cuenta como sanción todo trabajo adicional a ese llamado pues el proyecto plantea actividades permanentes encaminadas a la búsqueda. En efecto, la búsqueda requiere un trabajo de dedicación prácticamente exclusiva para obtener avances significativos en el esclarecimiento de casos concretos, y así entiende que se desarrollará el proyecto propuesto, con dedicación exclusiva y no solo por demanda de la UBPD. En esta medida encuentra que es compatible con el listado del artículo 141, y cumple con la finalidad de tener un propósito reparador-restaurador.

357. *Valoración del proyecto denominado “Naturaleza, medio ambiente y activación económica”.* Este proyecto, por su contenido, cabe dentro del listado no taxativo de dicho artículo, en particular el que corresponde a programas de protección medio ambiental (LEAJEP Artículo 141 listado A) y de allí deriva su coherencia con los fines del Acuerdo de Paz. En cuanto a su componente restaurativo-reparador, puede corresponder de manera general a las solicitudes hechas por las víctimas de la realización de obras de beneficios de las comunidades afectadas por el conflicto. Este proyecto cabría dentro de la categoría de solicitudes del listado del artículo 141 A, en particular en cuanto se beneficia a la comunidad con actividades de restauración ambiental y ecoturismo. Es convincente el relacionamiento que hacen los comparecientes entre el territorio de La Mojana y los

crímenes cometidos, al señalar los daños ocasionados a los ecosistemas de la región y la consecuente afectación de las comunidades que allí habitan.

358. *Valoración del proyecto transversal denominado “Memoria y dignificación”.* La Sala, con respecto a este proyecto, señala que, si bien contempla actividades que no están planteadas en el listado del artículo 141, si busca recoger las propuestas de las víctimas en torno a la realización de actos con un contenido simbólico, que reiteren la dimensión restaurativa del reconocimiento de la responsabilidad de los comparecientes.

359. La Sala considera que la actividad pedagógica denominada “Pedagogía de la memoria transformativa” planteada como parte del proyecto, debe enmarcarse en la enseñanza a otros comparecientes sobre el proceso de reconocimiento que han tenido los miembros del antiguo Secretariado. Este tipo de actividades requiere necesariamente ser acordadas con las víctimas que deseen participar o estar presentes en ellas, le dan un alto contenido reparador-restaurador a la sanción propia.

360. En efecto, la inclusión de proyectos que son parte de este componente transversal permite a las víctimas establecer el vínculo entre la propuesta y los daños que busca restaurar. Es allí donde además se puede encontrar la manera de dar un manejo oportuno a la tensión que se genera entre los daños individuales y los colectivos al momento de identificar TOAR que efectivamente se dirijan a atender las afectaciones causadas y reconstruir los lazos sociales.

361. *Enfoques de género en los proyectos de sanción propia.* La Ley Estatutaria es clara al indicar que el componente restaurativo de las sanciones propias tiene un enfoque diferencial. Todos los órganos de la JEP tienen la obligación de aplicar una perspectiva diferencial de género, étnico e interseccional conforme al Acuerdo Final de Paz, la Ley Estatutaria y la Ley 1922 de 2018. El artículo 141 lo integra de manera expresa en lo que se refiere a los pueblos indígenas. El artículo 65 de la Ley 1922 de 2018 establece de manera expresa que los proyectos de reparación deben tener un componente restaurativo y con enfoque de género, en particular en los casos relacionados con violencia basada en género. Propone que se incluyan proyectos de sanción que “redignifiquen las actividades

socialmente asignadas a las mujeres y en las que se destruyan los prejuicios y estereotipos machistas.”

362. La Sala considera que, aunque efectivamente los enfoques se enunciaron como transversales en los proyectos de los comparecientes, no se hizo referencia explícita al tipo de actividades que podrían desarrollar en beneficio de las mujeres, teniendo en cuenta que se trata del mayor número de víctimas acreditadas en el Caso. Así, la Sala recalca que las acciones que se adelanten de manera transversal como parte los proyectos requieren no solo la participación de las víctimas, sino una especial atención a que dicha participación se estructure también desde la aplicación de los enfoques diferenciales, por ejemplo, en encuentros privados con víctimas de violencia sexual.

363. *El Mecanismo de Consulta.* La participación de las víctimas va más allá del proceso surtido ante la Sala, ya detallado, donde se da cuenta de la participación de las víctimas y la respuesta que se dio a sus observaciones, comentarios o solicitudes respecto de la definición de las sanciones propias. Las víctimas contaron con la oportunidad procesal de participar específicamente sobre los proyectos de sanción en dos ocasiones separadas: después de la Audiencia de Reconocimiento, y después de la entrega de las propuestas de proyecto de los comparecientes, y así lo hicieron. Resta aún los mecanismos de participación a surtir ante la Sección con Reconocimiento.

364. De manera adicional, el legislador incluye una referencia a un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en los lugares de ejecución del proyecto o con las autoridades indígenas cuando este vaya a ejecutarse en resguardos, para recibir su opinión y constatar que no se oponen su contenido.

365. En una interpretación armónica de lo ordenado por el legislador con la realidad que presenta el diagnóstico de articulación institucional, la Sala considera que existen razones para que este mecanismo sea adelantado en sede del Tribunal, con ejecución por parte de la SEJEP. Las razones son dos. En primer lugar, porque como se ha venido reiterando, actualmente no hay condiciones materiales para dar pie al tipo de proyectos que requiere la consulta de beneficiarios directos, pues estos deben estar focalizados en un

territorio específico, lo que depende en gran medida de la viabilización y el acompañamiento institucional de las propuestas hechas. De hecho, no todos los trabajos planteados por los comparecientes en su proyecto, por razones similares, cuentan con el elemento territorial para poder definir la comunidad y los términos de la consulta. Menos aún si se tiene en cuenta que, en todo caso, el Tribunal podría disponer no realizar las partes o la integralidad del proyecto propuesto. La segunda razón parte de esta última premisa, pues la Sala encuentra que no es procedente consultar proyectos que luego el Tribunal modifique, sustituya o elimine, ya que hacerlo generaría acción con daño creando falsas expectativas en las posibles víctimas beneficiarias al consultar proyectos que aún son objeto de ajuste o rediseño.

b. Valoración del componente de restricción efectiva de libertades y derechos en los proyectos de sanción propia presentados por los comparecientes

366. Habiendo valorado positivamente el componente restaurativo-reparador de los proyectos presentados por los comparecientes, la Sala procede a valorar el componente de la restricción efectiva de libertades y derechos. La sanción propia contempla también un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, que es parte de la valoración que debe hacer la Sala de los proyectos de sanción, anotando que no incluyen de manera expresa dicho componente. Sin embargo, la Ley 1922 de 2018 estableció que la Sección evaluará “la propuesta de la sanción”, que no se limita a los TOAR, sino que incluye también este componente. Así, el Acuerdo Final expresó que las sanciones propias “comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos”, restricción que no debe ser carcelaria. La ley estatutaria de la JEP también estableció que las sanciones propias incluyen las restricciones de libertades y derechos, no carcelarias. Este elemento de la sanción fue reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018 cuando señaló que “es importante que se garanticen tanto las funciones restaurativas como las funciones retributivas de la sanción” y que en ese sentido deben “implicar restricciones efectivas de derechos y libertades, supervisadas estrictamente por la JEP”.

367. Sin embargo, estos componentes no se encontraban presentes en los proyectos presentados. Como ya se señaló, la restricción no carcelaria de libertades y derechos se

materializa en la concreción del lugar de residencia, los horarios de realización de los trabajos, los lugares donde se realizará el componente restaurativo, y quién y de qué modo realizará seguimiento, según lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Estatutaria. Por las razones ya señaladas de ausencia de oferta institucional, no hay en este momento una concreción de estos puntos, si bien es previsible la manera como se podrían materializar si los proyectos son aprobados por el Tribunal de Paz.

368. La Sala desea señalar sin embargo que el estudio comparado de restricciones no carcelarias de libertades y derechos ofrece una gran cantidad de opciones que cumplen con los requisitos planteados por las normas. Diferentes sistemas jurídicos tienen distintas formas de vigilar el cumplimiento de condiciones de la libertad, como puede ser a través de reportes periódicos a una oficina especializada, de reportes y seguimiento electrónico, de reportes sobre el cambio de residencia, limitaciones para la salida del país, e incluso el cumplimiento de restricciones de comportamiento.

369. La Sala considera así, también, que los espacios dialógicos que adelante el Tribunal en el momento que determine el componente restaurativo es posible observar cuáles son esos elementos que para las víctimas podrían ser también centrales en el cumplimiento de la sanción.

370. En todo caso, es claro que tanto el componente de restricción de libertades como el componente restaurativo de las sanciones propias, debe dirigirse, y en todo caso, no obstaculizar de manera desproporcionada, el mayor avance posible en materia de reincorporación. La JEP, en varios de sus pronunciamientos, se refiere al asunto de la reincorporación, reiterando la importancia de la reincorporación derivada de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz. También ha sostenido que la reincorporación se basa principalmente en la confianza hacia el excombatiente.

371. Igualmente, las restricciones que se determinen no deberían generar riesgos adicionales para la seguridad de los comparecientes. La ley estatutaria dispone que no

deberían implicar condiciones de inhabilitabilidad o afectar la dignidad de los comparecientes.

c. Valoración de la proporcionalidad de la sanción propia

372. A continuación, se examinan unas cuestiones relevantes para valorar la proporcionalidad de la sanción propia a imponer a los miembros del último Secretariado de las FARC-EP, en la medida que han reconocido responsabilidad por los crímenes imputados. Son: **i)** la gravedad de la conducta y la responsabilidad del autor, **ii)** el aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, **iii)** la reincorporación política, económica y social, y **iv)** el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo final de paz.

373. *Gravedad de la conducta y responsabilidad del autor.* La proporcionalidad de la sanción tiene una relación directa con la gravedad de la conducta y la responsabilidad del autor, pues en cuanto mayor gravedad y responsabilidad, mayor pena. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se han referido, de manera expresa, a la proporcionalidad de la pena con el bien jurídico afectado y la culpabilidad del autor, y que es importante aplicarla tanto en la pena que se fija, como en la efectividad de su cumplimiento. Este énfasis va más allá del Sistema IADH. El Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) también se ha referido al principio de proporcionalidad de las penas en la justicia de transición desde esta perspectiva. La Corte Penal Internacional (CPI) también ha señalado que la proporcionalidad se mide por el grado de daño causado por el crimen y la culpabilidad del autor, y como tal se relaciona con la duración de la pena.

374. Sin embargo, es necesario destacar que el derecho internacional no impone una tasación de la pena particular, ya que esta corresponde a la política criminal que adopta cada Estado. El Estatuto de Roma brinda expresamente un importante margen de discrecionalidad a los Estados. Es decir, cuando el principio de proporcionalidad estima que se debe imponer una pena proporcional al daño, no orienta hacia una duración de la

pena o una intensidad específica del castigo, sino que indica que debe ser proporcional en relación con los criterios de punición del sistema en cuestión.

375. *Reconocimiento de responsabilidad y aporte a la verdad.* En escenarios de justicia transicional esta necesidad de valoración intrasistema se hace más evidente, pues está en juego la protección constitucional del derecho a la paz. Así, como fue resaltado por la Corte Constitucional en su momento respecto de la ley de Justicia y Paz, y más recientemente en el análisis del modelo de justicia transicional derivada del Acuerdo Final, estos modelos buscan la superación del conflicto y la construcción de la paz.

376. Este equilibrio se encuentra en el aporte a la verdad y el reconocimiento de la responsabilidad que puede conllevar, en un sistema de justicia transicional, una pena reducida o alternativa. La Corte IDH propone que los aportes a la verdad y los grados de reconocimiento pueden ser criterios para recibir estas penas. En Colombia esta relación entre la proporcionalidad de la sanción y el aporte a la verdad se encuentra desde la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2012, que consagró la posibilidad legislativa de implementar diversas medidas transicionales incluyendo sanciones alternativas y extrajudiciales.

377. En la JEP el aporte a la verdad, y el grado y reconocimiento de responsabilidad son determinantes para la dosificación punitiva. En efecto, el Acuerdo Final de Paz estableció que las sanciones propias deben imponerse de conformidad con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la JEP. Con fundamento en el Acuerdo, en el Acto Legislativo No.01 de 2017, y en las leyes de implementación del Acuerdo Final de Paz, se incluyó una mayor delimitación de estas sanciones bajo el principio de justicia restaurativa. Así, el diseño institucional no solo otorga beneficios por el reconocimiento y aporte a la verdad, sino que le dio un valor especial a la garantía de los derechos de las víctimas al determinar que el incumplimiento del régimen de condicionalidad (deber de aportar verdad y contribuir a la reparación) puede implicar la pérdida de beneficios.

378. *Reincorporación política, económica y social.* La satisfacción de los derechos de las víctimas no es el único fin de la sanción en el sistema de la JEP; también lo son la

terminación del conflicto, y la búsqueda de la reconciliación, íntimamente relacionados con el derecho constitucional a la paz, y con su construcción. La relevancia de la reincorporación para la JEP también tiene un impacto fundamental en la valoración del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad también tiene una dimensión de limitación del ius puniendi del Estado, respecto de sanciones desproporcionadas o que puedan afectar las garantías de los comparecientes.

379. La reincorporación se constituye como un objetivo central del Acuerdo para lograr la no repetición, y la terminación del conflicto. En ese sentido, las instituciones públicas, incluida la JEP, deben evitar tomar acciones que impidan la adecuada reincorporación a la vida civil de los comparecientes. Estas acciones también incluyen las sanciones propias, si se quiere, la valoración de las sanciones propias en clave de reincorporación se constituye en un criterio que puede limitar el ejercicio del ius puniendi del Estado. Según el Acuerdo Final de Paz, la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país permite sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, así como demuestra el compromiso de las FARC-EP de contribuir, entre otros fines, a la convivencia pacífica y a la no repetición.

380. La reincorporación de los antiguos miembros de las FARC-EP a la vida civil es un componente principal y transversal del Acuerdo Final de Paz, recogido, concretado y materializado en la Ley 1957, el CONPES 3931 de 2018 y el Decreto 897 de 2017. El proceso de reincorporación guarda una importante relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular respecto de la imposición de sanciones. La Ley 1957 de 2019 establece en su artículo 20, como parte del régimen de condicionalidad en el caso de ex FARC-EP que deben *“contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral”*.

d. Individualización de la sanción propuesta

381. La valoración individual de la sanción se materializa con el establecimiento de horarios, lugares de residencia, tareas y restricciones de la libertad que correspondan a los

dos comparecientes individualizados en esta providencia. Como ya se señaló, la Sala considera que esta materialización corresponde a la Sección con Reconocimiento del Tribunal de Paz. A partir de las consideraciones hechas en el aparte anterior, sobre la valoración de la proporcionalidad de la sanción, la Sala presenta algunos insumos para la dosificación individual de la sanción según la gravedad de las conductas, la responsabilidad individual, el aporte de verdad y reconocimiento y el proceso de reincorporación y cumplimiento de compromisos ante la JEP. También presenta una valoración sobre el rol que cumpliría cada uno en los proyectos aprobados, a partir de la propuesta.

382. La remisión de máximos responsables a la Sección con Reconocimiento conlleva, como beneficio por el aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad, la ejecución de sanciones de 5 a 8 años que deben ser desarrolladas en proyectos delimitados y financiados preferiblemente a partir de la oferta estatal. La dosimetría de la sanción varía entonces entre 5 y 8 años, y también incluye la manera como el Tribunal decida establecer horarios, lugares de residencia, y restricciones de circulación entre otras medidas de restricción de libertades y derechos, así como el contenido mismo de la sanción y el rol del compareciente en la ejecución de esta.

383. En cuanto a la duración, contenido, y restricción de derechos que son parte de la sanción, a los comparecientes les corresponde una duración diferenciada en cuanto tienen distintos niveles de responsabilidad por los crímenes de toma de rehenes y privaciones graves de la libertad, en tanto el compareciente Laureano Serna Abdala era miembro en propiedad del Secretariado de las FARC-EP y la compareciente Ainhoa Etxebarria ostentaba el rol de líder de la cartera de educación del Estado Mayor del Bloque La Mojana.

384. Así, la preservación del principio de proporcionalidad requiere que se hagan distinciones por la modalidad en la que se cometieron los crímenes, en cuyo caso es indispensable señalar que la compareciente Ainhoa Etxebarria no tuvo unidades bajo su mando. En este sentido, la Sección para preservar el principio de proporcionalidad podría considerar una sanción menor para Ainhoa Etxebarria. El compareciente Laureano Serna

ostenta responsabilidad tanto por coautoría mediata como por responsabilidad de mando de la tropa bajo su control.

385. Igualmente, la Sección deberá tener en cuenta consideraciones de salud y seguridad en lo que respecta a la posibilidad de los comparecientes para adelantar proyectos restaurativos.

386. El rol de cada uno variará según el proyecto asignado, ya que es muy posible que para alcanzar la ejecución de sanciones de 5 a 8 años se deban desarrollar varios proyectos que deberán ser delimitados y financiados anualmente, por lo que, la delimitación a detalle por parte de la SRVR de los roles de cada compareciente resulta infructuosa. En el mismo sentido, las restricciones a libertades y derechos también corresponderán a cada proyecto en particular, materializadas en el establecimiento de horarios, lugares de residencia y de restricción de la circulación para los comparecientes.

387. En suma, en lo que respecta a la duración de la sanción, la Sala recomienda que sea de 8 años para Laureano Serna y para Ainhoa Etxebarria recomienda 5 años de sanción por no haber tenido mando sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción.

III.DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones y en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y las Conductas:

RESUELVE

Primero. – **CONCLUIR** la etapa de “reconocimiento de verdad y de responsabilidad” ante esta Sala por parte de los comparecientes individualizados en el Auto No. 023 de 2024 en lo que respecta al caso No.01, continuando sus obligaciones procesales en los demás macrocasos en los que también comparecen.



Segundo. - CONCLUIR que el señor LAUREANO SERNA ABDALA, identificado con C.C. No. 79.276.584 y la señora AINHOA ETXEBARRÍA, identificada con C.E 570.987 han reconocido verdad completa, detallada y exhaustiva y su responsabilidad en los términos del Auto No. 023 de 2024, y, en consecuencia, son elegibles para la imposición de una sanción propia.

Tercero. – PRESENTAR a la Sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz las propuestas de sanción propia con contenido reparador y restaurativo en los términos de la Sección D de esta providencia, para que sean impuestos a los máximos responsables mencionados en el numeral anterior según las funciones y autonomía de la Sección en este sentido.

Cuarto. – ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento dar acceso al expediente digital Legali del Caso No. 01 a la Sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Tribunal para la Paz.

Quinto. – NOTIFICAR esta providencia a los representantes judiciales de las víctimas y a las víctimas acreditadas en el Caso No. 01, teniendo en cuenta los mecanismos previstos en la sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

Sexto. – NOTIFICAR esta providencia a los comparecientes del Caso No. 01 individualizados en el Auto No. 023 de 2024, a través de sus abogados defensores y a la Procuraduría delegada con funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP, de acuerdo con los mecanismos de notificación previstos en la sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022 de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

Séptimo - Comunicar esta decisión a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para lo de sus respectivas competencias.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

